

EL RECURSO EXTRAORDINARIO

ANTE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS

14 DE LA LEY NÚMERO 48 Y 6º DE LA LEY NÚMERO 4055
CON LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA NACIONAL
HASTA EL TOMO 121 DE SUS FALLOS

POR EL DOCTOR

ENRIQUE GARCÍA MÉROU (HIJO)

... We have no more right to decline the exercise of jurisdiction which is given, than to usurp that which is not given.

(Chief Justice Marshall.)

Biblioteca de la Corte Suprema	
Nº Orden	83.085
Unión	5-2335

BUENOS AIRES

IMPRENTA DE CONI HERMANOS

684, PERÚ, 684

1915



ADVERTENCIA

Por la naturaleza y objeto de este trabajo, presentado como tesis a la Facultad de derecho y ciencias sociales para optar al grado de doctor en jurisprudencia, su autor no ha podido proponerse hacer en él una exposición crítica de todas las cuestiones comprendidas en la doctrina y en la aplicación del « recurso extraordinario », y ha tenido que limitarse a examinar los aspectos principales de esa garantía, atendiendo, sobre todo, a la jurisprudencia establecida por la corte suprema, que fija el estado actual del derecho en esta importante institución de nuestro sistema judicial.

Para alcanzar ese resultado, y en la imposibilidad de abordar dentro de las proporciones de este estudio, un análisis comparativo de nuestra jurisprudencia con la de los Estados Unidos sobre cada una de las cuestiones que el

recurso extraordinario origina, se ha dado preferencia en estas páginas a la jurisprudencia nacional, mediante la compulsa, clasificación y cita de las sentencias de la corte suprema de justicia de la nación que se refieren al recurso extraordinario. Dicha jurisprudencia alcanza hasta el tomo 121 de los Fallos, último de la colección que se ha dado a la publicidad, estando hechas todas las citas de primera mano, aún cuando en ciertos casos no se haya adoptado textualmente la redacción del « sumario » que figura en la publicación oficial, por haberlo corregido y modificado para ajustarlo mejor al contenido exacto del fallo respectivo.

E. G. M. (H.)



INTRODUCCIÓN

ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

La constitución argentina define la naturaleza, duración y atribuciones del poder judicial de la nación, y aunque el análisis de las disposiciones que consagra a este poder no está comprendido en los límites del presente trabajo, necesario es indicar brevemente el carácter y lineamientos generales de nuestra justicia federal, como antecedente indispensable para el examen y estudio del recurso *extraordinario* ante la corte suprema, que es una de las formas más amplias en que el poder judicial ejercita sus trascendentales funciones.

El poder judicial de la nación es ejercido por

una corte suprema de justicia y por los demás tribunales inferiores establecidos por el congreso en el territorio de la república. Los miembros de la corte suprema son nombrados por el presidente de la nación con acuerdo del senado, y no pueden optar a ese cargo sin ser abogados de la nación con ocho años de ejercicio y con las calidades requeridas para ser senador. Al tomar posesión de sus puestos deben prestar juramento de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente, en conformidad a lo que prescribe la constitución. Los jueces de la corte suprema y de los tribunales inferiores de la nación conservan sus empleos mientras dura su buena conducta, recibiendo por sus servicios una compensación que determina la ley, y que puede ser aumentada pero no disminuída en manera alguna, mientras permanecen en sus funciones. Para remover de sus cargos a los jueces de la corte suprema y de los demás tribunales inferiores de la nación, se requiere un fallo dictado en juicio público por el senado nacional constituido en tribunal, mediante acusación de la cámara de diputados en las causas de responsabilidad intentadas con-

tra dichos magistrados por mal desempeño o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellas y declarado haber lugar a la formación de causa por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes. El fallo del senado no tiene más efecto, en los casos de condenación, que destituir al acusado y aún declararlo incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la nación, sin perjuicio de las otras sanciones que puedan corresponderle conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Los jueces de las cortes federales no pueden serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia. En ningún caso el presidente de la nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Corresponde a la corte suprema y a los demás tribunales de la nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la constitución y por las leyes de la nación con la reserva hecha en el inciso 11° del artículo 67; y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extran-

jeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano extranjero.

En estos casos la corte suprema ejerce su jurisdicción *por apelación* según las *reglas y excepciones* prescriptas por el congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia es parte, la ejerce *originaria y exclusivamente*.

La excepción relativa al inciso 11° del artículo 67 de la constitución, comprende los códigos civil, comercial, penal y de minería cuya sanción por el congreso no altera las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales según que las personas o las cosas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; vale decir que, aunque dichos códigos tienen supremacía sobre todas las constituciones o leyes provinciales que repugnen a sus preceptos, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 31 de la constitución, no se reputan leyes exclusivas de la nación a los efectos del fuero federal por razón de la materia, ni para someter a la revisión de la justicia federal la interpretación de dichos códigos por los tribunales de otra jurisdicción, cuando la inconstitucionalidad de alguna de sus disposiciones no se hubiere invocado y desestimado en el juicio.

Los primeros ensayos de organización del poder judicial en la república que encontramos en las constituciones de 1819 y 1826, se inspiraban ya visiblemente en la constitución de los Estados Unidos. Los constituyentes de 1853 trataron de ajustarse mejor a la fórmula americana; pero la verdadera adaptación del sistema judicial de los Estados Unidos fué la que quedó sancionada en los textos actuales de la constitución, por la convención del estado de Buenos Aires de 1860, y por la convención nacional *ad hoc* que se pronunció sobre las reformas proyectadas. Así se ha trasladado a nuestro país casi literalmente los fundamentos esenciales de aquel sistema, con diferencias que no alteran sus rasgos característicos, como clásico modelo

de un régimen original e insuperable en la historia del gobierno federativo.

Durante el período de la confederación, el congreso que funcionaba en el Paraná, quiso aplicar en todas sus partes el sistema de la constitución de 1853, que creaba la corte suprema de justicia compuesta de nueve jueces y dos fiscales. Por la ley de 6 de septiembre de 1858, creó cinco cortes de distrito, una de las cuales correspondería a la provincia de Buenos Aires «luego de incorporada», y uno o más juzgados federales en cada provincia.

Pero esa ley nunca tuvo aplicación, y sólo después de la organización de la república fué dictada la primera ley orgánica de la justicia federal en 16 de octubre de 1862 (ley n° 27). Las disposiciones de dicha ley han sido sucesivamente adicionadas y modificadas por gran número de leyes generales y particulares, que han venido completando y perfeccionando hasta el presente la organización del poder judicial, a saber: las leyes números 42 y 43 de 26 de agosto, y número 48 de 14 de septiembre de 1863; las leyes número 927 de 3 de septiembre y número 935 de 24 de septiembre de 1878; las

leyes número 1467 de 18 de septiembre y número 1532 de 16 de octubre de 1884; la ley número 2662 de 9 de noviembre de 1889; la ley número 2735 de 8 de octubre de 1890; la ley número 3367 de 8 julio de 1896; la ley número 3575 de 8 de octubre de 1897; las leyes número 3900 de 9 de enero y número 3952 de 6 de octubre de 1900; las leyes número 4055 de 11 de enero y número 4074 de 4 de junio de 1902; la ley número 4162 de 8 de enero de 1903; la ley número 5011 de 4 de octubre de 1906; las leyes número 7055 de 17 de agosto (art. 4º) y número 7099 de 27 de septiembre de 1910; y la ley número 8843 de 23 de diciembre de 1911.

Con arreglo a las leyes que quedan citadas, prescindiendo de las relativas a procedimientos y a detalles puramente reglamentarios, el poder judicial de la nación es actualmente ejercido en la siguiente forma:

1º Por la corte suprema de justicia, compuesta de cinco ministros y un procurador general;

2º Por cinco cámaras federales de apelación, una compuesta de cinco miembros con asiento en la capital federal, asimilada a una provincia

por la ley número 1467, y las cuatro restantes, compuestas de tres miembros, con asiento respectivamente en las ciudades de La Plata, Rosario, Paraná y Córdoba ;

3° Por tres jueces de sección en la capital, dos jueces de sección en cada una de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y un juez de sección en cada una de la demás provincias ;

4° Por un juez letrado en cada uno de los territorios nacionales, a excepción del de Los Andes que corresponde a la jurisdicción del juez federal de la provincia de Salta.

La corte suprema conoce *originaria y exclusivamente* :

1° De las causas que versan entre dos o más provincias, y las civiles que versan entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros ;

2° De aquellas que versan entre una provincia y un estado extranjero ;

3° De las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación, a los individuos de su familia, o a sus sirvientes domés-

ticos, del modo que una corte de justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes ;

4º De las causas en que se versen los privilegios y exenciones de los cónsules y vicecónsules extranjeros, en su carácter público.

En grado de *revisión* de las causas que quedan expresadas en los incisos anteriores : a) cuando la sentencia definitiva de la corte suprema hubiese recaído sobre cosas no pedidas por las partes ; b) cuando en ella se omitiese proveer sobre alguno de los capítulos de la demanda o de la reconvencción si la hubiese ; c) cuando después de pronunciada la sentencia definitiva, la parte perjudicada hallase o recobrase documentos decisivos o ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiese dictado ; d) cuando la sentencia definitiva se hubiese pronunciado en virtud de documentos reconocidos o declarados falsos, ignorándolo el recurrente, o cuya falsedad se reconociere o declarare después ; y e) cuando habiéndose dictado en virtud de prueba testimonial o de posiciones, alguno de los testigos o la parte absolvente fueren condenados como falsarios en sus declaraciones.

La corte suprema conoce en última instancia, por *apelación* y *nulidad* de las sentencias definitivas de las cámaras federales de apelación, en los siguientes casos :

1° De las que fueren dictadas en las demandas contra la nación, a que se refiere la ley número 3952 de octubre 6 de 1900 ;

2° De las que recayesen sobre asuntos fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos ; por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos ; y en general, en todas aquellas causas en que la nación o los recaudadores de sus rentas sean parte actora, siempre que el valor disputado excediese de cinco mil pesos ; no comprendiéndose en la precedente disposición las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la capital y territorios nacionales, y no generales para la nación ;

3° De las que recayesen en todas las causas a que dieran lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque,

legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles;

4° De las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros;

5° De las dictadas en cualquier causa criminal por los delitos de traición, rebelión, sedición, y en los de homicidio, incendio o explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros; y en todos aquellos casos en que la pena impuesta excediere de diez años de presidio o penitenciaría.

Hay que tener presente a este respecto, que todas las resoluciones de la cámara federal de apelaciones de la capital en causas criminales comprendidas en los incisos 2° y 5° que preceden, quedan exceptuadas de la jurisdicción apelada de la corte suprema, en virtud de que el artículo 4° de la ley número 7055 establece que las referidas resoluciones de dicha cámara *causarán ejecutoria en materia criminal*, no pudiendo en consecuencia apelarse de ellas sino cuando proceda el « recurso extraordinario ».

En los casos en que, con arreglo a lo establecido en el artículo 551 del código de procedi-

mientos en lo criminal, proceda el recurso de revisión contra las sentencias de las cámaras federales, la corte suprema conoce de dicho recurso por apelación.

Conoce igualmente de los recursos que se promovieren por retardo o denegación de justicia en los casos que quedan enumerados.

Conoce, por último, de los « recursos extraordinarios » a que se refiere el presente estudio, en todos los casos en que son procedentes, como se expondrá y desarrollará más adelante.”

La corte suprema dirime las cuestiones de competencia que se susciten : *a)* entre las cámaras federales de apelación ; entre una de estas cámaras y un juez o tribunal superior de provincia o de la capital ; *b)* entre un juez de sección y un juez o tribunal superior de la capital o de una provincia ; *c)* entre un juez letrado de territorio nacional y un juez o tribunal superior local de la capital o de una provincia ; *d)* entre un juez o tribunal superior local de la capital y un juez o tribunal superior de provincia ; entre los tribunales superiores de dos provincias ; entre jueces de distintas provincias ; y entre un

tribunal militar y uno de cualquiera otra jurisdicción nacional o provincial.

La corte tiene por la constitución la facultad de dictar su reglamento interior y económico y nombrar a todos sus empleados subalternos, y ejerce, por mandato de la ley, superintendencia sobre las cámaras federales, jueces de sección, jueces letrados de territorios nacionales y demás funcionarios de la justicia federal, debiendo dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de justicia.

Las cámaras federales conocen en grado de apelación en *segunda instancia*, en todos los casos antes enumerados en que se concede recurso de apelación y nulidad de sus sentencias para ante la corte suprema.

Conocen en grado de apelación y en *última instancia* :

1º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de sección en las causas de su competencia en que no estuviere expresamente autorizado el recurso de apelación y nulidad para ante la corte suprema, y siempre que el valor disputado, en las causas civiles o comerciales, exceda de quinientos pesos;

2º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces letrados de los territorios nacionales, aunque fuesen dictadas en causas criminales del fuero común;

3º De los recursos por retardación o denegación de justicia por parte de los jueces de sección o de los letrados de los territorios nacionales;

4º De las consultas que elevaren los jueces letrados de los territorios nacionales en los casos del artículo 42 de la ley orgánica de dichos territorios;

5º *La cámara federal de la capital* conoce también en última instancia, de las causas criminales que le corresponden en grado de apelación.

Contra las sentencias dictadas por las cámaras federales en los casos de los cinco incisos anteriores, sólo se concede el recurso de revisión autorizado por el artículo 551 del código de procedimientos en lo criminal, y el recurso extraordinario del artículo 6º de la ley número 4055 y 14 de la ley número 48.

Las cámaras federales conocen de las cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces de sección, entre los jueces letrados de

los territorios nacionales y entre éstos y aquéllos; dictan su reglamento interno con aprobación de la suprema corte, y sin perjuicio de la superintendencia de ésta, ejercen superintendencia sobre sus secretarios y demás empleados subalternos.

Los jueces nacionales de sección conocen en primera instancia, de todos aquellos asuntos que con arreglo a la constitución correspondan a la justicia nacional, en los siguientes casos :

1º Los que sean regidos especialmente por la constitución nacional, los tratados públicos con las naciones extranjeras, las leyes nacionales y que sancionare el congreso, con excepción de las que se refieren al gobierno y administración de la capital ;

2º Las causas civiles en que sean partes un vecino de la capital federal o provincia en que se suscite el pleito y un vecino de otra, o en que sean partes un ciudadano argentino y un extranjero; exceptuándose aquellas causas de jurisdicción concurrente en las que el valor del objeto demandado no exceda de quinientos pesos, cuando, por otra parte, el conocimiento del caso caiga bajo la jurisdicción de la justicia de paz

de la provincia respectiva o de la capital, según las leyes de procedimientos vigentes en ellas. También se hallan excluidos de la jurisdicción de los jueces nacionales, los juicios universales de concurso de acreedores y de sucesión, los cuales corresponden en el territorio de la república, a los jueces respectivos de aquella provincia en la que el fallido tuviere su principal establecimiento al tiempo de la declaración de quiebra, o en la que, según las disposiciones del código civil, debiera abrirse la sucesión;

3º Las que versen sobre negocios particulares de cónsules o vicecónsules extranjeros;

4º Las cuestiones que se susciten entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del gobierno nacional;

5º Las acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos, por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos; y, en general, todas aquellas causas en que la nación o un recaudador de sus rentas sea parte; exceptuando las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclu-

sivos para la capital y no generales para la nación ;

6° Las acciones civiles que se deduzcan contra la nación en su carácter de persona jurídica conforme a la ley número 3952, previa justificación de haber precedido la reclamación administrativa de los derechos controvertidos ante el poder ejecutivo y su denegación por parte de éste, o el transcurso de los plazos fijados en el artículo 2° de dicha ley ;

7° Las acciones contra la nación deducidas con la competente autorización legislativa ;

8° Todas las causas a que den lugar los apremios o embargos marítimos en tiempo de guerra ;

9° Las que se originen por choques o averías de buques, por asaltos hechos o por auxilios prestados en alta mar, o en los puertos, ríos y mares en que la república tiene jurisdicción, correspondiendo a la competencia del juez de sección de la capital si estuviesen más inmediatos a ésta ;

10° Las que se originen entre los propietarios e interesados de un buque, sea sobre su posesión o sobre su propiedad ;

11° Las que versen sobre la construcción o reparos de un buque; sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadías; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería gruesa y simple; sobre contratos a la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embargo de buques o penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán, tripulantes y, en general, sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo;

12° Todas las causas de contrabando y todas las causas criminales cuyo conocimiento compete a la justicia nacional, a saber :

a) Los crímenes cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros, correspondiendo conocer al juez de sección del primer puerto argentino a que arribase el buque o al de la capital cuando

arribasen directamente a los puertos de ésta;

b) Los delitos cometidos en los ríos, islas y puertos argentinos, correspondiendo su juzgamiento al juez cuyo asiento se halle más inmediato al lugar donde fuese cometido el hecho, o aquél en cuya sección se encuentren los criminales, a menos que en este último caso otro juez federal hubiese prevenido en el asunto;

c) Los crímenes cometidos en el territorio de las provincias o de la capital en violación de las leyes nacionales de carácter general para la república, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas, u obstruyan o corrompan el buen servicio de sus empleados, o estorben o falseen las elecciones nacionales o representen falsificación de documentos nacionales o de moneda nacional, o de billetes de banco autorizados por el congreso, correspondiendo su juzgamiento en la sección judicial en que se cometieren;

d) Los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, correspon-

diendo su juzgamiento a los jueces de sección allí existentes;

13° Las cuestiones que se susciten entre los individuos de la tripulación de un buque mercante o entre alguno de ellos y su capitán u otros oficiales del mismo, y cuya importancia no pase de cincuenta pesos, serán decididas en juicio verbal por el capitán del puerto donde se halle el buque, con apelación para ante el juez de sección que conocerá también en juicio verbal.

Los jueces letrados de los territorios nacionales duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos, y conocen y resuelven en las causas que en la ley número 1898 de organización de los tribunales de la capital se atribuyen a los jueces en lo civil, comercial, correccional y criminal, y también las que correspondan al juez federal.

De la sentencia que dictan los jueces letrados en primera instancia, puede apelarse ante la cámara federal que corresponda.

Los jueces letrados deben elevar en consulta a la cámara correspondiente, aun cuando no se interponga apelación, todas las sentencias defi-

nitivas en que sean parte el fisco, menores, incapaces, etc., así como en los casos comprendidos en la ley número 3952 sobre demandas contra la nación.

Conocen también en grado de apelación y en última instancia, de las sentencias dictadas por los jueces de paz de la respectiva gobernación, y ejercen sobre estos jueces la superintendencia que por la ley orgánica corresponde a las cámaras de apelación de la capital.

Examinada en conjunto la organización actual de nuestra justicia federal, sin entrar en consideraciones extrañas a la índole de esta reseña, ella difiere de la organización judicial de los Estados Unidos, últimamente modificada por la sanción del *judicial code* en 3 de marzo de 1911, que ha suprimido los antiguos tribunales de circuito, creando una corte de comercio y una corte de apelaciones de aduana. Los juzgados de distrito han venido a ser los grandes tribunales federales de primera instancia de los estados, pudiendo apelarse de sus resoluciones a la corte de apelación de circuito o a la corte suprema.

La jurisdicción de nuestras cámaras federa-

les ha sido considerablemente extendida y principalmente la de la capital, aumentando el número de causas en que sus resoluciones son definitivas.

Refiriéndose a la limitación de la jurisdicción apelada de la corte suprema que dicha organización ha producido, la misma corte ha recordado que aquella jurisdicción es ejercida según las *reglas y excepciones* que prescriba el congreso, de suerte que este poder ha podido restringirla, como lo ha hecho en la ley número 4055, en uso de facultades legislativas indiscutibles, « aun cuando la corte suprema argentina haya quedado como tribunal de apelación, con poderes menos amplios que los de la corte suprema de los Estados Unidos, que debe su origen a preceptos constitucionales que han servido de fuente a los nuestros (art. 3º, pár. 1 y 2, constitución de Estados Unidos; *Judicial code*, sec. 128, 238 y sig.) ». (Fallos de la suprema corte, t. 120, pág. 366.)

Pero cualquiera que sea el juicio que se forme sobre las modificaciones de nuestro régimen judicial introducidas por la ley número 4055, la importancia y eficacia del poder judicial como

conservador de las garantías constitucionales no han disminuído, porque el *recurso extraordinario* que constituye el objeto del presente estudio, basta para asegurar los grandes fines que la constitución le atribuye.

EL RECURSO EXTRAORDINARIO

ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CAPÍTULO I

TEORÍA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

En su famosa obra sobre la *República americana*, habla Bryce de un inglés inteligente que, habiendo oído que la suprema corte federal fué creada para proteger la constitución, e investida de la autoridad necesaria para anular las leyes repugnantes a sus preceptos, pasó dos días buscando en el texto de la constitución de los Estados Unidos las disposiciones señaladas a su admiración, y naturalmente, no pudo encontrarlas. Lo mismo le habría pasado al inglés del cuento examinando la constitución argentina que, al igual que su modelo, no contiene una sola palabra al respecto.

Pero este silencio que, según lo observa el mismo Bryce, depende de la plausible concisión

de la ley fundamental, concebida en términos generales que sientan un corto número de amplios principios, no es más que aparente, porque toda la construcción admirable de la doctrina constitucional, elaborada en ciento treinta años de estudio y experimentación, por eminentes congresos, magistrados y publicistas, no es sino la aplicación lógica y necesaria de los principios establecidos en la constitución : la adopción de los medios razonables para desentrañar el contenido de esos principios en la única forma práctica que puede asegurar su eficacia, salvando los escollos de interpretaciones que ampliaran o restringieran, indebidamente, el perfecto equilibrio de soberanías y de poderes que caracteriza el régimen de las grandes repúblicas federativas de América.

Tal sucede, especialmente, en el caso del recurso extraordinario ante la corte suprema. Ni la constitución de los Estados Unidos ni la argentina, definen ni califican este recurso, cuyo mismo nombre de *extraordinario* es una creación feliz, extraña de todo punto a los textos constitucionales de uno u otro país. Tal recurso, sin embargo, está íntegra y necesariamente conte-

nido e implicado en las cláusulas expresas de las constituciones americanas, que establecen las atribuciones de la justicia federal como poder político moderador del legislativo y del ejecutivo, y conservador de las garantías constitucionales de la paz interior y del equilibrio interprovincial.

La constitución de los Estados Unidos declara, en efecto, que « esta constitución y las leyes de los Estados Unidos que en virtud de ella se dicten; y todos los tratados hechos o que se hicieren, bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la ley suprema del país; y los jueces de todos los estados están obligados a someterse a ella no obstante cualquier cosa que en contrario contengan la constitución o leyes de cada estado »; disposición adoptada por el artículo 31 de la constitución argentina, en los siguientes términos: « Esta constitución, las leyes de de la nación que en su consecuencia se dicten por el congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes

o constituciones provinciales » (salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859).

Para asegurar esta supremacía y dar al gobierno federal los medios de cumplir sus fines por autoridad propia, se ha creado un poder judicial dotado de atribuciones coextensivas con las de los demás poderes nacionales, sobre todas las materias de gobierno colocadas bajo la autoridad exclusiva de la nación.

Así, el artículo 3º, sección 2ª, de la constitución de los Estados Unidos, establece que « el poder judicial será extensivo a *todos los casos, en derecho y equidad, que ocurran bajo esta constitución, las leyes de los Estados Unidos y los tratados hechos o que se hicieren bajo su autoridad*; a todos los casos que afecten a embajadores, otros ministros públicos y cónsules; a todos los casos de almirantazgo y jurisdicción marítima; a las controversias en que los Estados Unidos sean parte; a las controversias entre dos o más estados; entre un estado y ciudadanos de otro estado; entre ciudadanos de diferentes estados; entre ciudadanos del mismo estado que recla-

men tierras en virtud de concesiones de diferentes estados; y entre un estado o sus ciudadanos, y estados, ciudadanos o súbditos extranjeros. En todos los casos que afecten a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y aquellos en que un estado sea una de las partes, la suprema corte tendrá jurisdicción originaria. En todos los otros casos antes mencionados, la suprema corte tendrá *jurisdicción apelada* tanto en la ley como en el hecho (es decir en las cuestiones de hecho y en las de derecho), *con las excepciones y bajo los reglamentos que el congreso estableciere* ».

Examinadas estas disposiciones fundamentales, idénticas en lo substancial a las de los artículos 100 y 101 de nuestra constitución, cuyo texto queda reproducido en la « introducción » de este trabajo, se advierte a primera vista que la acción de la justicia federal, en su mayor generalidad, asume dos formas distintas.

Una de esas formas es la que lógicamente podría llamarse *ordinaria*, sin perjuicio del carácter de *excepción* que la jurisdicción federal reviste, en todos los casos, con respecto a la justicia *común* ejercida por los tribunales locales.

Esa primera forma comprende todas las causas en que la corte suprema ejerce una jurisdicción originaria y exclusiva y todas las causas del fuero federal por razón de la materia o de las personas, en que los tribunales federales de cualquier jerarquía y grado ejercen también una jurisdicción propia. En todos estos casos — dentro del principio brillantemente expuesto por Story y consagrado por la jurisprudencia, de que el congreso debe investir con « la totalidad del poder judicial », a los tribunales superiores e inferiores de la nación — cada uno de éstos conoce, en los límites de su competencia, en primera o segunda instancia, con o sin apelación ante la corte suprema, de las causas que la ley le atribuye.

El examen de esta jurisdicción federal ordinaria, que los tribunales y juzgados nacionales ejercen por autoridad propia bajo las disposiciones de las leyes orgánicas, no está comprendido en el presente trabajo; pero fuera de esa jurisdicción, queda el enorme número de causas de jurisdicción concurrente y de jurisdicción local, en que tribunales que no son federales tienen que pronunciarse o se pronuncian sobre puntos

regidos por la constitución, las leyes nacionales, con la reserva del inciso 11° del artículo 67, o los tratados con las naciones extranjeras.

De allí nace, imprescindiblemente, la necesidad de crear una jurisdicción *extraordinaria* comprendida en la *jurisdicción apelada* de la corte suprema, para someter en circunstancias y bajo condiciones determinadas a la revisión de este tribunal, las resoluciones relativas a cuestiones de carácter federal, de todos los tribunales del país cuyas decisiones hagan ejecutoria.

Esta jurisdicción importantísima, verdadera salvaguardia de la supremacía de la constitución y de las leyes nacionales, es la que se confiere a la suprema corte de los Estados Unidos y a nuestra corte suprema, para conocer, por medio del *recurso extraordinario*, de las sentencias definitivas de cualquier tribunal o juzgado de la república que resuelva una « cuestión federal » en contra de derechos invocados ante ellos, al amparo de la constitución, de las leyes nacionales propiamente dichas o de los tratados.

Tal recurso es *extraordinario* porque no se

concede sino en casos especial y taxativamente enumerados en la ley; porque no se encuentra establecido como consecuencia de una gradación jerárquica entre tribunales de una misma naturaleza o carácter, pues se da en todas las jurisdicciones; y porque dicho recurso no importa una tercera instancia de plena apelación, sino una apelación circumscripita a la cuestión federal relativa a derechos, garantías, privilegios o exenciones de la constitución, tratados o leyes nacionales, que se hayan reclamado en juicio por parte legítima, decidida en contra de esos privilegios o garantías por el tribunal o juez de jurisdicción nacional o provincial llamado a pronunciarse definitivamente sobre la causa.

Comprendida virtual, ya que no expresamente, en el proyecto de constitución sometido a la ratificación de los estados de la unión americana, el simple anuncio de esta jurisdicción extraordinaria despertó hondos celos y provocó vehementes resistencias del localismo, temeroso de ver amenguado o disminuído por el congreso el régimen de los estados.

La gran voz de Hamilton se anticipó en ésta

como en tantas otras cuestiones, a las enseñanzas del porvenir.

« La creación de un nuevo gobierno — decía en el número 82 del *Federalista* — cualquiera que sea la prudencia y sabiduría que distingan la obra, no puede dejar de originar cuestiones intrincadas y sutiles, y puede muy especialmente esperarse que ellas nazcan del establecimiento de una constitución fundada en la incorporación total o parcial de cierto número de soberanías independientes. El tiempo únicamente puede madurar y perfeccionar un sistema tan complicado, fijar el sentido de todas sus partes y estrecharlas en un *todo* armonioso y consistente.

« Tales cuestiones han surgido, desde luego, contra el proyecto propuesto por la convención y especialmente en lo que concierne al departamento judicial. Las principales de éstas se refieren a la situación de los tribunales de los estados, respecto a las causas que habrán de someterse a la jurisdicción federal. ¿Será ésta exclusiva o poseerán aquellos tribunales jurisdicción concurrente? Si fuere lo segundo ¿en qué relación se colocarán aquéllos en cuanto a los tribunales nacionales? »

Después de algunas consideraciones encaminadas a establecer que los estados conservarían todos los poderes *preexistentes* que no fueran delegados expresamente a la cabeza federal, sentando como regla que los tribunales de los estados *retendrían* la jurisdicción de que gozaban, a menos de que se hubiese dispuesto de ella en alguno de los modos enumerados en la constitución, agrega :

« No me propongo sostener que los Estados Unidos, legislando sobre los objetos encomendados a su dirección, no puedan someter la decisión de causas provenientes de una reglamentación especial, a los tribunales federales exclusivamente, si tal medida fuese considerada conveniente; pero sí sostengo que los tribunales de los estados no serán privados de parte alguna de su jurisdicción sino en lo referente a apelación de sus decisiones; siendo aun de opinión que en todo caso en que no fuesen expresamente excluidos por leyes futuras de la legislatura nacional, ellos podrán conocer naturalmente de las causas a que esas leyes diesen origen. Esto lo infiero de la naturaleza del poder judicial y del carácter general del proyecto de la conven-

ción. El poder judicial de todo gobierno se extiende más allá de sus propias leyes locales o municipales : en materia civil comprende todos los asuntos litigiosos entre partes sometidas a su jurisdicción, aun cuando los motivos de controversia se refieran a las leyes de puntos los más remotos del globo. Las del Japón, no menos que las de Nueva York, pueden suministrar objetos de discusión legal en nuestros tribunales. Si además de esto, consideramos a los gobiernos de los estados y al gobierno nacional, como sistemas afines y partes de un mismo todo — según lo son en realidad — debemos concluir que los tribunales de los estados tendrán una jurisdicción concurrente en todos los casos originados por las leyes de la unión, en que no exista una prohibición expresa.

« Aquí surge otra pregunta : ¿ qué relación subsistiría entre los tribunales nacionales y los de los estados en estos casos de jurisdicción concurrente ? Contesto que seguramente se concederá la apelación de éstos a la corte suprema de los Estados Unidos. La constitución, en términos directos, otorga jurisdicción de apelación a la corte suprema en todos los casos enumera-

dos de conocimiento federal en que no ejerce jurisdicción originaria, sin una sola expresión que limite el efecto de esos recursos a los tribunales inferiores federales. Los objetos de la apelación, no los tribunales de los que haya de deducirse, es lo que únicamente se toma en cuenta. Por esta circunstancia y por la naturaleza de las cosas, debe interpretarse que la jurisdicción apelada de la corte suprema es extensiva a los tribunales de los estados. De no ser esto así, debería excluirse a los tribunales locales de toda jurisdicción concurrente en materias de la competencia nacional: de otro modo, la autoridad judicial de la unión podría ser eludida a voluntad de cualquier demandante o demandado. Ninguna de estas consecuencias podría admitirse sin una necesidad evidente: la última sería completamente inaceptable, porque frustraría algunos de los objetos más importantes y reconocidos del gobierno propuesto, y embarazaría esencialmente sus medidas. Nada veo que suponga esa necesidad. Como ya se ha hecho notar, los sistemas nacional y de los estados han de considerarse como un todo. Los tribunales de éstos, consiguientemente, serán au-

xiliares naturales para la ejecución de las leyes de la unión, y la apelación de sus sentencias debe naturalmente hacerse ante el tribunal que está destinado a unir y uniformar los principios de la justicia nacional y las reglas de las decisiones nacionales. La intención evidente del plan de la convención, es que todas las causas de las categorías en ella especificadas por importantes razones de interés público, reciban su resolución en primera o en última instancia en los tribunales de la unión. Limitar, por lo tanto, las expresiones generales que otorgan a la corte suprema una jurisdicción apelada, a las apelaciones interpuestas en los tribunales federales, en vez de hacerlas también extensivas a los tribunales de los estados, sería restringir la latitud de los términos, con subversión de lo que implican y contra toda sólida regla de interpretación. »

Así, cuando el congreso de los Estados Unidos, aceptando estas profundas consideraciones, reglamentó en la sección 25 del *judiciary act* de 24 de septiembre de 1789, el recurso extraordinario ante la suprema corte, contra las sentencias finales de los tribunales de estado

que negaren o desconocieren una garantía de carácter federal invocada en el juicio, esa disposición fué considerada como un triunfo de la centralización federalista y las tendencias particularistas de los estados se alzaron contra ella.

So color de que la constitución de los Estados Unidos no había conferido expresamente a la suprema corte jurisdicción apelada sobre los tribunales de los estados, — aunque esa jurisdicción fué silenciosamente consentida en los primeros tiempos, — el estado de Virginia no solamente cuestionó dicha jurisdicción en términos formales, sino que llegó a desconocerla y negarla en absoluto. Se necesitó una repetición de instancias en que la suprema corte reivindicó su autoridad dentro de ciertos límites bien definidos, para convencer al país de que ese poder existía.

Los opositores a la sección 25 del *judiciary act*, creían que esa disposición había sido dictada con el propósito de hacer de las judicaturas de los estados, tribunales subalternos del gobierno central, porque los poderes de este gobierno pueden ser judicialmente puestos en cuestión por muchas vías y en muchas ocasio-

nes. Carson, en su historia de la corte suprema de los Estados Unidos, recuerda que el historiador Enrique Adams considera que el juez presidente Marshall alcanzó una de sus más grandes victorias, al obtener que el juez Story, miembro del partido republicano llevado a la corte en 1811 precisamente con el objeto de contradecir su autoridad, pronunciara el fallo del tribunal en la causa de *Martín v. Hunter's. Lessee* (1, Wheaton 304, año 1816), por el cual fué rechazada la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la corte del estado de Virginia con respecto a la sección antes citada de la ley judicial.

Este fallo, redactado por el juez Story, que fué el primero de los que dió este magistrado en materia constitucional, figura con razón entre las páginas clásicas de la jurisprudencia americana, al lado de las mejores sentencias de Marshall, y el mismo Story ha reproducido sus partes esenciales en el tomo 2º de sus *Comentarios* (pár. 1731 a 1747).

La mencionada sentencia señala las relaciones de los estados con el gobierno federal, y establece que, aun cuando la soberana autoridad

de aquellos se halla únicamente afectada en la medida en que ha sido delegada, la constitución no funciona para crear una simple confederación y conglomerado de soberanías separadas, sino que contiene en sí misma eminentes y supremos poderes renunciados por los estados y por el pueblo para beneficio y satisfacción común de todos los que se hallan bajo este gobierno, — y que entre los poderes así cedidos, se encuentra el de la jurisdicción apelada de la suprema corte en todos los casos enumerados en en la cláusula que instituye el poder judicial.

« El poder apelado, decía Story en dicha sentencia, no está limitado en particular por los términos del artículo tercero a ciertos tribunales. Las palabras usadas son: « El poder judicial (que incluye el poder apelado) será extensivo a todos los casos, etc. » y « en todos los otros casos antes mencionados, la suprema corte tendrá jurisdicción apelada ». Es pues el *caso* y no el *tribunal*, lo que da la jurisdicción. Si el poder judicial se extiende al caso, sería en vano escudriñar en la letra de la constitución alguna calificación relativa al tribunal en que se halla pendiente. A los que afirman tal calificación,

incumbe pues mostrar su existencia por necesaria implicancia. Siendo claro y preciso el texto, ninguna restricción de su llano y manifiesto sentido puede admitirse, a menos de que la inferencia fuera irresistible. Si la constitución pretende limitar la jurisdicción apelada a casos pendientes en los tribunales de los Estados Unidos, se seguiría necesariamente que la jurisdicción de dichos tribunales, en todos los casos enumerados en la constitución, sería excluyente de la de los tribunales de los estados. ¿Cómo, de otra manera, se extendería la jurisdicción a todos los casos ocurrentes bajo la constitución, leyes y tratados de los Estados Unidos, o a todos los casos de almirantazgo y jurisdicción marítima? Si algunos de estos casos pudieran ser acogidos por los tribunales de los estados, y no existiese respecto de ellos jurisdicción federal apelada, entonces el poder apelado no se extendería a todos sino a algunos casos. Si los tribunales de los estados pudieran ejercer sin contralor jurisdicción concurrente en todos o algunos de la otra clase de casos señalados en la constitución, entonces la jurisdicción apelada de los Estados Unidos podría con respecto a tales

casos, carecer de existencia real, contra la mente manifiesta de la constitución. Bajo estas circunstancias, para hacer efectivo el poder judicial, debe interpretarse que es exclusivo, y esto no sólo cuando el *casus fæderis* surgiere directamente, sino también cuando surgiere incidentalmente en causas pendientes en tribunales de los estados. »

Aunque amplia y brillantemente discutida por el juez Story en la causa citada, la cuestión no quedó finalmente resuelta hasta que en el caso de *Cohens v. The State of Virginia* (6, Wheaton 264, año 1821), la suprema corte, con efecto decisivo y de una manera que desde aquella época ha sido siempre consentida por el país, reivindicó y sostuvo su jurisdicción extraordinaria con arreglo a la sección 25 de la ley judicial.

La sentencia de la corte en esta causa, figura entre las más grandes producciones de Marshall, y queda en la historia constitucional como la más clara, vigorosa y magistral exposición de la teoría del recurso extraordinario, asentada en fundamentos incommovibles, fortalecidos en un siglo de experiencia constitucional.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS AL RECURSO EXTRAORDINARIO

La sección 25 de *judiciary act* de 24 de septiembre de 1789 que reglamentó el recurso extraordinario contenido en la constitución por necesaria implicancia, con la modificación introducida por la ley de 18 de febrero de 1875, dice así :

« Toda sentencia o auto definitivo, en cualquier juicio ante el más alto tribunal de un estado en el cual pueda tener lugar la decisión del juicio, cuando se ha puesto en cuestión la validez de un tratado o ley de los Estados Unidos o una autoridad ejercida bajo tal tratado o ley, y la decisión sea contra su validez ; o cuando se pone en cuestión la validez de una ley de un estado o de una autoridad ejercida en nombre

de algún estado, bajo la pretensión de ser repugnante a la constitución, tratados o leyes de los Estados Unidos, y la decisión sea en favor de su validez; o cuando algún título, derecho, privilegio o exención es reclamado bajo la constitución o algún tratado o ley de los Estados Unidos o de alguna comisión tenida o autoridad ejercida a nombre de los Estados Unidos, y la decisión sea contra el título, derecho, privilegio o exención especialmente invocado o pretendido por cualquiera de las partes bajo tal constitución, tratado, ley, comisión o autoridad, — pueden ser reexaminados y revocados o confirmados por la suprema corte por medio de un recurso de error. El recurso tendrá el mismo efecto que si la sentencia o auto que causa agravio hubieran sido dados o decretados en un tribunal de los Estados Unidos. La suprema corte puede revocar, modificar o confirmar el fallo o auto de dicho tribunal de estado, pudiendo, según su discreción, hacer ejecutar la decisión ó devolverla al tribunal del cual se trajo la causa por el recurso » (*Compiled Statutes*, sec. 709).

El código judicial de 1911 reproduce tex-

tualmente en su sección 234, la precedente disposición de la ley judicial de 1789 reformada en 1875. En la sección 235 concede igualmente el recurso extraordinario ante la suprema corte contra las sentencias de los tribunales de distrito, incluyendo los de Hawai, fuera de otros casos ordinarios de apelación, « en todo caso que envuelva la interpretación o aplicación de la constitución de los Estados Unidos ; en todo caso en que la inconstitucionalidad de alguna ley de los Estados Unidos, o la validez o interpretación de algún tratado hecho bajo su autoridad, sean puestos en cuestión ; y en todo caso en que la constitución o ley de un estado se pretenda repugnante a la constitución de los Estados Unidos ». Disposiciones parecidas, con algunas variantes, contiene el mismo código, respecto a los recursos extraordinarios que, independientemente de otros casos de apelación, se conceden contra las resoluciones definitivas de la suprema corte y tribunales de los Estados Unidos para Puerto Rico ; de las cortes supremas de los territorios de Arizona y Nuevo México ; de la corte suprema de Hawai ; de los tribunales de distrito de Alaska ; de la suprema corte

de las islas Filipinas, y de las cortes de apelaciones del distrito de Columbia.

Entre nosotros, el recurso extraordinario fué originariamente establecido en la ley número 27 de 16 de octubre de 1862. El artículo 23 de dicha ley determinaba que, « cuando en un juzgado de provincia hubiese duda o cuestión sobre si el asunto de que se trata, debe ser regido solamente por leyes provinciales, y se decidiese en última instancia en ese sentido, el agraviado podrá apelar para ante la suprema corte ».

Pero más importante es la disposición del artículo 21 de dicha ley, que establecía que los jueces de sección « pueden conocer en grado de apelación de los fallos y resoluciones de los juzgados inferiores de provincia, en los casos regidos por la constitución y leyes nacionales, siempre que el agraviado no prefiera ocurrir al juzgado o tribunal superior de la provincia ». En estas causas, como en las demás de competencia originaria de los jueces federales, se daba los recursos ordinarios de apelación y nulidad para ante la corte suprema (art. 22).

Al conceder un recurso de apelación de los fallos de los juzgados inferiores de provincia

ante los tribunales inferiores de la nación, la ley se inspiró, sin duda, en las doctrinas avanzadas por Hamilton en la parte final del número 82 del *Federalista*, doctrinas que no han prevalecido en los dominios de la legislación.

Respondiendo a la pregunta de si podría deducirse apelación de los tribunales de los estados a los tribunales inferiores de la nación, Hamilton decía: « esta es otra de las preguntas que se han formulado, y de mayor dificultad que la anterior. Las siguientes consideraciones favorecen la afirmativa: el proyecto de la convención, en primer lugar, autoriza a la legislatura nacional para « instituir tribunales inferiores a la corte suprema ». Declara en segundo lugar, que « el poder judicial de los Estados Unidos será investido en una suprema corte y en los tribunales inferiores que el congreso ordene y establezca de tiempo en tiempo », y luego procede a enunciar los casos a que se extenderá este poder judicial. Después divide la jurisdicción de la corte suprema en originaria y de apelación, pero no da definición alguna de la de los tribunales subalternos. Los únicos rasgos que se describen en cuanto a éstos, es que serán

« inferiores a la corte suprema », y que no ultrapasarán los límites especificados de la judicatura federal. Que su autoridad será originaria o por apelación, u originaria y apelada, es lo que no se dice. Parece haberse dejado todo esto a discreción de la legislatura, y siendo esto así, no discurre por ahora impedimento alguno al establecimiento de apelaciones de los tribunales de los estados a los tribunales nacionales subalternos, pudiendo imaginarse muchas ventajas consiguientes a la facultad de hacerlo. Esto disminuiría los motivos de multiplicación de tribunales federales y favorecería arreglos conducentes a restringir la jurisdicción apelada de la corte suprema. Un mayor número de causas federales podrían ser dejadas a los tribunales de los estados, y las apelaciones, en la mayor parte de los casos en que se considerasen convenientes, en vez de interponerse ante la corte suprema, podrían deducirse de los tribunales de los estados para ante los tribunales de distrito de la unión. »

Sin desconocer el valor relativo de las precedentes consideraciones, que acaso encierran el germen de alguna reforma futura destinada a

establecer una ponderación más flexible y armónica entre los dos sistemas judiciales que coexisten en el país, realizando a la vez la unificación del fuero en la capital y la investidura en la corte suprema de las funciones de casación en materia constitucional, resulta extemporáneo detenerse a analizarlas aquí, desde que, como ya lo hemos dicho, tanto en los Estados Unidos como en nuestra república y en la del Brasil, que ha adoptado también el régimen federativo americano, tan considerable innovación no ha sido adoptada.

Por otra parte, las referidas disposiciones de la ley número 27 no han tenido casi aplicación, porque ellas quedaron al poco tiempo derogadas por la ley número 48 de 14 de septiembre de 1863. La corte suprema ha declarado a este respecto: « el recurso de apelación creado por el artículo 21 de la ley nacional de 16 de octubre de 1862, ha sido suprimido por la de 14 de septiembre de 1863 correctoria de aquélla, substituyéndose el procedimiento fijado por el artículo 14 de ésta » (Fallos, t. 3º, pág. 397); « el artículo 23 de la ley de justicia nacional de 16 de octubre de 1862 ha sido modificado por el

artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863 de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, que es correctiva de aquélla. » (Fallos, t. 8, pág. 191.)

En cuanto a la citada ley número 48, ella establece en principio el carácter privativo de la jurisdicción de los tribunales nacionales, excluyendo a los tribunales de provincia con las excepciones que establece el artículo 12. Entre esas excepciones, el inciso 4° de dicho artículo dice: « Siempre que en un pleito civil un extranjero demande a una provincia, o a un ciudadano, o bien el vecino de una provincia demande al vecino de otra ante un juez o tribunal de provincia, o cuando siendo demandados el extranjero o el vecino de otra provincia contesten la demanda, sin oponer la excepción de declinatoria, se entenderá que la jurisdicción ha sido prorrogada, la causa se substanciará y decidirá por los tribunales provinciales y no podrá ser traída a la jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el artículo 14. »

Este artículo 14 dispone que : « Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia,

será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la suprema corte de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes :

« 1° Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión haya sido contra su validez.

« 2° Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la constitución nacional, a los tratados o leyes del congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia.

« 3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la constitución, de un tratado, o ley del congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio. »

El artículo 90 de la ley de organización de los tribunales locales de la capital, establece

que contra las sentencias dictadas por las cámaras de apelaciones que funcionen en ella, no habrá recurso alguno, con excepción de los casos previstos en el citado artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863, y análogas disposiciones contienen las leyes de procedimientos de casi todas las provincias; siendo de observar que aunque no las contuvieran sería exactamente lo mismo, desde que la ley número 48 es una ley nacional dictada por el congreso en uso de atribuciones propias, a la cual deben conformarse las autoridades provinciales no obstante cualquiera disposición en contrario de sus constituciones o leyes locales (art. 31 de constitución).

El artículo 6º de la ley número 4055 de 11 de enero de 1902, ratificando y ampliando estas disposiciones, establece que la corte suprema conocerá en grado de apelación, « de las sentencias definitivas pronunciadas por la cámaras federales de apelación; por las cámaras de apelación de la capital; por los tribunales superiores de provincias y por los tribunales superiores militares, en los casos previstos por el artículo 14 de la ley número 48 de 14 de septiembre de 1863 ».

La misma ley 4055 establece en su artículo 7º, que « si procediese el recurso del artículo anterior, y la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la de los juzgados de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución, dando fianza de responder de lo que percibiese, si el fallo fuera revocado por la suprema corte. Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que la hubiese dictado y quedará de hecho cancelada si la sentencia recurrida fuese confirmada por la suprema corte. El fisco nacional estará exento de la fianza a que se refiere esta resolución ».

El artículo 22 del código de procedimientos en materia penal para las causas criminales pertenecientes al fuero federal y las correspondientes a los tribunales ordinarios de la capital y de los territorios nacionales, sancionado por la ley número 2372 de 17 de octubre de 1888, con las modificaciones introducidas por los artículos 17 y 18 de la ley número 4055, conserva el recurso extraordinario contra las sentencias definitivas de las cámaras federales de apelación en los casos del artículo 14 de la ley número 48 de 14 de septiembre de 1863.

El artículo 15 de esta ley dispone que cuando se entable el recurso extraordinario, « deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en el artículo 14, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa, quedando entendido que la interpretación o aplicación que los tribunales de provincia hicieren de los códigos civil, penal, comercial y de minería no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11° del artículo 67 de la constitución ».

El artículo 16 de la misma ley establece que « en los recursos de que tratan los artículos 14 y 15, cuando la corte suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada, o bien resolverá sobre el fondo, y aun podrá ordenar la ejecución, especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón ».

Por último, el artículo 8° de la ley 4055, modificando el procedimiento anterior con arreglo

al cual este recurso se tramitaba en la misma forma que cualquier otra apelación ante la corte suprema, ha establecido un procedimiento sumario y uniforme para todos los casos en que se interpone, contribuyendo así a acentuar el carácter de «extraordinario» que hice notar en otra parte de este trabajo y con el cual se le califica en el tecnicismo forense. Recibido el expediente en el tribunal, se dicta la providencia de autos y las partes pueden, dentro de los diez días comunes e improrrogables siguientes a la notificación de esa providencia, presentar una memoria sobre la causa, que se manda agregar a los autos y sin más trámite queda la causa conclusa para definitiva.

La corte suprema ha declarado que estas disposiciones derogan las leyes anteriores que se aplicaban a la substanciación de los recursos extraordinarios, y que por consecuencia ha quedado suprimido en ellos el informe *in voce*.

CAPÍTULO III

PROCEDENCIA Y CONDICIONES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

§ 1. Consideraciones generales

En presencia de las disposiciones legales que quedan citadas, y de las reglas generales del derecho y especiales para la justicia federal que las complementan, la procedencia o improcedencia del recurso extraordinario no ofrece grandes dificultades en los casos concretos ocurrientes, si bien reclama un examen atento de sus circunstancias a objeto de apreciar si concurren en él los requisitos exigidos por la ley para su admisibilidad, bajo el principio de que, faltando alguno de sus requisitos esenciales, el recurso es improcedente.

Por no tenerse en cuenta suficientemente el carácter extraordinario de este recurso, y la

necesidad de prescindir de generalidades al entablarlo, es frecuente que él se deduzca en multitud de casos en que su improcedencia resultaría del examen atento de la ley y de la copiosa jurisprudencia de la corte suprema. En la colección de fallos de este tribunal, sobre todo en los últimos tiempos, abundan las causas en que los recursos extraordinarios son rechazados de plano por improcedentes, lo que parece revelar una tendencia a deducirlos a todo evento, como temperamento dilatorio, o como último consuelo de la parte defraudada en sus esperanzas por el rechazo de sus pretensiones en el tribunal que decide la causa. Pero es justo también reconocer que, sometidos esos casos a una severa crítica, hay muchos de ellos en los cuales, ante las reglas de sana interpretación, parece evidente que el recurso debiera haberse concedido.

La gran cantidad de casos en que la corte declara *mal concedidos* o *mal denegados* los recursos por los superiores tribunales locales, al par que demuestra que no están éstos suficientemente penetrados de su espíritu y alcance dentro de la jurisprudencia del alto tribunal, contribuyen, por su parte, a robustecer el conven-

cimiento general de que se trata de un resorte misterioso dentro del mecanismo judicial, cuyos profundos arcanos están fuera del alcance de la preparación forense vulgar, lo que hace que en cada caso ocurrente la procedencia o improcedencia del recurso dependa para el que lo deduce, de causas insospechadas, cuya revelación le produce siempre sorpresa y a menudo irritación.

Interesa, pues, sobremanera, fijar con la mayor claridad, cuáles son las condiciones y requisitos legales de fondo y de forma que hacen admisible el recurso extraordinario, disipando los errores en que se incurre frecuentemente respecto de su procedencia, con el prejuicio de que basta discutir una cuestión constitucional para que sea admisible, o el prejuicio, no menos peligroso para el cumplimiento de los fines propios del poder judicial de la nación, de mutilar el contralor de la suprema corte en cuestiones de carácter federal incuestionablemente comprendidas en su jurisdicción apelada, cuando ellas dependen de puntos de hecho esenciales para la apreciación del derecho.

§ 2. Constitucionalidad del recurso

Entre nosotros no ha sido nunca discutida la constitucionalidad del recurso extraordinario. Las dudas de índole doctrinaria que en los Estados Unidos subsistían al respecto, se disiparon por completo con las dos grandes sentencias a que he hecho referencia anteriormente, redactadas la una por Story y la otra por Marshall, en las causas *Martin v. Hunter* y *Cohens v. Virginia*, que constituyen los *leading cases* sobre el particular. Confirmadas estas sentencias en casos posteriores, entre los que merecen citarse los de *Ableman v. Booth*, 21 Howard 506, y *Williams v. Bruffy*, 102 U. S. 248, quedó bien establecida la jurisprudencia inconvencible de la suprema corte al respecto, y el desconocimiento de su jurisdicción en tales casos, sólo subsistió como aspiración entre los elementos de la tendencia separatista que culminó en la guerra de secesión y hoy ha desaparecido casi por completo.

Y sobre este punto cabe afirmar que la energía con que la suprema corte de los Estados Unidos defendió su autoridad desconocida por

los estados particulares, fué sin duda alguna uno de los apoyos más firmes con que contó el gobierno federal para su labor de unificación y vinculación entre los estados, en su larga y constante lucha con los mezquinos intereses del localismo.

No existiendo entre nosotros esa tendencia separatista con caracteres tan marcados, pues el régimen adoptado consultaba las aspiraciones de los federales más exaltados, que nunca desconocieron la necesidad de la unión nacional, no se ha producido, repito, un solo caso de desconocimiento de la suprema facultad de la corte, de revisar las decisiones locales en cuanto pudieran afectar un derecho de carácter federal, aunque es dable suponer que si el caso se hubiese presentado, nuestro alto tribunal hubiera sabido defender su autoridad con la misma firmeza que su admirable modelo, siguiendo en este punto, como lo ha seguido en otros, sus luminosas huellas.

§ 3. Condiciones generales del recurso

Sólo procede el recurso extraordinario cuando ante los tribunales locales, federales o mili-

tares se ha disentido una cuestión de carácter federal de las enumeradas en los tres incisos del artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia de 14 de septiembre de 1863; y cuando no habiendo recurso dentro del orden local contra la resolución definitiva dictada, ésta desconoce el derecho, garantía, privilegio o exención invocado.

Las condiciones generales de procedencia del recurso pueden, pues, resumirse así: 1ª caso judicial; 2ª sentencia definitiva; 3ª resolución contraria al derecho de carácter federal invocado. Dentro de estas tres condiciones esenciales, hay que examinar diversos puntos de capital importancia, a saber: 1º personas que pueden interponerlo; 2º forma y oportunidad de plantear la cuestión federal; 3º tribunales cuyas decisiones pueden darle origen; 4º causas en que procede; 5º leyes cuya interpretación puede motivarlo, y 6º puntos sobre los cuales puede pronunciarse la sentencia que se dicte con motivo de su interposición. Esto, en cuanto a las condiciones intrínsecas del caso, siendo de observar que no son de escasa importancia las que se refieren a la forma y plazo de su interpo-

sición, o sea, a las condiciones extrínsecas, que analizaré en capítulo aparte.

§ 4. **Caso contencioso**

Es una de las reglas fundamentales de nuestro derecho, que las decisiones de la justicia sólo pueden obtenerse con relación a un caso, es decir, a una contienda entre partes legítimas cuya solución se ha librado a los jueces.

Si esta regla es absoluta respecto de todos los tribunales de cualquier naturaleza, su estricta aplicación es más imperiosa aun en una instancia extraordinaria como la que me ocupa, dado el poder soberano de que dispone en ella la suprema corte, para resolver como intérprete final, sin recurso de ninguna especie ante otra autoridad cualquiera, sobre la validez o nulidad de las leyes nacionales o provinciales, y sobre la aplicación que debe darse a la ley fundamental. Si esta facultad eminente pudiera ejercitarse en abstracto, con relación a cuestiones de carácter teórico, o por resoluciones de carácter general y obligatorio aún para los que no hubiesen intervenido en el juicio en que recae la deci-

sión, la suprema corte de justicia dispondría de una autoridad absorbente sobre el gobierno del país; y, roto el equilibrio de poderes, base de nuestro régimen político, podría colocarse en tal situación que los poderes ejecutivo y legislativo le quedaran supeditados.

Pero limitadas como se hallan sus facultades a la resolución de las contiendas entre partes, tal peligro desaparece, y queda entonces en el carácter de protectora de los intereses y derechos individuales contra los desmanes de las autoridades, y contra los desconocimientos de que puedan ser objeto por parte de otros tribunales, que por no estar colocados en la situación de independencia en que ella se encuentra, puedan dejarse influenciar en sus resoluciones por sus vinculaciones locales, o por consideraciones particulares, hasta frustrar los altos fines de la constitución nacional.

El artículo 2º de la ley número 27 sobre organización de los tribunales nacionales, dispone al respecto: « La justicia nacional nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida *a instancia de parte*. »

Interpretando las disposiciones análogas contenidas en las leyes norteamericanas, la suprema corte de los Estados Unidos ha dicho : « Cualquier procedimiento ante un tribunal de justicia, por el cual una persona demanda la reparación o el remedio que la ley le acuerda, *es un juicio*. » (Weston v. Charleston, 2 Peters, 449.) « Un *caso* ocurre a los efectos constitucionales, siempre que una cuestión sobre la constitución, las leyes o tratados de los Estados Unidos ha asumido una forma tal, que el poder judicial es capaz de resolverla. Sólo puede considerarse como tal, cuando el asunto es sometido a la justicia por una parte que alega *sus derechos* en la forma prescrita por la ley, lo que significa que debe haber un procedimiento judicial. » (Osborn v. Bank of the United States, 9 Wheaton, 73, 819 y 821.)

Un *caso*, ha dicho Marshall, es una controversia entre partes que ha tomado una forma para la decisión judicial (Marshall's speech, 9 Wheaton 819); es un pleito o demanda en derecho o equidad instituido con arreglo a un curso regular de procedimientos judiciales; y cuando envuelve una cuestión regida por la constitu-

ción, tratados o leyes de los Estados Unidos, está dentro del poder judicial conferido a la unión. Consiste en el derecho de una parte, lo mismo que en el de la otra. (Paschal, *Constitución anotada*, §§ 199 y 201; Curtis, *Comentarios*, §§ 7, 10 y 11; Story, *Comentarios*, §§ 1647-1656.)

Tan elocuente y no menos preciso, dice Vedia al respecto: « El poder judicial no se extiende a todas las violaciones posibles de la constitución, sino a las que le son sometidas, en la forma de un caso, por una de las partes. Si así no sucede *no hay caso* y no hay por lo tanto jurisdicción acordada. De ahí nace la limitación relativa a los efectos del fallo judicial y al alcance de la jurisdicción. Instituído para resolver un caso, el poder judicial no puede extenderse más allá. La jurisdicción que surge de un proceso, no puede comprender a los que no son parte en él; no puede afectar a la sociedad ni a los demás poderes públicos, ni obrar sobre los que ninguna acción han llevado a los estrados del tribunal. Así limitada, no es menos preciosa y grande la misión tutelar de la justicia. El punto capital que ha quedado fuera de cuestión: el de que el

fallo es soberano en el *caso* en que recae, y obligatorio para las partes, cualesquiera que sean; ese punto es precisamente el nudo de la cuestión. Todos los que están en el mismo caso tienen expedito el camino de la justicia y de la reparación. Y fuera de esos límites, el poder judicial podría llegar a ser el instrumento de un despotismo insoportable.

« La interpretación judicial de la corte suprema es la definitiva, pero debe darse bajo la forma de un caso, y *sólo en aquellas cuestiones susceptibles de asumir esa forma*. Un caso es un proceso, y un proceso no puede entablarse sino cuando se halla en juego, directamente, una relación privada. La consecuencia que debe deducir la ciencia política de ese criterio, dice Burgess, es que la decisión del tribunal no afecta en realidad sino al caso determinado. » (Agustín de Vedia, *Constitución argentina*, §§ 541¹ y 542.)

Expresándose en el mismo sentido, se ha escrito en una causa pendiente de la resolución de la suprema corte: « Como poder conservador de las garantías constitucionales, la corte suprema interpone su autoridad para mantener la supre-

macía de la constitución y de las leyes nacionales, tan sólo con respecto al caso *sub judice* y en cuanto atañe a los derechos vulnerados del litigante. Esta altísima función social no es la de un *censor*, sino la de un *juez*: ella no invade la esfera de acción de los otros poderes, ni afecta a su independencia respectiva, porque la ley o acto que se declaran inconstitucionales o repugnantes a las leyes de la nación, no quedan revisados ni derogados por el poder judicial, el cual no hace otra cosa que declarar su inaplicabilidad a persona determinada, cuando aquéllos vinieran a privar de privilegios, exenciones o derechos que la constitución o las leyes nacionales aseguran a esa persona.

« Nadie puede promover un juicio de inconstitucionalidad por vía de acción o de recurso extraordinario, sin estar directamente amparado por las garantías de la constitución o de las leyes nacionales que invoca. De otra manera, toda ley podría ser tachada de inconstitucionalidad por cualquier habitante del país, aunque no lo afectara directamente, y el poder judicial estaría dictando declaraciones generales y abstractas sobre la validez o invalidez de

las leyes, en ejercicio de una verdadera revisión de los actos legislativos contraria al principio de la división de poderes. Tanto los tribunales de los Estados Unidos como los nuestros, han repudiado siempre semejante invasión de atribuciones legislativas por parte del poder judicial, manteniendo la sana doctrina que circunscribe las funciones de éste a los casos propiamente tales, en que el fallo recae sobre los derechos que pretenden los litigantes. »

No obstante la evidencia de estos principios que constituyen la base de nuestro sistema judicial, ellos son frecuentemente desconocidos en su aplicación a casos ocurrentes, y no es raro encontrar en las colecciones de fallos causas en que los litigantes los olvidan, dando lugar a resoluciones encaminadas a dejarlos nuevamente consagrados.

Así, la suprema corte ha resuelto que « la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley, sólo puede ser ejercitada cuando un *caso* propiamente tal o controversia entre partes que afirman o contradicen, respectivamente, derechos en la prescripción legal discutida, son lle-

vados a su decisión. En consecuencia no corresponde a la justicia nacional conocer de una demanda tendiente a que se declare en general o en abstracto la inconstitucionalidad de una ley » (en el caso, la ley social n° 7029). (Fallos, t. 115, pág. 163.) En el mismo sentido, los fallos de los tomos 12, página 372; 24, página 248; 95, página 290; 107, página 179 y otros muchos. *Muskart v. United States*, 23 de enero de 1911; *Miller, On the constitution*, página 315, citados por la suprema corte. « Es caso, *pleito* o *cuestión* a los efectos de un recurso extraordinario, todo asunto judicial seguido entre partes, originado por cuestiones constitucionales, de leyes o tratados, que haya motivado una sentencia definitiva. » (Fallos, t. 110, pág. 391.) « No corresponde a la suprema corte intervenir en un conflicto entre autoridades nacionales y locales, cuando nada hay en litigio que constituya una causa (un caso) en el sentido técnico de la palabra. (Fallos, t. 73, pág. 122.) « El hecho de no haber prestado la policía su cooperación para impedir actos conceptuados contrarios al texto y espíritu de la ley nacional número 2786, no da lugar al recurso extraordinario, por no haber

habido juicio, ni sentencia, ni recurso denegado. » (Fallos, t. 116, pág. 22.)

§ 5. Cuestión federal

Respecto del recurso extraordinario hay que añadir a las consideraciones que anteceden sobre el caso litigioso en general, que no basta para su procedencia que él se interponga en un *caso*, sino que es preciso que se trate de un *caso federal*, es decir de un caso que esté comprendido dentro de las disposiciones del artículo 14 antes transcrito, de la ley de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales. Se trata, en efecto, de una jurisdicción de excepción que sólo se ejercita cuando el asunto interesa al orden nacional, y no de una apelación que se conceda en todas las causas, lo que importaría dar a la corte suprema un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales, que no le corresponde cuando el asunto sólo interesa por la materia o las personas al orden local, o cuando la resolución es favorable al interés nacional comprometido en la causa.

El artículo 14 tantas veces citado, es terminante sobre el particular: « Una vez *radicado* un juicio ante los tribunales de provincia — dice — será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la corte suprema, etc., en los casos siguientes. » El artículo 6º de la ley 4055 extendió el poder apelado de la corte en tales casos, a las sentencias de las cámaras federales de apelación que antes no existían, repitiendo las disposiciones legales que lo habían ya hecho extensivo a las de los tribunales superiores de la capital, y tribunales superiores militares.

No me detendré a analizar cuáles son los diversos casos en que un juicio queda radicado ante las jurisdicciones locales, pues no entra ese punto dentro de los estrechos límites de este trabajo. Sólo diré, en general, que « juicio radicado ante los tribunales de provincia » es aquél en que éstos intervienen por jurisdicción propia, o en que la parte que pudo invocar el privilegio del fuero federal, hizo la renuncia expresa o tácita del mismo, de acuerdo con las reglas establecidas por la ley y la jurisprudencia, para que se considere operada la prórroga de jurisdicción.

De conformidad con las reglas que anteceden, la suprema corte ha decidido lo siguiente: « El juicio radicado ante los tribunales de provincia debe seguirse y fenecerse en ella, cualquiera que sea la calidad personal de las partes. Sólo queda a salvo el recurso para la suprema corte en los casos expresados en el artículo 14 de la ley sobre jurisdicción de 14 de septiembre de 1863. » (Fallos, t. 10, pág. 171; 18, pág. 23; 19, pág. 137; 20, pág. 234.) « No procede el recurso de los fallos de los tribunales superiores de provincia en los que no se contiene ninguno de los desconocimientos comprendidos en el artículo 14 de la ley de competencia de los tribunales federales. » (Fallos, t. 20, pág. 96; 31, pág. 193; 31, pág. 404; 39, pág. 52; 71, pág. 15; 75, pág. 404; 91, pág. 199; 94, pág. 316.) « La suprema corte no puede reparar los agravios inferidos por autoridades provinciales, sino por medio de los recursos autorizados por el artículo 14 de la ley de septiembre 14 de 1863. » (Fallos, t. 1, pág. 28.) « La validez de los autos de las justicias provinciales no puede ser revisada por los tribunales nacionales, sino en los casos del artículo 14 de la ley nacional sobre jurisdicción. » (Fa-

llos, t. 5, pág. 59.) « Las sentencias de los tribunales provinciales en causas de su competencia, sólo pueden motivar recurso a la suprema corte en los casos del artículo 14 de la ley sobre competencia de los tribunales nacionales. » (Fallos, t. 1, pág. 38; 13, pág. 115; 15, pág. 174; 16, pág. 442; 72, pág. 73; 76, pág. 67; 91, pág. 228; 96, pág. 33 y 408; 97, pág. 176; 100, pág. 203 y 261.) « Contra las resoluciones de las cámaras federales de apelación en los casos en que conocen en última instancia, sólo se conceden los recursos autorizados por los artículos 4º y 6º de la ley número 4055 » (Fallos, t. 94, pág. 381); y finalmente: « El recurso extraordinario que autoriza el artículo 14 de la ley número 48, destinado a garantizar la supremacía de la constitución nacional, leyes nacionales y tratados consagrada por el artículo 31 de la constitución, sólo procede contra sentencias definitivas en causas donde se ha discutido una « cuestión federal », y la decisión final ha sido contraria al derecho, privilegio o exención fundados en la constitución, leyes o tratados. » (Fallos, t. 101, pág. 160.)

La corte suprema de los Estados Unidos ha

resuelto también, en infinidad de fallos, que este recurso constituye el único medio de traer una causa de la suprema corte de un estado, a conocimiento de la corte suprema nacional (Verden V. Coleman, 22 Howard 192).

§ 6. Pronunciamiento inoficioso

Pero no basta para la procedencia del recurso, que se haya planteado una « cuestión federal » y que la decisión sea contraria al derecho invocado por el que la planteó. Se requiere, además, que la decisión que la corte pueda dar a tal cuestión, revocando, modificando o confirmando el fallo que se le ha traído en revisión, tenga influencia sobre el resultado del pleito, o lo que es lo mismo, que la resolución que recaiga sobre la « cuestión federal » planteada y resuelta, modifique los efectos de la sentencia respecto del recurrente.

Esta condición indispensable para la procedencia del recurso, no está expresamente consignada en ningún texto legal, pero es necesaria consecuencia del principio anteriormente expuesto, de que los tribunales no pueden hacer

declaraciones abstractas, pues no otra cosa importaría una resolución puramente teórica sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sobre la validez o nulidad de leyes o autoridades, cuando quien las obtuviera en su favor no sacara de ellas beneficio alguno.

Pero esto es solamente cuando la sentencia apelada no envolviera cuestiones de índole federal en sus demás fundamentos, pues en tal caso no sólo sería procedente el recurso, sino que creo que deberían revisarse por la suprema corte todas sus conclusiones, ante el peligro de que por una interpretación o aplicación errada de actos o leyes que por sí solas no darían lugar al recurso, pudieran los tribunales locales privar a algun litigante de un derecho o privilegio otorgado por la constitución o leyes nacionales. Sobre esta última cuestión volveré más adelante, para dedicarle la atención que merece, en presencia del criterio sumamente restringido que le aplica nuestra suprema corte nacional.

Volviendo al caso que se ha dado en llamar de « resolución inoficiosa », ninguna definición puede darse más completa y concisa a la vez, que la de la suprema corte americana: « Aun-

que la cuestión federal hubiese sido erróneamente decidida contra el recurrente, si el tribunal de estado hubiere resuelto alguna cuestión no federal suficientemente sólida para fundar la sentencia, ésta debe ser confirmada » (Murdock v. Memphis, 20 Wallace, 636).

Nuestra suprema corte ha tenido también ocasión de aplicar estos principios en numerosas causas. En la que se registra en el tomo 73, página 287 de sus fallos, se invocaba ante la cámara comercial de la capital, la autoridad de una sentencia de la suprema corte que declaraba la subsistencia de un contrato, para reclamar una crecida suma como indemnización por su falta de cumplimiento, y la cámara resolvió limitar la indemnización a la cantidad de 40.000 pesos que se habían entregado como seña, basándose en las disposiciones del código civil. Llevado el caso a la suprema corte por el recurso extraordinario, sosteniendo el recurrente que la cámara comercial había interpretado erróneamente el fallo anterior de la corte, este tribunal declaró la improcedencia del recurso, fundado en que aun cuando éste procedería por haberse resuelto contra la inter-

pretación dada por el recurrente a un acto jurisdiccional ejercido por un tribunal de la nación, no había ventaja en que el tribunal se pronunciara al respecto, desde que no tenía facultad para modificar el monto de la indemnización, cuya determinación era de la exclusiva competencia local y que se había fijado teniendo en cuenta disposiciones del código civil, cuya aplicación e interpretación no puede dar origen al recurso.

Además, ha resuelto: « No corresponde el recurso a la suprema corte contra las sentencias de los tribunales ordinarios, si la disposición del poder ejecutivo nacional que se invoca para justificarlo, no puede servir para modificar la sentencia. » (Fallos, t. 79, pág. 242.) « No corresponde el recurso ante la suprema corte, de los tribunales ordinarios, si éstos han resuelto interpretando y aplicando las leyes comunes y si el acto del poder ejecutivo nacional que se invoca para justificarlo, no es apto para modificar la sentencia. » (Fallos, t. 79, pág. 280.) « Si bien el recurso interpuesto sería procedente en virtud del inciso 3º del artículo 14 de la ley de jurisdicción, no puede la suprema corte admitir-

lo, porque cualquiera que fuese la resolución correspondiente con arreglo a la cuestión constitucional, *no le sería dado modificar la sentencia apelada*, fundada como está en disposiciones de derecho común. » (Fallos, t. 97, pág. 211.) « No basta para la procedencia del recurso extraordinario autorizado por el artículo 14 de la ley 48 y 6° de la ley 4055, que se haya planteado alguna cuestión prevista en los mismos, si ella no ha sido resuelta en la sentencia definitiva, *por ser innecesaria a los fines de la decisión legal del litigio*. » (Fallos, t. 104, pág. 293.) « La aplicación de los códigos comunes no da lugar al recurso extraordinario creado por el artículo 14 de la ley 48, aún cuando la sentencia recurrida traiga también a juicio una ley del congreso, siempre que la base principal de dicha sentencia sea el derecho común. » (Fallos, t. 104, pág. 293.) « Si la sentencia condenatoria no se basa, como se pretende, en la disposición legal que se tacha de inconstitucional, no procede el recurso extraordinario ». Se trataba de un acto de allanamiento, tachado de inconstitucional. La corte resolvió que no procedía el recurso, por estar basada la sentencia en probanzas independientes

de las que resultaban del acto impugnado y que por sí solas bastaban para fundar la condenación. (Fallos, t. 108, pág. 213.) « No procede el recurso extraordinario en un caso en que, no obstante haberse tratado de lo dispuesto en la ley orgánica de la armada, y en la ley nacional número 3948, la resolución apelada se funda en la interpretación y aplicación del artículo 4044 del código civil. » (Fallos, t. 114, pág. 113.) « Es improcedente el recurso extraordinario, cuando si bien la sentencia apelada es contraria a los derechos fundados en la constitución y leyes especiales del congreso, decide al mismo tiempo cuestiones comprendidas en la litis-contestación, ajenas a aquél, y que la corte suprema no puede rever, por tratarse de puntos de hecho y aplicación del derecho común. En tal caso, carece de objeto práctico la apertura del recurso, toda vez que en esta parte es irrevocable la sentencia apelada. » (Fallos, t. 115, pág. 406.) « No procede el recurso extraordinario fundado en la oposición de una ley local y el código civil, si la sentencia recurrida declara, interpretando y aplicando el último, que el recurrente no está comprendido en la disposición en que se apoya-

ba. » (Fallos, t. 118, pág. 121.) « Sería inoficiosa la resolución de una cuestión federal planteada en un recurso extraordinario, si la sentencia recurrida se funda en la autoridad que reviste otra ejecutoriada, autoridad no desconocida y que basta por sí sola para sentenciarla. » (Fallos, t. 120, pág. 228.) « No procede el recurso extraordinario contra una resolución que, si bien declara *constitucional* una ordenanza que el recurrente impugna como contraria a la constitución nacional, es favorable al derecho gestionado por éste, porque en tal caso la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa ordenanza sería una declaración teórica que los tribunales no pueden hacer. » (Fallos, t. 115, pág. 263.) « No procede el recurso autorizado por el artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, si se ha declarado por los tribunales de provincia, que el demandado no es el autor de la detención de viaje que se ataca de inconstitucional y que motiva la demanda. La constitucionalidad y inconstitucionalidad de esa detención queda reducida en el caso, a una cuestión teórica que no corresponde a los jueces resolver. » (Fallos, t. 94, pági-

na 444.) « No es definitiva a los fines del recurso extraordinario la sentencia de un superior tribunal de provincia que se limita a resolver que determinadas disposiciones de una ley provincial no son contrarias a la constitución nacional, y sin resolver el fondo del asunto, dispone que los autos pasen a la sala de lo criminal para que ésta lo falle, pues bien podría este tribunal resolver el asunto por otras razones en favor del recurrente, haciendo inoficioso el pronunciamiento de la suprema corte. » (Fallos, t. 119, pág. 249.)

La regla general es, pues, que debe declararse improcedente el recurso, cuando por la naturaleza de los fundamentos en que se apoye la sentencia recurrida, la solución final que se dé a la cuestión federal, no pueda modificar su parte dispositiva; pero habiendo un interés cualquiera por ínfimo que sea, en que se solucione la cuestión federal, debe admitirse el recurso. Así lo resolvió la suprema corte en la causa del tomo 110, página 391, en que declaró que « la circunstancia de que haya pasado la fecha señalada para la realización de un meeting conmemorativo, no es óbice para la consideración de un recurso interpuesto con motivo de una reso-

lución que cambió el itinerario de tal meeting, si se ha declarado por los solicitantes que lo realizarían conforme les fuera concedido el permiso ».

§ 7. Sentencia definitiva

El recurso extraordinario no se concede sino contra las sentencias *definitivas* de los tribunales a que se refieren las leyes número 48 y número 4055. La razón de esta limitación, es que, estando obligados todos los jueces y autoridades de la república a cumplir en primer término la constitución, las leyes nacionales y los tratados, se presume que, mientras exista un recurso o instancia en las jurisdicciones locales o tribunales nacionales inferiores, el privilegio o exención fundado en garantías de orden federal puede encontrar amparo en esas jurisdicciones, sin necesidad de llevar el caso a la revisión de la corte suprema.

La suprema corte ha declarado a este respecto: « La objeción de inconstitucionalidad de leyes provinciales no basta para privar a los tribunales de provincia de la jurisdicción que les compete para conocer en causas regidas por di-

chas leyes. *Dichos tribunales son también ejecutores de la constitución nacional y pueden y deben interpretarla y explicarla.* Sólo queda a salvo el recurso establecido por el artículo 14, inciso 2°, de la ley de 14 de septiembre de 1863, *para corregir interpretaciones erróneas.* » (Fallos, t. 10, pág. 134.) En la causa del tomo 15, página 316, dijo el procurador general: « Si la ley impugnada es injusta, y repugnante a las leyes nacionales, el que sea condenado por ella puede usar del recurso que autoriza el artículo 14 de la ley sobre competencia, pero no puede desconocer la jurisdicción de los jueces de provincia. » La suprema corte, haciendo suyo ese dictamen, resolvió: « El vicio de inconstitucionalidad que se oponga a una ley de provincia en la que se funda una demanda, no autoriza al opositor a desconocer la jurisdicción de los jueces de provincia, si les corresponde sobre la demanda por razón de la materia y de las personas, y sólo puede dar lugar al recurso que sanciona el artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863, en caso de que se aplique aquella ley. »

De estos fundamentos se sigue que el carácter de *definitiva* de una sentencia, se determina

no por las clasificaciones o denominaciones que las leyes de procedimientos den a los « fallos », « autos », « resoluciones » o « sentencias », sino por la circunstancia de que el fallo o resolución de que se trate no sea susceptible de ninguna reclamación o recurso ulterior dentro de la jurisdicción en que ha sido dictado. Se comprende fácilmente que, bajo esta regla de criterio, que surge de la mente y fundamento de la ley, poco importa la calificación o naturaleza de la sentencia o auto, para considerar su carácter de definitiva: basta que sea de última instancia en la jurisdicción en que se ha pronunciado, y que, aun cuando no decida en toda su extensión los derechos litigiosos, sea concluyente y final con respecto a las cuestiones comprendidas en el juicio particular en que la cuestión federal se ha planteado, como puede suceder en juicios sumarios que dejan lugar a acciones ulteriores, y cuando se trata de autos que, sin ser definitivos en rigor de derecho, tienen fuerza de tales porque causan gravamen irreparable en algunos casos.

Entiendo, por lo tanto, que el concepto de sentencia o fallo definitivo a los efectos del re-

curso extraordinario, comprende no sólo las sentencias finales de última instancia dictadas en juicio ordinario, sino todos los fallos o resoluciones que resuelven inapelablemente y con carácter final dentro de la jurisdicción local, en contra del derecho federal alegado, siempre que causen gravamen irreparable en cuanto a las garantías de orden nacional invocadas en el juicio. De otra manera, el recurso extraordinario sería ineficaz en muchísimos casos para hacer efectivas esas garantías.

La suprema corte de los Estados Unidos ha declarado que se entiende por *definitiva* la sentencia o auto que pone término al litigio por el mérito de la causa, de tal manera que, siendo confirmada por la suprema corte, el tribunal *a quo* nada tenga que hacer sino ejecutar la sentencia antes dictada (Witing v. United States Bank, 13 Peters, 6, y muchos otros). « La palabra *definitiva* se refiere a todas las sentencias y autos que *deciden la causa particular en litigio, y no únicamente a aquellas que contienen decisión final sobre el derecho de modo de que nunca pueda ser otra vez alegado*. Así, los fallos en acciones de adquirir posesión (*ejectment*) y los autos que

rechazan un bill « sin perjuicio » (procedimiento de equidad) no deciden finalmente el derecho, pero son definitivos a los efectos del recurso. » (Weston v. Charlestown, 3 Peters, 464.)

La suprema corte nacional ha tenido ocasión de resolver sobre estos mismos puntos en numerosos fallos, llegando no sin vacilaciones, a la adopción de una norma uniforme sobre lo que debe entenderse por *sentencia definitiva*. En lugar de adoptar el sistema amplio de la sentencia que antecede, nuestro alto tribunal parece haber extremado el criterio de lo *irreparable* como medida de lo *definitivo*, no admitiendo el recurso en aquellos casos en que aun cuando la sentencia deba cumplirse, quede abierta la vía de una nueva acción al agraviado para anular sus efectos.

El principio de que sólo puede apelarse ante la corte suprema de las sentencias definitivas, ha quedado consagrado en los siguientes fallos: « *No siendo definitiva* la resolución que la municipalidad ha dictado... porque puede entablarse de ella el *recurso* que establece el artículo 30 de la ley orgánica de dicha corporación, no está el presente caso comprendido dentro del artículo

14 de la ley número número 48. » (Fallos, t. 13, pág. 115.) « El artículo 14, inciso 2º, de la ley de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, concede recurso ante la suprema corte de las sentencias *definitivas* dictadas por los tribunales locales en juicios radicados ante ellos, y *no de autos que no son definitivos*, ni dictados en juicios no radicados. » (Fallos, t. 17, pág. 441.) « No siendo la resolución recurrida sentencia definitiva, según lo requiere el artículo 14 de la ley de septiembre 14 de 1863, se resuelve no hacer lugar al recurso. » (Fallos, t. 47, pág. 57 y 73 ; 51, pág. 379 ; 68, pág. 329 ; 81, pág. 115 ; 100, pág. 272 ; 104, pág. 273 ; 106, pág. 11 ; 95, pág. 292.) « Uno de los requisitos exigidos por el artículo 6º de la ley número 4055 para hacer procedente el recurso que él autoriza, es que la sentencia recurrida tenga el carácter de definitiva. » (Fallos, t. 96, pág. 352.) « La apelación de las resoluciones de las cámaras federales a la suprema corte, procede solamente de las sentencias *definitivas*, es decir, de las que ponen fin al pleito. » (Fallos, t. 95, pág. 79.) « El recurso previsto por el artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863 sobre juris-

dicción de los tribunales nacionales, no procede mientras no exista pronunciamiento de los tribunales locales sobre la cuestión que pueda motivarlo. » (Fallos, t. 47, pág. 274.)

Resolviendo sobre lo que debe entenderse por sentencia definitiva, ha declarado :

« La resolución de los tribunales locales que, en juicio ejecutivo de un argentino contra un extranjero, *aplaza* para después de la citación de remate la *consideración* de la excepción de incompetencia deducida por el último invocando el fuero federal, no da lugar al recurso del artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863. » (Fallos, t. 40, pág. 344.) « No es recusable para ante la suprema corte, el auto de los tribunales ordinarios que *no se pronuncia* sobre la legalidad de la excepción sobre competencia de la justicia federal, sino simplemente sobre la oportunidad en que debe hacerse valer. » (Fallos, t. 64, pág. 300.) « No es sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario la que deja a salvo el derecho invocado por el recurrente para que lo haga valer en la estación oportuna del juicio. » (Fallos, t. 114, pág. 45.)

« No corresponde el recurso a la suprema cor-

te contra el auto de los tribunales ordinarios que se limite a desconocer la personería de un apoderado, sin entrar a resolver la cuestión de jurisdicción suscitada por éste. » (Fallos, t. 73, pág. 280.) « No habiendo sido decidida la tercera deducida por el recurrente, no hay pronunciamiento en lo que a ella se refiere, no procediendo, por consiguiente, el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 96, pág. 104.) « No procede el recurso del artículo 14 de la ley número 48. contra las resoluciones que no contienen pronunciamiento alguno en los términos de dicho artículo. » (Fallos, t. 97, pág. 42.) « No revisite carácter de definitiva para los fines del artículo 14 de la ley 48, la sentencia de un tribunal superior de provincia contra la cual existen en el orden local *recursos* que puedan hacer innecesaria la intervención de los tribunales federales. » (Fallos, t. 99, pág. 172.) Sobre la sentencia anterior, es indispensable observar que esos recursos del orden local deben ser de tal naturaleza que permitan al tribunal ante el cual lleven la causa, el pronunciarse sobre la *cuestión federal*, pues si se tratase de otra clase de recursos, como por ejemplo los de inaplica-

bilidad de la ley o inconstitucionalidad (provincial) que se dan en la provincia de Buenos Aires y en otras, de las resoluciones de las cámaras de apelaciones ante la suprema corte provincial, lejos de considerarse como *definitiva* la resolución que con motivo de ellos recayera en la causa, dando por consiguiente origen al recurso extraordinario, tal resolución no admitiría ya recurso ante la suprema corte nacional, porque el recurrente habría perdido el plazo para interponerlo contra la resolución de la cámara de apelaciones, que era la única definitiva que podía obtenerse en lo referente a la « cuestión federal », sobre la cual no está facultada a pronunciarse la suprema corte de la provincia en recursos de esa especie, que también son *extraordinarios* dentro de la justicia local. Así lo resolvió la suprema corte en las causas de los tomos 113, página 381; 114, página 16; 116, página 138, y 118, página 338, sobre las que volveré más adelante.

En la causa del tomo 106, página 184, declaró la corte suprema : « Es improcedente el recurso autorizado por el artículo 14 de la ley número 48, deducido contra un auto por el que

el tribunal local se declara competente para conocer de una querella por injurias, reconociéndole al acusado la facultad de oponer, durante el juicio, las excepciones que estime procedentes. » Se trata, en efecto, de una sentencia provisoria que nada resuelve y no puede, por consiguiente, afectar ningún derecho. En el mismo sentido : « La providencia de « autos » no importa sentencia definitiva que dé lugar al recurso extraordinario » (Fallos, t. 120, pág. 203), pues sólo importa una declaración de que el tribunal va a tomar conocimiento del asunto para dictar la resolución que corresponda, de la cual habrá o no recurso ante la corte según que ella sea o no favorable al que alegó un derecho de los que pueden originar el recurso. « No es definitiva a los efectos del recurso extraordinario la sentencia que anula un juicio y lo devuelve para que se falle de nuevo. » (Fallos, t. 102, pág. 281.) « No es definitiva a los efectos del recurso extraordinario una sentencia que, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, deja sin efecto el fallo del interior, ordenando se dé a la causa el curso que corresponda. » (Fallos, t. 113, pág. 99.) « El auto que deniega partici-

pación en un juicio, tiene, para los excluidos de éste, carácter de definitivo. » (Fallos, t. 118, pág. 390.) « No tiene carácter de sentencia definitiva, y por lo tanto no se halla comprendido en los términos del artículo 6° de la ley 4055, el auto que niega participación al procurador fiscal en un juicio que se sigue contra un ferrocarril de la nación. » (Fallos, t. 96, pág. 93.) « El auto por el cual se manda reabrir un sumario no tiene carácter de definitivo a los fines del artículo 14 de la ley número 48. » (Fallos, t. 95, pág. 411). « El auto que hace lugar al pedido de substitución de un bien embargado por otro no tiene el carácter de sentencia definitiva a los fines del artículo 14 de la ley número 48. » (Fallos, t. 97, pág. 5.) « El auto mandando dar posesión provisoria al expropiante no es sentencia definitiva y no puede fundar el recurso del artículo 14 de la ley número 48. » (Fallos, t. 96, pág. 280 y 409.) « No tiene carácter de definitiva á los fines del artículo 6° de la ley número 4055, la resolución que deniega el pedido de nulidad de lo obrado en la causa, e inmediata libertad del detenido. » (Fallos, t. 96, pág. 352.) « La resolución por la que un juez local, al de-

clararse incompetente para seguir entendiendo en una causa, mantiene un embargo preventivo decretado al iniciarse el juicio, no importa un desconocimiento en definitiva de derecho alguno de los previstos en el artículo 14 de la ley número 48. » (Fallos, t. 100, pág. 19.) « No tiene carácter de definitiva a los fines del recurso extraordinario, una resolución que a título provisorio declara no estar suficientemente acreditada la competencia de la justicia federal, por no haberse probado el fuero respecto de todos los demandados. » (Fallos, t. 119, pág. 200.)

En la causa del tomo 113, página 294, declaró la corte suprema: « Para que proceda el recurso extraordinario no es menester que la sentencia recurrida haya sido pronunciada en juicio ordinario, basta que tenga carácter de definitiva »; y en la del tomo 118, página 320, estableció que « contra una resolución que *pone fin al pleito en la forma entablada*, procede el recurso extraordinario ». Podría parecer a primera vista que existiese contradicción entre esos fallos y el del tomo 101, página 5, en que resolvió que « la sentencia que deja a salvo los derechos del recurrente para que pueda hacerlos



valer en juicio ordinario, no reviste el carácter de definitiva a los fines del recurso extraordinario », de conformidad a lo resuelto en multitud de juicios ejecutivos que estudiaré más adelante. No existe, sin embargo, tal contradicción. La suprema corte ha adoptado como criterio el de la *irreparabilidad judicial* del agravio causado por la sentencia recurrida, para conceder el recurso, y lo aplica sin hacer distinciones respecto de la clase de juicios en que se haya dictado. Es por esto que se observa que tan pronto concede como niega los recursos en los juicios ejecutivos o contencioso-administrativos, y esto que puede causar extrañeza, queda explicado con sólo penetrar al fondo de cada cuestión, observándose entonces que procede en la forma indicada, es decir, negando el recurso, siempre que por cualquier medio, aunque sea el de una nueva acción, queda al agraviado la posibilidad de hacer reconocer su derecho, y concediéndolo en caso contrario.

Tanto en los Estados Unidos como entre nosotros, se niega el carácter de definitivos a los efectos del recurso ante la suprema corte, a los autos de substanciación. Si así no se hiciera, bas-

taría plantear con motivo de cada decreto de simple trámite en los juicios comunes, la cuestión de inconstitucionalidad de la medida ordenada, bajo pretexto de estar en pugna con la libertad de defensa garantizada por la constitución, para que se hiciera imposible el curso regular de los asuntos en los tribunales del país. La suprema corte de los Estados Unidos tiene establecido: «No son definitivos los fallos o autos sobre el modo de tramitar los juicios, la manera de producir prueba y el término probatorio, a menos de que la suprema corte haya prescripto y fijado reglas generales para esos procedimientos » (Rea v. Missouri, 17 Wallace 532). Nuestra suprema corte ha resuelto lo mismo en multitud de causas. « Los autos de substanciación en el juicio, dictados por los tribunales locales, no son susceptibles de recurso ante la suprema corte nacional. » (Fallos, t. 50, pág. 101, y muchísimos otros, sobre los cuales volveré al tratar de la interpretación de los códigos de procedimientos.)

En la causa del tomo 100, página 70, se declaró, aunque por simple mayoría, la procedencia del recurso extraordinario « en un interdicto

de *habeas corpus*, en el que se había planteado, en términos hábiles y en su debida oportunidad, la inconstitucionalidad de la ley número 4144, habiendo la sentencia recurrida denegado dicho interdicto, por considerar que él se refiere únicamente a las formas de la detención y no a las causas que la motivan ». Esta sentencia responde a la doctrina de que basta para la procedencia del recurso, que el fallo recurrido ponga fin al pleito en la forma entablada. La minoría del tribunal entendió, sin embargo, que el recurso no procedía, porque « el interdicto de *habeas corpus* es un juicio sumario que no se refiere a la legalidad de los motivos por los cuales se detiene a una persona, sino a la forma cómo se ha hecho esa detención, y no puede, por consiguiente, en esa clase de juicios, discutirse la inconstitucionalidad de una ley del congreso ».

§ 8. Juicios contencioso-administrativos

Respecto de la procedencia del recurso en los juicios *contencioso-administrativos*, la regla de la irreparabilidad del fallo con respecto a la cues-

ción federal debatida en ellos, es de estricta aplicación, dada la naturaleza especial de esta clase de juicios, que pueden asumir formas bien diversas, sea como un simple recurso contra una resolución puramente administrativa de carácter local, tendiente a obtener una pronta reparación por una medida que causa agravio, y sin perjuicio de las acciones ordinarias que la misma pueda originar; sea como una verdadera acción civil que radica el juicio y cuya decisión es de carácter irrevocable; sea finalmente, como un recurso de carácter especial contra resoluciones administrativas que no pueden ser atacadas por acciones tendientes a impedir su ejecución. Tales son los recursos contra las resoluciones de la municipalidad de la capital en los ramos de seguridad, higiene y moralidad públicas.

Hecha esta distinción, fácil es comprender que en su primera forma el juicio contencioso-administrativo no da lugar a la interposición del recurso extraordinario, debiendo, por el contrario, considerarse definitivas y concederse por consiguiente el recurso, contra las sentencias que recaigan en los de las otras especies.

La suprema corte ha resuelto al respecto : « El recurso creado por el artículo 14 de la ley sobre competencia de los tribunales federales es procedente contra la sentencia definitiva que afecte la constitución o las leyes nacionales, aunque no sea dictada en juicio ordinario, sino en juicio contencioso-administrativo. » (Fallos, t. 76, pág. 351.) « Habiéndose resuelto contra la validez de un título de perito calígrafo expedido por la autoridad nacional, procede el recurso extraordinario aún cuando se trate de un juicio contencioso-administrativo, pues la sentencia dictada en él concluye definitivamente el caso debatido sobre la eficacia de dicho título » (Fallos, t. 113, pág. 294.) « El recurso extraordinario procede también en los juicios contencioso-administrativos » (Fallos, t. 114, pág. 350); y finalmente : « A los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 48, el concepto *juicio* comprende los ordinarios y los contencioso-administrativos. » (Fallos, t. 120, pág. 74.) En este último caso, se trataba de una verdadera acción civil por cobro de servicios, iniciada en forma de juicio contencioso-administrativo. Estos fallos aparecerían en irreductible contra-

dicción con el que se registra en el tomo 116, página 218, de no tenerse presente la distinción entre las formas distintas que asumen los juicios contencioso-administrativos. En la causa últimamente citada declaró el tribunal, que: « no es sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario, la dictada en un juicio contencioso-administrativo *rechazando la demanda únicamente del punto de vista administrativo local*, y dejando a salvo los derechos del recurrente para iniciar las acciones civiles que crea corresponderle a fin de buscar la reparación a que crea tener derecho por los actos del poder ejecutivo que impugna ».

§ 9. Juicios ejecutivos

En general, la sentencia dictada en juicio ejecutivo, es definitiva a los efectos del recurso extraordinario : debe, por consiguiente, concederse de ella, siempre que concurren en el caso las demás circunstancias para su procedencia.

No puede decirse, en efecto, que no sea irreparable el perjuicio que causa la sentencia dictada en esta clase de juicios, por el hecho de

quedar siempre a salvo el derecho para entablar la demanda ordinaria por repetición de lo pagado, puesto que la situación legal de las partes queda modificada por el cumplimiento de la sentencia de remate, que puede causar perjuicios de imposible reparación, aun cuando se reconozca con posterioridad en el juicio ordinario los derechos del vencido. Habrá casos en que la sentencia que en este último juicio recaiga, venga tarde, cuando los bienes del ejecutado hayan sido vendidos, tal vez en condiciones desventajosas, y en que la única reparación que pueda obtenerse sea la de disponer del precio de la cosa vendida, después de haber perdido el uso y goce de ésta irrevocablemente. La justicia federal debería, pues, extender también a este caso su acción protectora, siempre que por la existencia de una cuestión federal estuviera llamada a pronunciarse en último término.

No lo ha entendido así la suprema corte nacional, al dejar establecido en general, que las resoluciones recaídas en juicio ejecutivo no son *sentencias definitivas* a los efectos de los artículos 14 y 6° de las leyes números 48 y 4055. Se

ha visto obligada, sin embargo, a reconocer excepciones a esta regla, que aplicada en toda su rigidez podría causar graves perjuicios. Es así como, en lo que al privilegio del fuero federal se refiere, admite la procedencia del recurso.

En los diversos casos de este género que se le han presentado, ha resuelto el mencionado tribunal: « La sentencia de trance y remate no tiene carácter de definitiva a los fines del recurso extraordinario. » (Fallos, t. 116, pág. 297; 118, pág. 246 y 423; 119, pág. 119, 121 y 132; 120, pág. 138 y 143.) « No procede el recurso extraordinario contra una sentencia de trance y remate, por cuanto queda siempre expedita la vía ordinaria, y no puede considerarse, por lo tanto, sentencia definitiva. » (Fallos, t. 117, pág. 379; 121 pág. 210.) « No tiene carácter de definitiva a los efectos del recurso extraordinario, una sentencia dictada en juicio de apremio. » (Fallos, t. 115, pág. 369.) « No es definitiva a los efectos del recurso extraordinario una sentencia que declaró inaplicable la ley nacional número 5315 invocada en un juicio ejecutivo, quedando al recurrente la vía ordinaria para hacer valer sus derechos. » (Fallos, t. 113, página

190.) « No tiene carácter de definitiva a los fines del recurso extraordinario, la sentencia que decide no ser posible discutir en juicio de apremio la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo dispuesto en el código de procedimientos locales sobre declaratoria de pobreza, cuando, por otra parte, al denegarse el recurso extraordinario, se consigna que el agraviado tiene la facultad que le acuerda el referido código de iniciar la vía ordinaria que corresponda. » (Fallos, t. 107, pág. 308.) « Contra la sentencia que en juicio ejecutivo o de apremio, rechaza la excepción de inconstitucionalidad de la multa sobre que recae aquél, no procede el recurso del artículo 14 de la ley número 48. » (Fallos, t. 97, pág. 51.) « No tiene carácter de definitiva a los efectos del recurso del artículo 14 de la ley 48, la resolución de la cámara de apelaciones de la capital que manda llevar adelante una ejecución, rechazando la excepción de inhabilidad de título fundada en la inconstitucionalidad de una ordenanza municipal. » (Fallos, t. 100, pág. 252.)

Además de los casos a que he hecho referencia anteriormente y sobre los que volveré más adelante, de resolución contraria al privilegio

del fuero (Fallos, t. 66, pág. 47, y otros), la corte ha declarado procedente el recurso, aun tratándose de juicios ejecutivos, en las siguientes causas: « Aun cuando la ejecución seguida no obsta a la iniciación del juicio ordinario que puede promover el dendor, el auto apelado resuelve con fuerza de definitiva cuál sea la inteligencia que deba darse al artículo 10, título IV de la ley orgánica militar número 4707 y, en consecuencia, que la pensión alimenticia que se cobra puede hacerse efectiva en la asignación de retiro del doctor Peña, por cuyo motivo debe declararse procedente el recurso. » (Fallos, t. 114, pág. 33.) « Procede el recurso extraordinario autorizado por el artículo 14 de la ley 48, contra la sentencia dictada en juicio de apremio, que con fuerza de definitiva resuelve negativamente puntos regidos por leyes nacionales especiales invocadas en el juicio, como son las relativas a la personería de un agente de sucursal del Banco hipotecario nacional, y a la forma y oportunidad de ejercitar el derecho establecido por el artículo 4° de la ley número 3751. » (Fallos, t. 98, pág. 309.) « Tiene carácter de definitiva, a los fines del recurso extraordinario

autorizado por el artículo 14 de la ley número 48, la resolución de una cámara federal dictada en juicio ejecutivo, rechazando la ejecución por razones independientes del carácter del juicio y fundadas en leyes locales que en su texto y propósitos han sido impugnadas como contrarias al código civil y a la jurisdicción de los tribunales federales. » (Fallos, t. 103, pág. 373.)

« Procede el recurso extraordinario contra una sentencia dictada en juicio de apremio, que desconoce derechos fundados por el ejecutado en leyes especiales del congreso, en un caso en que no consta que dicha sentencia no tenga el carácter de cosa juzgada. » (Fallos, t. 121, pág. 140.)

Estas contradicciones en que ha incurrido, a pesar suyo, la suprema corte, si bien motivadas por las circunstancias especiales de cada caso, de conformidad con los principios de elevada justicia y equidad que son norma de sus resoluciones, evidencian la imposibilidad de mantener inflexible una jurisprudencia como la que ha prevalecido sobre este punto, que ha colocado al tribunal en la necesidad de apartarse de ella en determinados casos, en que su aplicación

hubiera producido consecuencias notoriamente injustas.

§ 10. Sentencias denegatorias del fuero federal

La sentencia final que niega el fuero federal a la persona que lo invoca, ya sea *ratione materiae* o *ratione personae*, debe considerarse *definitiva* a los efectos del recurso extraordinario, en toda clase de juicios, porque aun cuando en el caso hubiere lugar a una acción ordinaria ulterior, su mantenimiento, aunque sólo fuera a título provisorio, importaría la posibilidad de seguirse un juicio ante jueces sin jurisdicción, privándose a una persona del privilegio del fuero que las leyes de la nación le acuerdan, y sacándola, por consiguiente, de sus jueces naturales con violación expresa de la constitución.

En lo que respecta al caracter de definitivo del auto que en *juicio ordinario* rechaza la excepción de declinatoria o no hace lugar a la inhibitoria, fundadas en la ley nacional de jurisdicción, la jurisprudencia ha sido y es uniforme. Ha admitido siempre el recurso, salvo distinciones en lo referente a los fundamentos de la sen-

tencia recurrida, si ésta se basa en cuestiones *de hecho* aún cuando ellas sean esenciales para la apreciación del derecho, en cuyo caso el tribunal lo rechaza, sin razón a mi juicio.

En la causa del tomo 17, página 441, se rechazó el recurso contra una resolución de esta especie; pero fué porque se trataba de un juicio ejecutivo. Más adelante se verá que últimamente se ha declarado admisible el recurso aún en juicios de esta naturaleza. En la causa del tomo 19, página 335, se presentó nuevamente la cuestión, esta vez en juicio ordinario, y el procurador general, doctor Tejedor, pidió que por los fundamentos del fallo anterior, se declarase la improcedencia del recurso extraordinario. La suprema corte desestimó esta pretensión y declaró que: « consistiendo la cuestión debatida en saber si son o no aplicables al caso las leyes que confieren jurisdicción a los tribunales nacionales, y habiendo sido decidida negativamente por los de la provincia de Mendoza, procede el recurso ». Posteriormente, se ha confirmado esta jurisprudencia en innumerables resoluciones, entre las que citaré las siguientes: « De las resoluciones de los tribunales de provincia decla-

rando su competencia en una causa cuyo conocimiento corresponde a la justicia federal, puede apelarse para ante la suprema corte. » (Fallos, t. 32, pág. 292.) « Procede el recurso a la suprema corte contra las sentencias de los tribunales locales que no hacen lugar al fuero federal invocado. » (Fallos, t. 61, pág. 349.) « Puede ser traído a la suprema corte y debe concederse, el recurso de la resolución de los tribunales locales, denegando el derecho fundado en la ley nacional sobre jurisdicción de los tribunales federales, de invocar la jurisdicción de la justicia nacional. » (Fallos, t. 56, pág. 92.) « La resolución final sobre competencia de los tribunales federales corresponde a la suprema corte; y por consiguiente es apelable ante ella el auto del tribunal superior de provincia que rechaza la declinatoria de los tribunales locales, fundada en la pretensión de corresponder la causa al fuero federal. » (Fallos, t. 59, pág. 389.) « Tiene fuerza definitiva la sentencia que los tribunales locales dicten sobre competencia de la justicia federal, y la que la niegue es susceptible de recurso a la suprema corte. » (Fallos, t. 66, pág. 349 y 354; 67, pág. 193; 68, pág. 346; 66, pág. 257 y

346; 75, pág. 434.) « Las resoluciones de los tribunales de provincia, negando en última instancia la competencia de la justicia nacional, son apelables para ante la suprema corte. » (Fallos, t. 73, pág. 27.) En el mismo sentido, los siguientes fallos en que se declara procedente el recurso, en casos análogos, tanto de las sentencias de los tribunales locales como de las dictadas por las cámaras federales: tomos 76, página 394; 81, página 152; 87, página 77; 83, página 245; 88, página 26; 91, página 432; 94, páginas 43, 240 y 374; 95, página 355; 96, páginas 141 y 273; 98, páginas 335 y 428; 99, páginas 228 y 281; 100, páginas 224 y 303; 101, página 40; 102, página 153; 103, página 228; 109, página 202; 110, página 21; 111, pág. 37; 112, páginas 203 y 363; 114, página 148; 115, páginas 92 y 215; 116, páginas 44 y 279; 117, página 177; 118, páginas 236, 289 y 303; 121, página 198.

En cuanto a las sentencias denegatorias del fuero federal, dictadas en juicio ejecutivo, la jurisprudencia de la suprema corte reaccionó contra la doctrina sentada en el fallo del tomo 17, página 441, a que he hecho referencia. En

sentencias posteriores ha establecido el tribunal, que son definitivas y, por lo tanto, apelables ante la corte. En el tomo 66, página 47, declaró: « Es definitiva y procede recurso ante la suprema corte contra la resolución de los tribunales locales que, en juicio ejecutivo, rechaza la excepción de incompetencia fundada en ser la causa de fuero federal. » En la causa del tomo 95, página 269, estableció que « procede al recurso autorizado por el artículo 14, inciso 3º, de la ley número 48, contra la sentencia definitiva de los tribunales locales que declara de la competencia de los mismos un juicio ejecutivo en el cual el ejecutado, al ser citado de remate, opuso la excepción de incompetencia de jurisdicción, invocando el fuero federal fundado en la ley número 48 ». En idéntico sentido, los fallos de los tomos 98, página 317, 99, página 81 y 121, página 74. Finalmente, en las causas del tomo 108, páginas 137 y 140, declaró la corte procedente el recurso contra la resolución de un juez de paz, que ordena el desalojo no obstante haberse opuesto la excepción de incompetencia por considerar la causa del fuero federal » ; dejando sentado con esos dos fallos recaídos en juicio

sumario, como es el de desalojo, que puede apelarse ante la corte suprema siempre que el fuero federal invocado sea desconocido.

Pero para que esto suceda, es necesario que se trate de la excepción de incompetencia fundada en que la causa corresponda al *fuero federal*, y apoyada en las prescripciones de la ley nacional sobre jurisdicción. Si se tratase de una resolución recaída con motivo de una excepción de incompetencia fundada en cualquier otro motivo, o por sostenerse que la causa compete a determinado juez de sección en lugar de otro que conoce de ella, inútil sería demostrar que no habría « cuestión federal » planteada, y que, por lo tanto, el recurso extraordinario no sería admisible. La suprema corte ha declarado sobre este punto: « La excepción de incompetencia fundada en la ley local de procedimientos y en la civil, y no en la ley nacional sobre jurisdicción, no autoriza el recurso a la suprema corte contra la sentencia de los jueces locales fundada en la interpretación y aplicación de aquellas leyes. » (Fallos, t. 56, pág. 417.) « Carece de aplicación el artículo 14 de la ley número 48, si el fuero invocado por el recurrente y descono-

cido por la sentencia recurrida ha sido fundado en una ley local. » (Fallos, t. 104, pág. 51.) « No procede el recurso contra una resolución que declara corresponder el conocimiento de la causa a la jurisdicción ordinaria comercial y no a la civil como lo pretende el recurrente, que no ha invocado el fuero federal. » (Fallos, t. 115, pág. 340.) « Debe declararse bien denegado el recurso interpuesto para ante la suprema corte, del auto de los tribunales locales por el cual se desecha la excepción de declinatoria de jurisdicción del juez del crimen, fundada en la pretensión de corresponder el conocimiento de la causa al juez de lo civil de la misma localidad. » (Fallos, t. 60, pág. 183.) « No es apelable para ante la suprema corte la sentencia de la cámara criminal de la capital declarando a cuál de los jueces de instrucción de la capital corresponde el conocimiento del proceso. » (Fallos, t. 70, pág. 94.) « No está comprendido en el artículo 14 de la ley de jurisdicción, el caso de una sentencia decidiendo sobre competencia de dos autoridades provinciales para resolver una cuestión. » (Fallos, t. 13, pág. 115.) « Ha sido mal concedido el recurso interpuesto para ante la

suprema corte contra una sentencia de un tribunal militar pronunciada en una causa en que la excepción de incompetencia deducida no tendía a sacar a ésta del conocimiento de los tribunales militares. » (Fallos, t. 95, pág. 313, y 101, pág. 389.) « Es improcedente el recurso extraordinario autorizado en los artículos 14 de la ley 48 y 6° de la ley 4055, deducido alegando una cuestión de competencia, cuando la procedencia del fuero federal ha sido reconocida por las partes y sólo hay discrepancia entre ellas en cuanto a la jurisdicción territorial de un juez federal con respecto a otro del mismo fuero. » (Fallos, t. 101, pág. 186, y 119, pág. 13.) « Basada la procedencia del fuero federal por el recurrente, no en disposiciones de la constitución nacional o requisitos que ella establece, sino en la naturaleza atribuída a la acción deducida, o sea la tercería como incidente de un juicio de expropiación radicado ante la justicia federal, no procede el recurso extraordinario contra la resolución denegatoria de ese fuero, toda vez que se trata de cuestiones de procedimientos, y no se ha resuelto en contra de ningún derecho fundado en la ley nacional. » (Fallos, t. 118, pág. 356.)

En la causa del tomo 30, página 540, se opuso la excepción de *incompetencia* en un juicio por injurias ante el juez correccional de la capital, sosteniéndose que de conformidad con el artículo 32 de la constitución y 4º del código penal, estaban excluidos de la legislación criminal común los delitos cometidos por medio de la prensa, y que por lo tanto no podía ser juzgado un delito de esta naturaleza en ausencia de ley que lo castigara. Resuelta en contra esta excepción, e interpuesto el recurso extraordinario, la suprema corte lo rechazó con la disidencia de uno de sus ministros y en contra de la opinión del procurador general. Habiéndose llevado nuevamente un caso idéntico a la corte, ésta volvió sobre lo resuelto en la causa anterior, y en su fallo del tomo 36, página 265, concedió el recurso extraordinario, por haberse cuestionado la inteligencia del artículo 32 de la constitución y haber sido la decisión contraria al derecho que se hacía valer fundado en esa cláusula. Producido recientemente por tercera vez el mismo caso, la suprema corte modificó de nuevo su jurisprudencia, sentando la verdadera doctrina en su fallo del tomo 113, página

231, que dice así: « No habiendo resolución definitiva sobre cuál es la ley que ha de aplicarse, sino sobre el tribunal que ha de decidir, no puede decirse que haya decisión contra el derecho que se funda en el artículo 32 de la constitución nacional que se limita a resolver sobre la ley que ha de aplicarse. »

Tampoco es susceptible del recurso extraordinario, la sentencia por la cual los tribunales locales declaran su incompetencia, reconociendo la de los jueces nacionales, ni el auto por el que éstos rechazan una declinatoria fundada en que la causa es de fuero local. En tales casos, no existe resolución contraria a ningún privilegio, derecho, garantía o exención emergente de leyes del congreso; ni puede propiamente considerarse agraviado el que sostuvo la incompetencia de la justicia federal para conocer del asunto, porque ella ofrece iguales garantías de imparcialidad y acierto a todos los litigantes. Si el fuero federal se considera un privilegio cuya denegación da motivo a recurrir en última instancia a la corte suprema, es porque existe una presunción de que los jueces ordinarios podrían no ser estrictamente imparciales al decidir cues-

tiones federales; pero no sería legítimo establecer la presunción inversa, ni considerar un privilegio correlativo, el de litigar ante la justicia común.

La suprema corte ha desechado, con razón, los recursos interpuestos en esas condiciones. En las causas de los tomos 20, página 109; 95, página 406; 96, página 404; 101, páginas 70 y 257; 102, página 114; 103, página 91; 106, páginas 58 y 341; 109, página 348; 111, páginas 318 y 384; 113, página 427; 118, páginas 66 y 289; 114, página 30, y 120, páginas 166, 351 y 359, declaró improcedentes los recursos extraordinarios deducidos contra sentencias en que se declara corresponder el conocimiento de la causa a los tribunales nacionales; y en la del tomo 105, página 232, dejó establecido que « no procede el recurso extraordinario contra un auto que da por desaparecida una contienda de competencia entre un juez local y otro federal, por reconocer aquél la competencia de éste ».

§ 11. **Tribunales superiores**

La ley número 48 de 14 de septiembre de 1863 prescribe en su artículo 14, que sólo podrá apelarse a la corte suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los *tribunales superiores de provincia*, a los que están asimilados a los efectos del recurso extraordinario, las cámaras federales, las de apelación de la capital y los superiores tribunales militares.

Más explícita que la nuestra, la ley americana se refiere al *más alto tribunal de un estado en el cual pueda tener lugar la decisión del juicio*. La redacción del artículo 6º de la ley 4055 podría, en cambio, dar a entender que sólo se concede el recurso, en los casos en que el pronunciamiento emana del tribunal superior local, siendo así que, por el contrario, de las sentencias que éste pronuncia no se concede en muchos casos el recurso extraordinario, que habría sido procedente contra el fallo dictado en el mismo juicio por un tribunal inferior a aquél; y en otros, el recurso es admisible hasta de la resolución de un modesto juez de paz o funcionario policial.

Se consideran, pues, *superiores* o *inferiores*

los tribunales, no por su jerarquía, sino según que sus resoluciones sean o no *apelables*, en lo que se refiere a la « cuestión federal » planteada en el juicio.

La corte suprema ha declarado : « En el concepto legal se reputan tribunales superiores, en cada caso, los llamados a pronunciarse en *última instancia* y sin recurso para ante otro tribunal local. La sentencia del *juez de paz* inapelable para ante el juzgado de primera instancia y que en su caso hace cosa juzgada, es recurrible para ante la suprema corte si desconoce el derecho del fuero federal invocado. » (Fallos, t. 66, pág. 257 y 346.) « Las resoluciones de los *jueces de paz* de la capital en los juicios de desalojo, tienen fuerza de definitiva a los fines del recurso extraordinario. En consecuencia, éste debe ser interpuesto ante dichos jueces. » (Fallos, t. 108, pág. 215 y 221.) « Es definitiva a los efectos del recurso extraordinario la sentencia pronunciada en segunda instancia por un juez en lo civil de la capital en las causas que corresponden a la justicia de paz por la ley 2860. » (Fallos, t. 103, pág. 153.) « En el concepto « tribunales superiores » empleado por los referidos artícu-

los, se entiende, en cada caso, los llamados a pronunciarse en *última instancia* sin recurso para ante otro tribunal local. En la capital, las cámaras de apelación, son, pues, tribunales superiores. » (Fallos, t. 99, pág. 228.) « *La suprema corte de la provincia de Buenos Aires*, resolviendo sobre un recurso de inaplicabilidad de la ley, *no es el tribunal de última instancia* a que se refiere el artículo 14, ley 48, pues ella viene a carecer de jurisdicción para resolver las cuestiones referentes a la constitución y leyes nacionales y sólo puede ocuparse de las provinciales. » (Fallos, t. 113, pág. 381; 114, pág. 16; 116, pág. 138, y 118, pág. 338). « El recurso extraordinario sólo procede de sentencias de *última instancia*. » (Fallos, t. 104, pág. 46.) « La suprema corte federal no puede conocer por apelación de las resoluciones de los tribunales inferiores de provincia. » (Fallos, t. 29, pág. 73.) « No procede el recurso directo ante la suprema corte, de la apelación denegada por un juez de primera instancia de la capital. » (Fallos, t. 54, pág. 5.) « Correspondiendo al jefe de policía las resoluciones en materia de faltas, no procede el recurso extraordinario contra la que dicte un

comisario de la repartición. » (Fallos, t. 117, pág. 388.) « No habiéndose apelado ante el jurado establecido por la ley, y siendo esta omisión imputable al solicitante, no puede haber lugar al recurso extraordinario, pues no existe el pronunciamiento del tribunal superior exigido por la ley. » (Fallos, t. 110, pág. 387.) « El recurso extraordinario sólo se da de las sentencias definitivas dictadas por los superiores tribunales de las provincias o de la nación. No se halla en estas condiciones la sentencia de un juez de primera instancia de la ciudad de Mendoza, en que éste omite pronunciarse, por ser ello de la competencia exclusiva del superior tribunal, sobre los puntos discutidos en el juicio que precisamente han servido de fundamentos para la interposición y concesión del recurso extraordinario. » (Fallos, t. 103, pág. 218.)

Puede suceder, y sucede a menudo, que el tribunal local de última instancia, no tenga ocasión de pronunciarse sobre los puntos que darían motivo para recurrir a la suprema corte, por omisiones imputables a las partes, que dejen consentir las sentencias de los jueces inferiores sin interponer en tiempo los recursos or-

dinarios que les acuerdan las leyes de procedimientos. En casos semejantes, es indudable que no habría lugar al recurso extraordinario, puesto que la falta de un pronunciamiento definitivo sería sólo imputable a la negligencia del interesado.

Así lo ha declarado repetidas veces la corte suprema: « No procede el recurso extraordinario si el recurrente dejó consentir la resolución del tribunal inferior que no hacía lugar a la excepción de incompetencia, y de la cual había recurso ante el tribunal superior local. » (Fallos, t. 98, pág. 140.) « Es improcedente el recurso autorizado por el artículo 14, ley número 48 y fundado en que se ha alegado durante el juicio la jurisdicción originaria de la suprema corte, si resulta que el auto del juez que rechazó la incompetencia deducida fué consentido por las partes. » (Fallos, t. 106, pág. 5.)

Pero la dificultad estriba en determinar cuál es el tribunal que debe resolver si se ha dejado o no consentir la providencia de que se recurre. Es jurisprudencia establecida con sólidos fundamentos, que los tribunales locales tienen plena facultad de interpretar y aplicar sus leyes

de procedimientos, y que esta interpretación o aplicación no puede dar lugar por sí sola al recurso extraordinario, por tratarse de leyes provinciales que no están expresamente comprendidas en el artículo 14 de la ley número 48. De acuerdo con esa doctrina general, la jurisprudencia se ha inclinado a declarar que no está sujeta a revisión por la corte la resolución de los tribunales ordinarios sobre estas cuestiones.

Observo, sin embargo, que en este caso la cuestión procesal está estrechamente vinculada con el derecho de índole federal en litigio, y que, por lo tanto, no es indiferente al orden nacional que se dé por decaído *con o sin razón* un derecho cuya pérdida pueda dar origen a privar definitivamente a una persona de las garantías aseguradas por la justicia nacional. Hay, por consiguiente, casos especiales, en que la suprema corte no sólo *puede*, sino que *debe* revisar las conclusiones y los fundamentos de las sentencias locales, aún en lo referente a sus procedimientos, resolviendo sobre la regularidad de éstos, de acuerdo con las leyes locales, en cuanto sea necesario para pronunciarse sobre la cuestión federal planteada, sin perjuicio de to-

mar en cuenta, en lo posible, la interpretación corriente en el asiento del tribunal.

De no aceptarse esta conclusión, resultaría que los tribunales superiores e inferiores contra cuyas resoluciones definitivas se concede el recurso extraordinario, podrían hacerlo ineficaz y hasta suprimirlo de hecho, y con él la garantía que ofrece a los litigantes, valiéndose con este objeto de interpretaciones arbitrarias de sus leyes de forma; lo que estaría en pugna con el principio fundamental de que las prerrogativas de carácter federal no pueden ser directa ni indirectamente afectadas por ningún acto de las autoridades locales. Por temor de invadir la esfera de acción de los tribunales de provincia, la corte suprema vería a estos burlar impunemente su autoridad y su contralor, con tanta mayor facilidad cuanto mayor fuera el prejuicio que los indujera a hacerlo.

Estas conclusiones, perfectamente ajustadas a los propósitos a que responde la institución del recurso extraordinario, están apoyadas en la autoridad de la suprema corte de los Estados Unidos, la cual ha resuelto: que la sección 25 comprende todos los casos que *envuelven* dere-

chos protegidos por la constitución federal, leyes y tratados, *como quiera que fueren creados* (New Orleans v. De Armas, 9 Peters 224); *y cuando una cuestión federal está claramente planteada*, existe jurisdicción (Hall v. Jordán, 15 Wallace 393) aún en el caso de que el tribunal local al resolver una cuestión federal *ha violado una de sus propias reglas, o su procedimiento* (Darrington v. State Bank, 13 Howard 12, y Beer v. Massachusetts, 97 U. S. 25).

Entretanto, la suprema corte nacional declaró « no ser materia de revisión por la suprema corte, la resolución de un tribunal de justicia de provincia, declarando inapelable un auto dictado por los tribunales inferiores de dicha provincia ». (Fallos, t. 46, pág. 348.) Por ser incompletos los antecedentes que acompañan a esta sentencia, no puede apreciarse si ella fué dictada con o sin fundamento en el caso ocurrente. La doctrina sentada en ella, resulta peligrosa en cuanto tiende a disminuir la autoridad del tribunal.

En la causa del tomo 35, página 302, se planteó francamente la cuestión, con motivo de un recurso extraordinario interpuesto por la

sucesión del general don Justo José de Urquiza, contra una resolución que declaraba desierto un recurso en un juicio en que la sentencia del tribunal local inferior había sido contraria a la validez de actos del gobierno nacional invocados. La trascendencia del asunto, y las quejas de las personas que en él intervenían, contra presuntas venganzas políticas de que se consideraban víctimas bajo las apariencias de fallos judiciales, dieron importancia excepcional a esta causa, en la cual la corte suprema concedió el recurso declarando: « Aunque la sentencia final de los tribunales de provincia *no entre al fondo de la cuestión*, y solamente *declare desierto el recurso de apelación* interpuesto de la de primera instancia, *procede el recurso* del artículo 14 de la ley de jurisdicción de los tribunales nacionales, si en el pleito se ha puesto en cuestión la validez de leyes, decretos, autoridades o comisiones nacionales y la sentencia ha sido contraria a dicha validez. » Esta notable sentencia fué dictada contra la opinión de uno de los ministros que componían el tribunal, el cual sostuvo que no habiéndose pronunciado el superior tribunal de provincia sobre las cuestiones refe-

rentes a la ley, decreto, autoridad o comisión nacional, sino simplemente sobre una cuestión de procedimientos fundándose en una ley provincial, no procedía el recurso.

En la causa del tomo 55, página 228, decidió la corte no ser procedente el recurso, por haber quedado firme la sentencia de un tribunal inferior de provincia, debido a omisión de la parte. En este caso, el tribunal procedió a la inversa: examinó previamente si en realidad estaba desierto el recurso, y llegando a la conclusión de que efectivamente se había dejado consentir la sentencia del tribunal inferior, declaró la improcedencia. Para demostrar que no existía contradicción con la sentencia antes citada, agregó la corte que « el fallo del tomo 35 página 302, motivado por las circunstancias especiales del caso, no aprecia si había tenido lugar la deserción del recurso ». En fallos posteriores se ha modificado esta jurisprudencia. Así, se ha resuelto que « no procede el recurso extraordinario, si el auto apelado resuelve que hay cosa juzgada sobre la excepción de incompetencia que se deduce invocando el fuero federal, porque aquella es una cuestión de procedimientos

sobre la cual no puede pronunciarse la corte. » (Fallos, t. 107, pág. 57 ; 121, pág. 273). « Las resoluciones en que se declara que un recurso ha sido interpuesto fuera del término, se limitan a aplicar disposiciones de la ley procesal, y tienen por fundamento puntos de hecho por lo que no son susceptibles de ser revisadas por la corte » (Fallos, t. 108, pág. 353); con lo que queda establecido que los tribunales de provincia tienen libertad absoluta para resolver en definitiva sobre los más importantes derechos, aunque ellos estén garantizados por la constitución, leyes y tratados de la nación, si dichos tribunales declaran en virtud del poder soberano que para hacerlo les reconoce la corte, que existe *cosa juzgada* al respecto, o que se ha dejado pasar los plazos para recurrir. Sobre estos aspectos fundamentales del recurso extraordinario, he de volver nuevamente al ocuparme de la interpretación de las leyes de procedimientos, y de las cuestiones de hecho, porque considero que son los puntos más importantes en esta materia, si no ha de ser ilusoria la garantía efectiva de los derechos que el recurso extraordinario asegura en teoría.

Para concluir con lo referente a los tribunales de cuya sentencia puede recurrirse a la suprema corte, conviene recordar que debe tratarse de tribunales *judiciales*, quedando incluídos en ellos los policiales, en materia de faltas. Las resoluciones administrativas no pueden por sí solas dar origen a este recurso. Debe buscarse previamente el remedio legal que las leyes acuerden, o iniciarse la acción correspondiente, que podría ir a la justicia nacional, o aún a la suprema corte, por jurisdicción originaria, o por el recurso extraordinario si la decisión definitiva fuese de las que le dan origen, pero nunca por recurso directo a la corte. Así lo ha declarado este tribunal.

« De las resoluciones administrativas no procede el recurso directo a la suprema corte. » (Fallos, t. 64, pág. 425.) « Solo procede el recurso extraordinario contra las *sentencias*, y no contra los *decretos* del poder ejecutivo. » (Fallos, t. 119, pág. 364.) Con mucha mayor razón, por lo tanto, debe desecharse el recurso deducido contra esta clase de resoluciones ante un juez federal, que no está autorizado por ley alguna. La suprema corte declaró sobre este punto: « Ni la

constitución ni las leyes nacionales atribuyen a los jueces federales el conocimiento de actos administrativos de empleados o corporaciones de las provincias, que sólo pueden ser llevados en última instancia ante la corte suprema si se verifica el caso previsto en el inciso 2º del artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales. » (Fallos, t. 9, pág. 219.)

§ 12. Personas que pueden interponer el recurso

No existe distinción alguna legal, sobre la calidad de las partes para deducir el recurso extraordinario. Puede interponerlo cualquier persona natural o jurídica afectada en sus derechos en alguna de las formas que establece el artículo 14 de la ley 48, y puede hacerlo por sí, por medio de sus representantes legales o por mandatario con poder suficiente según las reglas procesales.

La única restricción doctrinaria que existe a este respecto, es que el recurso debe ser deducido por o a nombre de la persona directamente agraviada por el desconocimiento de la garantía

federal invocada. No puede, por consiguiente, interponerse en favor de terceros, y mucho menos como medio de obtener declaraciones generales y abstractas. Sobre el fundamento de esta restricción, me refiero a lo anteriormente expuesto sobre lo que debe entenderse por « caso » y por « caso federal ».

En los Estados Unidos se ha resuelto, que los empleados públicos carecen de personalidad para invocar o demandar la inconstitucionalidad de una ley, siempre que su interés sea oficial y no personal (*Smith v. Indiana*, 191 U. S. 138; *Braxton County Ct. v. West Virginia*, 208 U. S. 192); que la nación puede deducir un recurso extraordinario, únicamente en los casos en que podría hacerlo un particular (*United States v. Thompson*, 93 U. S. 586); lo que regiría del mismo modo entre nosotros, en los limitados casos excluidos de la jurisdicción ordinaria de apelación de la suprema corte en los juicios en que la nación es parte.

Han resuelto también los tribunales americanos, que « el recurso extraordinario deducido por una persona que se ha fugado, no puede ser atendido hasta que se someta a la jurisdicción

del tribunal inferior » (Bonahan v. Nebraska, 125 U. S. 692); y que « la ciudadanía o vecindad de las partes es indiferente » (French v. Hopkins, 124 U. S. 524); principios igualmente aplicables en nuestro país, donde las garantías constitucionales se conceden a todos los *habitantes* de la nación sin distinciones de ninguna especie.

§ 13. **Monto del asunto**

No existe tampoco limitación legal alguna en lo que se refiere al monto del asunto, debiendo, por lo tanto, entenderse que, aun cuando aparezca insignificante el interés cuestionado, e recurso extraordinario es procedente, siempre que la decisión que lo motiva pueda afectar derechos o garantías de orden nacional comprendidos en el artículo 14 de la ley 48.

Así lo ha declarado la suprema corte de los Estados Unidos (Buel v. Ness, 8 Wheaton 312), y la corte suprema argentina (Fallos, t. 113, pág. 248).

§ 14. Forma y oportunidad de plantear la cuestión federal

Con arreglo al artículo 14 de la ley 48, para que el recurso extraordinario proceda en cualquiera de los casos enumerados en los tres incisos de dicho artículo, se requiere que *en el pleito se haya puesto en cuestión* el derecho o garantía federal de que se trate.

No basta, por consiguiente, que la resolución de última instancia desconozca un derecho de carácter federal. Es menester que ese derecho haya sido invocado, por vía de acción o excepción, como capítulo o parte de las cuestiones comprendidas en la controversia, porque sólo de esa manera queda introducida en el juicio, a instancia de parte, la cuestión federal materia del recurso.

De no introducirse así la cuestión federal, se seguiría la consecuencia inaceptable de que la suprema corte podría, dentro de los poderes de su jurisdicción apelada, aparecer resolviendo originariamente cuestiones federales no comprendidas en la *litis contestatio*, respecto de las cuales no habría podido existir controversia en forma, ni decisión categórica y precisa por parte

de los jueces de la causa. La justicia federal, en tal caso supuesto, no intervendría a instancia de parte por la invocación oportuna de las garantías que son en definitiva de su resorte, sino vendría después de terminado un litigio, a revisar juicios del fuero común radicados en los tribunales de provincia, o en los tribunales inferiores de la nación, sin que ninguna manifestación de las partes reservara a éstas el derecho de acogerse eventualmente a la jurisdicción apelada extraordinaria de la corte suprema. No es dudoso, dentro de nuestro sistema judicial, que el silencio de las partes sobre la cuestión federal que puede ampararlas ante la corte, implica la radicación del juicio ante los tribunales locales e inferiores de la nación, prorrogando la jurisdicción de éstos en forma que excluye la reserva expresa o tácita del recurso extraordinario.

La jurisprudencia se muestra muy severa sobre este punto, porque el recurso extraordinario tiene que referirse forzosamente a cuestiones federales que forman parte integrante de un litigio, y no a cuestiones federales que se plantean o alegan con motivo de un pleito ya fallado.

Aplicando estos principios, la corte suprema ha declarado: « No procede el recurso extraordinario fundado en la violación de un artículo constitucional, cuando ésta *no ha sido materia de discusión* ante el tribunal superior de cuya resolución se recurre. » (Fallos, t. 23, pág. 249.) « No procede el recurso que autoriza el artículo 14 de la ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, cuando ante la justicia local *no se ha discutido* ninguno de los puntos contenidos en dicho artículo, ni se ha deducido en el juicio la excepción de incompetencia que se menciona en el recurso. » (Fallos, t. 55, pág. 129.) Debe declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto contra las sentencias de tribunales locales, cuando dicho recurso se funda en el desconocimiento de su jurisdicción y la materia jurisdiccional no ha sido puesta en cuestión ante los citados tribunales. » (Fallos, t. 60, pág. 244.) « No habiéndose puesto en cuestión ante los tribunales ordinarios, la cláusula constitucional que se invoca para fundar el recurso para ante la suprema corte, es procedente y justa su denegación. » (Fallos, t. 64, pág. 120; 111, pág. 175;

75, pág. 404 ; 77, pág. 228 ; 78, pág. 446 ; 96, pág. 393.) « Los puntos que no hayan sido materia de discusión durante el pleito, no pueden fundar el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 99, pág. 231 ; 97, pág. 18 ; 111, pág. 288 ; 112, pág. 131 ; 100, pág. 25 ; 105, pág. 125.) « En las causas criminales no puede traerse a la suprema corte el recurso por inconstitucionalidad de la ley aplicada por los tribunales ordinarios, si la cuestión no ha sido suscitada y resuelta en el proceso terminado ante ellos. » (Fallos, t. 75, pág. 317 y 387.) « En las causas resueltas por los tribunales ordinarios, en que no se ha invocado el fuero federal en la oportunidad debida y en que notificado el que ahora lo invoca del auto declarando la competencia del juzgado, no dedujo recurso alguno, no procede el recurso ante la suprema corte. » (Fallos, t. 91, pág. 17 ; 95, pág. 406 ; 96, pág. 95.) « No habiéndose puesto en cuestión la ley de registro de Saita bajo la pretensión de ser repugnante a la constitución nacional, no puede decirse que se haya resuelto a favor de dicha ley en oposición a la constitución. » (Fallos, t. 96, pág. 104.) « No habiendo el recurrente hecho valer

en el juicio un derecho emanado de la constitución nacional, y no importando la invocación del artículo 19 de la constitución que es una disposición general, el ejercicio de un título, derecho, privilegio o exención especiales, no procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 100, pág. 17.) « Para la procedencia del recurso extraordinario autorizado por el inciso 3º del artículo 14 de la ley 48, no basta manifestar hallarse amparado por una cláusula constitucional, si no se pretende y no resulta de autos, que la inteligencia de la misma ha sido cuestionada, y que la decisión sea contra la validez del título o derecho que en ella se funda y sea materia del litigio. » (Fallos, t. 103, pág. 416.) « Es improcedente el recurso extraordinario fundado en que se ha contrariado un derecho que emana de la cláusula segunda del tratado de Montevideo de 1894, si de los autos resulta que el recurrente no ha invocado la expresada cláusula, la que, por otra parte, no tiene aplicación en el caso. » (Fallos, t. 106, pág. 72.) « Es improcedente el recurso extraordinario autorizado por el artículo 14 de la ley 48 cuando no se ha puesto en cuestión durante el juicio ni posteriormente en

ocasión en que los jueces pudieran pronunciarse, ninguna cláusula de la constitución, leyes o tratados, en los casos en que procedería el recurso. » (Fallos, t. 107, pág. 252.) « En el recurso extraordinario no procede el examen de alegaciones o defensas que no hayan sido sometidas a la decisión de los tribunales inferiores. » (Fallos, t. 107, pág. 272.) « No habiéndose discutido ninguna cuestión de carácter federal, no procede el recurso a la suprema corte. » (Fallos, t. 107, pág. 436.) « La inviolabilidad de la defensa en juicio no puede fundar el recurso extraordinario cuando no ha sido discutida durante el pleito. » (Fallos, t. 117, pág. 399.)

La suprema corte de los Estados Unidos ha resuelto, también, que : « el expediente debe demostrar que la constitución o alguna ley o tratado han sido puestos en cuestión. » (Railroad Co v. Rock, 4 Wallace, 180, y muchos otros.)

He dicho que la « cuestión federal » planteada después de fallada la causa en última instancia, no puede servir para fundar el recurso. La corte suprema ha resuelto sobre este particular : « Las cuestiones de constitucionalidad que no se han debatido ante los tribunales ordina-

rios, y se suscitan después del fallo de éstos y con motivo del fallo, no autorizan el recurso a la suprema corte. » (Fallos, t. 75, pág. 183; 104, pág. 146 y 407; 89, pág. 258; 96, pág. 327.) « Es improcedente el recurso extraordinario, si los derechos invocados para fundarlo, lo han sido después de fallado el caso. » (Fallos, t. 109, pág. 37; 114, pág. 311 y 350; 115, pág. 80 y 89; 119, pág. 61; 120, pág. 323; 121, pág. 34.) « Para interponer el recurso previsto en el inciso 2º, artículo 14, ley 48, es indispensable que en el pleito, y no después de terminado éste por sentencia de última instancia, se haya puesto en cuestión la validez de las leyes locales como contrarias a la constitución nacional. » (Fallos, t. 110, pág. 85.) « No autoriza el recurso extraordinario la cita de una cláusula de la constitución nacional hecha en un pedido de aclaratoria de una sentencia que se limita a interpretar y aplicar el código civil. » (Fallos, 114, pág. 221.) « Para que sea procedente el recurso acordado en el artículo 14 de la ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, es necesario que se haya cuestionado en el pleito alguno de los puntos comprendidos en los tres

incisos de dicho artículo; no basta que con posterioridad a él se invoquen circunstancias que pudieran autorizarlo si hubieran sido materia del recurso. » (Fallos, t. 83, pág. 323.) « No basta para fundar el recurso, decir de inconstitucionalidad en el momento de deducirlo, sino que es necesario que en el pleito se haya puesto en cuestión el derecho que se pretende amparado por la constitución y desconocido por el tribunal. » (Fallos, t. 80, pág. 258; 94, pág. 316; 105, pág. 92.) « Es extemporánea a los fines del recurso del artículo 14 de la ley número 48, la cuestión de inconstitucionalidad alegada por primera vez al interponerse el recurso. » (Fallos, t. 107, pág. 245; 109, pág. 325; 111, pág. 60; 112, pág. 24; 114, pág. 444; 115, pág. 411; 116, pág. 23 y 308; 118, pág. 159; 120, pág. 32 y 216; 121, pág. 80, 223 y 399.) « Es extemporánea a los efectos del recurso extraordinario, la alegación de inconstitucionalidad de una cláusula legal hecha en la memoria a que se refiere el artículo 8º de la ley 4055. » (Fallos, t. 108, pág. 269; 120, pág. 216.)

¿ Es requisito indispensable para la procedencia del recurso, que la cuestión federal se plan-

tee ante los jueces inferiores, o basta que lo sea ante el superior tribunal local ? La corte ha declarado que « para la procedencia del recurso basta que se plantee la cuestión federal en tales circunstancias del pleito que pueda producirse decisión al respecto, como lo es al contestarse la expresión de agravios. » (Fallos, t. 102, pág. 87.) Sin embargo, no hay que tomar a la letra esta doctrina, porque también ha resuelto que : « No procede el recurso extraordinario cuando los tribunales locales no se han creído habilitados, según sus leyes procesales, y no se han pronunciado sobre la cuestión federal, por no haberse planteado en primera instancia. » (Fallos, t. 94, pág. 95 ; 95, pág. 43 ; 108, pág. 167.) La procedencia o improcedencia del recurso depende, pues, en este caso, de la ley procesal local. Si ésta autoriza a los tribunales superiores a pronunciarse sobre puntos de derecho no comprendidos en la litis, pero invocados ante ellos por las partes, el recurso se concede : de lo contrario debe rechazarse.

Si en el pleito se ha invocado un derecho de los que pueden dar lugar al recurso extraordinario, y esta defensa se ha abandonado ante los

tribunales superiores, discutiendo tan sólo ante ellos puntos regidos por el derecho común; o si se ha interpuesto un recurso que se refiere únicamente a materias « no federales »; de la sentencia que aquellos tribunales dicten no habrá recurso ante la suprema corte. Este tribunal ha declarado: « Si pronunciada sentencia por el consejo de guerra especial, el procesado no obstante haber manifestado en la vista de la causa que desea dejar constancia a los fines de la ley que ulteriormente pudieran sobrevenir, que se ha limitado el derecho de defensa en contra del texto expreso de la constitución y del código de justicia militar en virtud de una disposición reglamentaria por la que se le obliga a elegir defensor dentro del número limitado de oficiales residentes en una ciudad; interpone contra aquélla solamente el recurso referente a la calificación legal del hecho, prescindiendo del relativo al quebrantamiento del procedimiento, no procede el recurso extraordinario contra el fallo del consejo supremo de guerra y marina, que se limita, dentro del recurso interpuesto ante él, a las cuestiones de clasificación legal de los hechos establecidos por el consejo especial con el carác-

ter de irrevocables. » (Fallos, t. 110, pág. 210.) Otro tanto sucede cuando de las sentencias de las cámaras de apelación de la provincia de Buenos Aires se deduce los recursos de inaplicabilidad de la ley o inconstitucionalidad (provincial), en la substanciación de los cuales no puede la suprema corte de la provincia resolver sino sobre la materia propia de dichos recursos. Su interposición importa la renuncia al recurso extraordinario. (Fallos, t. 113, pág. 381; 114, pág. 16; 116, pág. 138; 118, pág. 338; 86, pág. 324.)

Puede suceder que, sin haber sido invocados ni discutidos por las partes en el juicio local, el tribunal de última instancia se pronuncie sobre puntos que habrían podido dar origen al recurso si hubieran sido puestos en cuestión ante él. ; Debe en tal caso concederse el recurso interpuesto por el agraviado? En la causa del tomo 102, página 356, la corte suprema resolvió: « Es procedente el recurso extraordinario autorizado por el artículo 14 de la ley 48, contra una resolución fundada en el tratado con la Gran Bretaña del año 1825 y en la ley número 163, aún cuando al hacerse el pedido que motivó la

resolución recurrida no se hubiere invocado el referido tratado, ni se haya cuestionado, en autos, su inteligencia, bastando, a los efectos del recurso, que aquél haya sido expresamente tenido en consideración en el auto apelado. » La ilustrada minoría del tribunal, compuesta por los doctores Bermejo y Daract, votó en disidencia, fundándose en razones ilevantables.

La doctrina de este fallo que se aparta de todos los principios que rigen la materia, no ha prevalecido en la jurisprudencia, y en sentencias posteriores declaró la corte: « Si la excepción de prescripción discutida se fundó en el código de comercio, no procede el recurso extraordinario aunque el tribunal al fallar lo haga basándose en una ley nacional (la de liquidación del Banco nacional). » (Fallos, t. 110, pág. 109). « Fundada una demanda exclusivamente en disposiciones de derecho común, no procede el recurso extraordinario aún cuando la sentencia apelada hubiese citado disposiciones de leyes especiales. » (Fallos, t. 119, pág. 19.)

**§ 15. Relación entre el objeto del litigio y las cuestiones
federales planteadas**

Las cuestiones federales debatidas en el juicio ante los tribunales locales, deben tener una relación directa e inmediata con la materia del litigio (art. 15, ley 48). No basta, por consiguiente, para hacer procedente el recurso extraordinario, la mención vaga o indeterminada de garantías generales de la constitución, ni la invocación de artículos de ésta o leyes de la nación que no se relacionen con el pleito, pues en tal caso la solución que a ellas se diera, carecería de influencia sobre el resultado del mismo. Llevadas a la corte suprema darían lugar a un pronunciamiento inoficioso (ver § 6), y sólo servirían en definitiva para entorpecer la marcha normal del juicio.

Con razón, pues, la suprema corte ha desechado invariablemente los recursos extraordinarios deducidos en casos de esta naturaleza, declarando al respecto : « La referencia general e indeterminada a una cláusula de la constitución nacional no basta para decirse planteada en el pleito alguna de las cuestiones previstas

en el artículo 14, ley 48; *y aun la invocación precisa y determinada de la inteligencia de alguna cláusula de la constitución nacional no autoriza el recurso extraordinario si éste no tiene una relación directa e inmediata con la cuestión planteada y resuelta por el tribunal de cuya sentencia se recurre.* » (Fallos, t. 121, pág. 144.) « No habiéndose puesto en cuestión en el pleito un derecho derivado de la constitución nacional, la invocación del artículo 67 de ésta como elemento ilustrativo, no autoriza el recurso a la suprema corte. » (Fallos, t. 94, pág. 324.) « La circunstancia de haberse invocado la violación de un artículo de la constitución nacional, no basta para hacer procedente el recurso extraordinario autorizado por el artículo 14 de la ley número 48, si esa disposición no ha sido discutida en el juicio. » (Fallos, t. 95, pág. 311.) « Debe rechazarse el recurso interpuesto contra una sentencia de los tribunales locales, si la cuestión materia del pleito no tiene relación directa o inmediata con los puntos previstos en el artículo 14 de la ley número 48. » (Fallos, t. 97, pág. 112; y 105, pág. 107; 121, pág. 306.) « Es improcedente el recurso extraordinario, si las garantías constitucionales

invocadas en el pleito no tienen relación directa con las cuestiones debatidas, y la solución de la causa no depende de la interpretación de aquellas garantías. » (Fallos, t. 115, pág. 162 ; y 119, pág. 270.) « No procede el recurso extraordinario autorizado por el artículo 14, inciso 3º de la ley número 48, contra una sentencia que, fundada en disposiciones del código civil, sólo incidentalmente hace referencias a las leyes nacionales de expropiación de bienes y autenticación de documentos. » (Fallos, t. 112, pág. 238.) « No bastan referencias generales e indeterminadas a la constitución nacional, leyes o tratados para considerarse planteada en el pleito alguna de las cuestiones previstas en el inciso 3º del artículo 14, ley 48. » (Fallos, t. 114, pág. 161 ; 121, pág. 138.) « Para la procedencia del recurso extraordinario, no basta citar un artículo constitucional : se requiere que la decisión del pleito dependa de la inteligencia que se dé a la cláusula constitucional invocada. » (Fallos, t. 115, pág. 341 ; 120, pág. 145 y 329.) « En un juicio de reivindicación discutido y resuelto dentro del derecho común y leyes procesales, la simple referencia al principio de la inviolabilidad de

la propiedad no basta para dar lugar al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 116, pág. 149.) « Alegándose que se ha violado el artículo 18 de la constitución, y resultando de la propia exposición del recurrente, que la prueba que se ha negado no es suya sino de un tercero, no aparece la relación directa e inmediata del fundamento del recurso con las cuestiones constitucionales que se citan, y no procede, por consiguiente, el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 109, pág. 251.) « No procede el recurso autorizado por el artículo 14 de la ley número 48, contra la sentencia que se funda en disposiciones del derecho común, aun cuando en la demanda, que también se apoya en las disposiciones de ese derecho, se haya citado el artículo 17 de la constitución nacional, sin fundar directamente en él la acción instaurada. » (Fallos, t. 97, pág. 285.) El mismo principio sirvió de fundamento al fallo del tomo 113, página 231, a que antes me he referido, en el cual la corte resolvió: « No habiendo resolución definitiva sobre cuál es la ley que ha de aplicarse, sino sobre el tribunal que ha de decidir, no hay decisión contraria al derecho que se funda en el

artículo 32 de la constitución que se limita a resolver sobre la ley que ha de aplicarse », pues en el juicio se había planteado la « cuestión federal » de incompetencia, invocando una disposición que se limita a prohibir al congreso federal la sanción de leyes sobre determinada materia.

La corte suprema de los Estados Unidos ha resuelto que un recurso fundado en que un tribunal inferior de estado ha declarado que cierta ley es « válida y constitucional », y un considerando en que la corte suprema del estado establece que « no es en ningún sentido repugnante a la constitución de los Estados Unidos », no da jurisdicción, por ser demasiado indefinido. (Edwards v. Elliot, 21 Wallace 532.)

El mismo tribunal ha declarado también : « No es indispensable que se haga mención de la cláusula de la constitución, ni la cita de ésta, siendo solamente necesario que se haya usado frases adecuadas para describir alguna disposición de la constitución. » (Spencer v. Merchant, 125 U. S. 352.) Nuestra corte suprema, para considerar planteada una cuestión federal, exige citas concretas (Fallos, t. 85, pág. 395), habien-

do también declarado que: « no basta para la procedencia del recurso extraordinario, invocar implícitamente una garantía constitucional, sino que hay que fundar en ella el derecho que se pretende ». (Fallos, t. 112, pág. 79.)

§ 16. Resolución contraria

El orden nacional queda afectado, y se hace necesaria por consiguiente la intervención de la suprema corte en ejercicio de su jurisdicción apelada, cuando la sentencia de última instancia de los tribunales locales o inferiores de la nación, es *contraria* a las pretensiones de un litigante que invoca un derecho de los enumerados en el artículo 14 de la ley 48. Pero si la decisión fuera *favorable* a sus intereses, esto importaría el reconocimiento formal por parte de los tribunales locales, de la supremacía de las instituciones federales impuesta por el artículo 31 de la constitución, y el recurso extraordinario, destinado a mantener esa supremacía, carecería entonces de objeto.

Es por este motivo que el inciso 1° de la referida disposición legal acuerda el recurso

cuando cuestionada la validez de un tratado, ley o autoridad de la nación, la decisión sea *contra su validez*; que el inciso segundo lo concede cuando impugnada una ley, decreto o autoridad de provincia como contraria a la constitución, tratados o leyes del congreso, la decisión sea *a favor* de la primera, o sea *en contra* de la última; y que el inciso 3º, finalmente, lo permite cuando se pronuncie *decisión contraria* a la validez de un título derecho, privilegio o exención fundados en las instituciones o leyes nacionales.

La suprema corte de los Estados Unidos, interpretando la disposición casi idéntica de la ley americana, ha resuelto reiteradamente que: « La cuestión federal, para que proceda el recurso extraordinario, debe haber sido resuelta contra el derecho pretendido por el recurrente » (Murdoch v. Memphis, 20 Wallace 636) y no en favor de la validez de la ley, tratado o constitución (Ryan v. Thomas, 4 Wallace 604).

La corte suprema nacional ha decidido: « es admisible el recurso de resoluciones de los tribunales superiores de provincia, cuando aparece haberse puesto en cuestión la inteligencia de

las estipulaciones de un tratado (o de una ley nacional), y resuelto en contra de la validez del privilegio que en ellas se funda y es materia del litigio. » (Fallos, t. 42, pág. 69; 96, pág. 424; 98, pág. 226.) « No basta a los efectos de la procedencia del recurso autorizado por el artículo 14 de la ley número 48 a que se refiere el artículo 6° de la ley número 4055, que se haya cuestionado disposiciones de carácter nacional; es necesario que haya desconocimiento de un derecho, título, privilegio o exención fundado en dichas disposiciones. » (Fallos, t. 96, pág. 420; 94, pág. 258; 113, pág. 317.) « Para que proceda el recurso autorizado por el artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863, es necesario que la decisión sea contraria a la validez de la ley o del título, derecho, privilegio o exención que en ella se funda. » (Fallos, t. 91, pág. 128.)

Es improcedente el recurso extraordinario contra una sentencia que fundada en el artículo 8° de la ley 4707 no desconoce derecho alguno fundado en él. » (Fallos, t. 112, pág. 86.)

« La corte suprema sólo puede tomar conocimiento de las sentencias pronunciadas por los tribunales de provincia, cuando en ellas se des-

conoce la validez de un tratado público, de una ley del congreso, de un acto del presidente de la nación, o cuando se invalida un título fundado en una cláusula de la constitución o de las leyes nacionales. » (Fallos, t. 2, pág. 34 y 88; 14, pág. 142; 47, pág. 56.) « De las sentencias de los tribunales superiores de provincia corresponde el recurso a la suprema corte cuando se ha puesto en cuestión la validez de una ley nacional, y la decisión ha sido contra su validez. » (Fallos, t. 25, pág. 13.) « La corte suprema es el intérprete final de la constitución, y siempre que se haya puesto en duda la inteligencia de sus cláusulas, y la decisión sea contra el derecho que en ella se funda, la sentencia de los tribunales provinciales está sujeta a la revisión de la suprema corte » (Fallos, t. 1º, pág. 340; 39, pág. 265.) « Es apelable ante la suprema corte la sentencia final de los tribunales locales que desconoce el derecho que basándose en una ley nacional pretende tener el recurrente. » (Fallos, t. 57, pág. 385 y 412; 60, pág. 158.)

« No puede ocurrirse a la suprema corte en apelación de sentencia de los tribunales superiores de las provincias, cuando la sentencia

dictada por el superior tribunal, lejos de ser contraria a la validez de la decisión de la comisión militar instituída en el Paraguay por los gobiernos aliados, se funda precisamente en ella. » (Fallos, t. 12, pág. 409). « Habiéndose resuelto interpretando la ley nacional invocada por el recurrente, no procede el recurso a la suprema corte. » (Fallos, t. 100, pág. 41.) « No procede el recurso a la suprema corte de la resolución de los tribunales ordinarios en que su pronunciamiento ha sido a favor de la constitución. » (Fallos, t. 82, pág. 232; 102, pág. 65.) « La decisión de los tribunales de provincia declarando inconstitucional una ley, no es susceptible de recurso ante la suprema corte. » (Fallos, t. 41, pág. 429.) « Siendo la sentencia recurrida favorable a los derechos invocados fundados en ley nacional, no procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 102, pág. 306; 110, pág. 308.) « Fundada una acción en la cláusula de un tratado, y resuelto el pleito en favor de aquélla, no procede el recurso que autoriza el artículo 14 de la ley 48. » (Fallos, t. 109, pág. 439). « Es improcedente el recurso extraordinario autorizado por el artículo 14 de la ley número 48,

cuando se ha cuestionado la inteligencia de una ley de amnistía, y la decisión ha sido pronunciada a favor del derecho que en dicha ley se ha fundado. » (Fallos, t. 105, pág. 72.) « La imposición de una multa por tribunal provincial competente, por infracción a la ley de papel sellado, no importa una decisión contraria a ningún derecho fundado en ley nacional. » (Fallos, t. 107, pág. 16.) « Estando consentida respecto de una de las partes, y no conteniendo decisión contraria al derecho invocado por la otra (el ministerio fiscal) que invocara fundado en ley nacional, no procede el recurso. » (Fallos, t. 107, pág. 36 y 146.) « No conteniendo la resolución apelada, decisión contraria a la validez de la sentencia de la suprema corte que se invoca, no procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 107, pág. 282.) « Del auto de un tribunal de provincia declarando la incompetencia de los tribunales provinciales, no procede el recurso que autoriza el artículo 14 de la ley 48. » (Fallos, t. 20, pág. 109.) « No procede el recurso extraordinario contra la sentencia definitiva que declara la causa de la competencia de la justicia federal. » (Fallos, t. 95, pág. 406; 101, pág. 70; 102,

pág. 114; 103, pág. 91; 106, pág. 58 y 341; 109, pág. 348; 111, pág. 318 y 384; 113, pág. 427; 118, pág. 66 y 289; 120, pág. 166, 351 y 359.) « No procede el recurso extraordinario contra la sentencia otorgando una carta de ciudadanía, pues se ha resuelto a favor y no en contra de un derecho fundado en una ley nacional. » (Fallos, t. 110, pág. 344.) « La decisión declarando indispensable la venia del congreso para demandar a la nación en un caso dado, no es susceptible de recurso extraordinario porque es favorable a la exención fundada en la ley 3668. » (Fallos, t. 116, pág. 20.) « El inciso 3º del artículo 14, ley 48, sólo concede el recurso extraordinario al litigante a quien se desconozca la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en alguna cláusula de la constitución, tratado o ley del congreso o comisión ejercida en nombre de la nación, recurso que responde al propósito de evitar el peligro de que se dé a las leyes especiales del congreso una interpretación restringida que las deje sin efecto o desvirtúe su alcance, por lo que él no tiene razón de ser cuando las sentencias reconocen los derechos fundados en

esas leyes o los aplican de oficio favorablemente a las pretensiones de la parte vencedora en el juicio. » (Fallos, t. 119, pág. 423). « No procede el recurso extraordinario contra una resolución que no desconoce la validez y eficacia de una patente del apelante dentro de los límites que le acuerda la ley, y que por el contrario reconoce la validez de dicho título. » (Fallos, t. 120, pág. 265.) « Para la procedencia del recurso extraordinario no basta que se haya discutido durante el juicio la inteligencia de una cláusula de la constitución, de un tratado o ley del congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional, requiriéndose indispensablemente que la decisión definitiva sea contraria a la validez del título, derecho, privilegio o exención fundada en dicha cláusula, en cuyas condiciones no se encuentra un auto que, sin entrar en el examen de si existió o no culpa o negligencia en los actos u omisiones imputados, se limita a resolver que un magistrado de la justicia local de la capital no puede ser traído a los tribunales sin que previamente haya sido despojado del fuero. Tal resolución es favorable a la exención acordada por el artículo 45 de la

constitución a los funcionarios que en él se enumera, y por lo tanto no se encuentra comprendida en los términos y propósitos del artículo 14, ley 48. » (Fallos, t. 116, pág. 409.) « No procede el recurso extraordinario contra una sentencia fundada en la ley nacional 3445 en que apoyó su acción el demandado, y no el recurrente, actor en el juicio. » (Fallos, t. 114, pág. 214.) « No procede el recurso extraordinario cuando no es el apelante el que invocó la disposición reglamentaria en que se basa el recurso. » (Fallos, t. 121, pág. 188.) « Aunque haya cuestión sobre la inteligencia de una ley nacional (la 4707), si la decisión es favorable a la exención que en ella se funda, no puede la otra parte apelar sosteniendo que se ha resuelto en contra de la inteligencia que ella le ha dado. » (Fallos, t. 120, pág. 198.)

Tampoco sería admisible el recurso, si la decisión fuese favorable a los intereses del litigante que invocó la garantía federal, aun cuando la sentencia desconociese tal garantía y fundara su resolución en motivos de otro orden. En tal caso, el recurso extraordinario carecería de objeto, tendiendo sólo a obtener declaraciones

abstractas que los tribunales no pueden hacer. Así lo declaró la suprema corte: « No procede el recurso extraordinario contra una resolución que si bien declara constitucional una ordenanza que el recurrente impugnó como contraria a la carta fundamental, no es contraria sino favorable al derecho invocado por éste, por declarar no serle aplicable esa ordenanza. » (Fallos, t. 115, pág. 233.) Análoga resolución recayó en la causa del tomo 94, página 444, anteriormente citada (ver § 6).

§ 17. Resolución implícitamente contraria

Puesto en cuestión un derecho de índole federal, procede el recurso extraordinario no sólo en el caso de que la sentencia final lo desconozca, sino también cuando omite pronunciarse sobre él. Esta regla no necesita demostrarse con mayores desenvolvimientos, pues es consecuencia lógica y necesaria de los fines a que responde la institución del recurso: el hecho de no tomarse en consideración las disposiciones legales oportunamente invocadas por un litigante, importa resolver implícitamente en

contra de las mismas, y es obvio que no podrían quedar enervadas por esa omisión, ya fuere involuntaria o deliberada.

Este principio ha sido consagrado por la suprema corte nacional, al decidir que: « La circunstancia de no haberse discutido de contrario ni tomado en consideración por la sentencia de primera ni de segunda instancia el artículo constitucional invocado, no quita a la resolución apelada el que ella sea contraria al derecho que se ha querido hacer valer fundándose en dicho artículo. » (Fallos, t. 97, pág. 211.) « Debe declararse bien concedido el recurso que autoriza el artículo 14, inciso 3º, ley 48, si puesta en cuestión durante el pleito la validez de una ley del congreso en el concepto de ser repugnante al principio de igualdad consagrado por el artículo 16 de la constitución nacional, la resolución final ha sido implícitamente contraria al derecho fundado en dicho artículo. » (Fallos, t. 97, pág. 214.) « Procede el recurso del artículo 14, ley 48, contra una sentencia que si bien no tomó en cuenta explícitamente la intervención del poder ejecutivo nacional o de una de sus dependencias (en el caso, la dirección de

ferrocarriles), en el acto autorizado por ésta, cuya eficacia es desconocida por el fallo recurrido, tal acto fué alegado oportunamente por el apelante como base de su defensa y tendría influencia en el resultado del juicio en caso de ser legal. » (Fallos, t. 110, pág. 281.) « Habiéndose sostenido que la interpretación en tal sentido de un artículo del código civil sería contraria a la constitución nacional, procede el recurso extraordinario aún cuando el superior tribunal haya omitido pronunciarse sobre este punto, si es que no se ha consignado en su resolución que la ley respectiva de procedimientos le impidió tomar en cuenta la cuestión planteada, en razón de la oportunidad en que lo fué. » (Fallos, t. 113, pág. 429.) « No obsta a la procedencia del recurso extraordinario, la circunstancia de no haber pronunciamiento expreso en la resolución apelada acerca del alcance de las disposiciones invocadas. » (Fallos, t. 113, pág. 438.) « A los efectos de la procedencia del recurso extraordinario, no es indispensable que el tribunal de última instancia se pronuncie expresamente sobre la cláusula de carácter federal cuestionada en el pleito, pues su silencio puede equivaler a una

decisión contraria.» (Fallos, t. 115, pág. 411.) « Aún cuando en la sentencia definitiva no se haya hecho pronunciamiento categórico en el sentido de que una ley provincial sea compatible con la constitución nacional, procede el recurso extraordinario, si en el juicio se adujeron oportunamente razones fundadas en la última para sostener la inaplicabilidad de la primera, y el mismo tribunal *a quo* interpreta su propia resolución juzgándola favorable a la ley provincial al conceder el recurso para ante la corte suprema. » (Fallos, t. 115, pág. 111.) « Alegada durante el juicio como defensa, la inconstitucionalidad de una resolución administrativa, procede el recurso extraordinario contra la sentencia denegatoria de la exención invocada, aún cuando el inferior, en razón de la errónea calificación dada por el recurrente a su petición, no se haya pronunciado sobre la inconstitucionalidad. » (Fallos, t. 118, pág. 360.) « Habiéndose invocado garantías de orden constitucional para pedir la nulidad de una sentencia de primera instancia, procede el recurso extraordinario contra la del inferior, que, al confirmar aquélla, no toma en cuenta dichas garantías porque: « la ley autori-

za el recurso de nulidad contra la violación de las formas de la sentencia o del procedimiento, y el recurrente lo funda en la violación de garantías de orden constitucional, que puede fundar el recurso de apelación y no el de nulidad. » (Fallos, t. 118, pág. 390.)

Los mismos principios que informan estas resoluciones, han dado ocasión a que la suprema corte de los Estados Unidos declare: « Cuando se requiere la venia del tribunal superior (local) para llevar un juicio (en apelación) ante él, la negativa del tribunal recaída en una petición en forma sobre otorgamiento de la venia, es equivalente a un fallo confirmatorio, y constituye una sentencia del más alto tribunal, que da origen al recurso. » (Gregory v. Mc. Veigh, 23 Wallace 306.)

§ 18. Constitución nacional

Siempre que en juicio se resuelve en contra de derechos fundados en las disposiciones de la constitución nacional, es procedente el recurso. La declaración de que sus disposiciones no son aplicables al caso o de que su inteligencia no es

la dada por el recurrente, importa resolución en contra.

La suprema corte ha declarado : « Cuestionada en juicio la inteligencia de disposiciones de la constitución nacional, sosteniéndose por el recurrente que en virtud de ellas el congreso no ha podido sancionar una ley, con arreglo a la cual ha sido condenado, procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 98, pág. 156.) « La corte suprema es el intérprete final de la constitución y siempre que se haya puesto en duda la inteligencia de sus cláusulas, y la decisión sea contra el derecho que en ella se funda, la sentencia de los tribunales de provincia está sujeta a la revisión de la suprema corte. » (Fallos, t. 1º, pág. 340.) « Si los tribunales superiores de las provincias, interpretando un artículo de la constitución nacional y una ley del congreso, declarasen que no son aplicables al caso, esta decisión es apelable para ante la suprema corte federal. » (Fallos, t. 17, pág. 286.) « Procede el recurso autorizado por el artículo 14 de la ley número 48 cuando en el escrito de demanda se alega violación de los derechos consagrados por las prescripciones de la constitución nacional y

la sentencia recurrida declara que no hay inconstitucionalidad. » (Fallos, t. 97, pág. 367.) « Procede el recurso extraordinario contra un fallo del juez correccional que confirma una multa impuesta por la policía de la capital, cuando se ha puesto en cuestión durante el juicio la inteligencia de varias disposiciones constitucionales y la decisión ha sido contraria a la exención fundada en ellas. » (Fallos, t. 98, pág. 370.) « Procede el recurso extraordinario contra una sentencia que desconoce un derecho fundado en una disposición de la constitución nacional. » (Fallos, t. 119, pág. 134 y 322; 120, pág. 170.) « Discutido ante los tribunales locales el alcance de las garantías del artículo 18 de la constitución, y siendo la resolución definitiva contraria a lo sostenido por el apelante, procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 120, pág. 307.) « Procede el recurso contra una resolución contraria al derecho fundado en el artículo 7º de la constitución. » (Fallos, t. 114, pág. 309; 120, pág. 224.)

Siendo la constitución la ley suprema de la nación, el recurso debe concederse aún cuando el fallo se apoye en una ley nacional. La supre-

ma corte ha resuelto : « Habiéndose sostenido que la interpretación en determinado sentido de un artículo del código civil sería repugnante a la constitución nacional, procede el recurso extraordinario aún cuando el superior tribunal no se haya pronunciado sobre el punto. » (Fallos, t. 113, pág. 429.) « Cuestionada la constitucionalidad de la ley nacional 3764, si la decisión es aplicando esa ley, aún cuando no se tome en cuenta en ella la inconstitucionalidad invocada, procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 107, pág. 151.) « Procede el recurso extraordinario contra una resolución que rechaza una impugnación de inconstitucionalidad contra la ley 7055. » (Fallos, t. 114, pág. 89.)

§ 19. **Tratados con las potencias extranjeras**

Los tratados celebrados con las naciones extranjeras constituyen obligaciones contraídas por la nación en su carácter de persona del derecho internacional. La fe pública está, pues, comprometida en que sus prescripciones se cumplan estrictamente por todos los habitantes y autoridades del país. Para asegurar ese resultado, han

sido colocados por el artículo 31 de la constitución, entre las leyes supremas que los gobiernos de provincia deben respetar no obstante cualquier disposición en contrario que contuvieran sus constituciones o leyes locales.

El artículo 14 de la ley de jurisdicción los ha incluído entre las leyes cuya interpretación puede dar origen al recurso extraordinario. La suprema corte ha declarado: « Es admisible el recurso de los tribunales superiores de provincia, cuando aparece haberse puesto en cuestión la inteligencia de las estipulaciones de un tratado, y resuelto en contra de la validez del privilegio que en ellas se funda y es materia del litigio. » (Fallos, t. 42, pág. 69.) « Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que deniega un embargo preventivo solicitado fundándose en disposiciones del congreso sudamericano de derecho internacional privado. » (Fallos, t. 112, pág. 5.) « Desconocido un derecho que se ha pretendido fundar en disposiciones del tratado de derecho procesal aprobado por la ley 3192, procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 118, pág. 127.) « Procede el recurso extraordinario contra una sentencia denegato-

ria de un derecho amparado por la ley 163 y el protocolo de 1899 subscripto por esta república y Francia. » (Fallos, t. 114, pág. 399.)

§ 20. **Leyes dictadas por el congreso**

También da lugar al recurso extraordinario la interpretación de las leyes dictadas por el congreso, en los ramos que son de su resorte según el artículo 67 de la constitución, con las excepciones que se verá más adelante.

La suprema corte ha declarado : « De las sentencias de los tribunales superiores de provincia corresponde el recurso a la suprema corte cuando se ha puesto en cuestión la validez de una ley nacional y la decisión ha sido contra su validez. » (Fallos, t. 25, pág. 13; en el mismo sentido, t. 57, pág. 385 y 412; 60, pág. 158; 100, pág. 353.) « Puesta en cuestión la inteligencia de la ley de creación del Banco nacional, que es ley del congreso, de la resolución dada por el tribunal superior de la capital en contra del derecho pretendido por el banco, procede el recurso a la suprema corte. » (Fallos, t. 28, pág. 110.) « Es apelable para ante la suprema corte la sen-

tencia de los tribunales provinciales que desconoce un derecho fundado en la ley especial de creación del banco hipotecario nacional. » (Fallos, t. 68, pág. 321 ; 115, pág. 9, 181 y 416.) « Es procedente el recurso de apelación autorizado por el artículo 14 de la ley 48 contra una resolución de superior tribunal que contraría el derecho fundado en el artículo 20 de la ley nacional número 3037. » (Fallos, t. 97, pág. 341 ; 98, pág. 136 y 143 ; 113, pág. 25). « La cuestión sobre la inteligencia de la ley nacional de 15 de octubre de 1885, decidida en contra del derecho fundado en ella, autoriza el recurso sancionado por el artículo 14, inciso 3º, de la ley sobre competencia de los tribunales federales. » (Fallos, t. 35, pág. 96). « Debe declararse bien concedido el recurso para ante la suprema corte de la sentencia de los tribunales ordinarios que ha aplicado la ley nacional de inconversión número 1734 en contra de las pretensiones del recurrente fundadas en ella. » (Fallos, t. 76, pág. 399 ; 96, pág. 5.) Análogas resoluciones se registran en la colección de fallos de la suprema corte, con motivo de sentencias que desconocían derechos fundados en diversas leyes del congre-

so, a saber: las leyes número 4311 de amnistía y electoral número 4161 (t. 101, pág. 216; y 98, pág. 421); número 4927, de papel sellado (t. 114, pág. 438; y 121, pág. 28); número 163, sobre intervención de los cónsules extranjeros en las sucesiones de sus connacionales (t. 114, pág. 399); número 4707, de organización militar (t. 114, pág. 33); número 3764, de impuestos internos (t. 91, pág. 369); número 346, de ciudadanía (t. 96, pág. 108); números 52 y 845, de pesas y medidas (t. 98, pág. 320); número 2873, de ferrocarriles (t. 98, pág. 355; 101, pág. 110; 107, pág. 401; 116, pág. 10); número 3973, de marcas de fábrica, comercio y agricultura (t. 98, pág. 385; 110, pág. 5 y 432; 116, pág. 30; 120, pág. 80; 121, pág. 96); número 44, de autenticación de actos públicos y procedimientos judiciales (t. 72, pág. 249; 114, pág. 309; 120, pág. 224); número 1190, sobre supresión de los derechos de arancel de escribanos (t. 108, pág. 73); leyes y ordenanzas de aduana (t. 111, pág. 293; 112, pág. 432; 114, pág. 256; 115, pág. 95 y 375; 116, pág. 381; 117, pág. 293; 118, pág. 5; 120, pág. 267); número 4699, sobre cesión

de la universidad de La Plata (t. 115, pág. 99); número 4560, reglamentaria de ciertos profesiones (t. 116, pág. 8); número 817, sobre inmigración (t. 117, pág. 165; 121, pág. 46); etc., etc.

En cuanto a las excepciones a que he aludido, y de las cuales me ocuparé en seguida, ellas se refieren a las leyes de carácter local, a los códigos comunes, y a las leyes de procedimientos.

Tampoco se considera leyes nacionales a los efectos del recurso, las dictadas con anterioridad a la constitución que hoy nos rige. La razón la da la suprema corte en su fallo del tomo 90, página 239, que dice: « La controversia sobre el vigor del reglamento de justicia de 1813 no puede autorizar el recurso para ante la suprema corte, de resoluciones de los tribunales superiores de la capital, basándose en tener dicho reglamento carácter nacional, porque el artículo 31 de la constitución y el artículo 14 de la ley número 48 se refieren a las leyes que *en consecuencia* de la constitución se dicten por el congreso. »

§ 21. Códigos comunes

La constitución argentina se apartó de su modelo, dando al congreso federal la facultad de dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería. En el artículo 67, inciso 11°, se estableció también que esta facultad de dictar tales códigos *no alteraría las jurisdicciones locales*, y que su aplicación correspondería a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.

Esta excepción, consignada igualmente en el artículo 100 de la constitución, que somete a la justicia nacional las causas regidas por las leyes nacionales *con la reserva hecha en el inciso 11° del artículo 67*, responde a dejar a las provincias su administración de justicia propia, que carecería de objeto si las causas regidas por el derecho común fuesen de la competencia de los tribunales federales. Esto afectaría a la autonomía de las provincias, y excedería de los motivos que tuvieron los constituyentes para apartarse del sistema norteamericano de dejar a cada estado la absoluta libertad de dictar sus

códigos, en el deseo de evitar los inconvenientes que ocasionaría la existencia dentro del país de catorce legislaciones diversas y posiblemente contradictorias.

De acuerdo con estos principios, el artículo 15 de la ley de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, después de establecer la manera de interponer el recurso, agrega : « quedando entendido que la interpretación o aplicación que los tribunales de provincia hicieren de los códigos civil, penal, comercial y de minería, no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11º, artículo 67, de la constitución ».

No obstante la claridad de estas disposiciones, son innumerables los casos llevados a la corte por el recurso extraordinario, con motivo de la aplicación e interpretación de los citados códigos. A este respecto ha declarado el tribunal : « Las sentencias de los tribunales provinciales aplicando los códigos civil, penal, de comercio y de minería no son susceptibles de recurso a la suprema corte de justicia nacional. » (Fallos, t. 1º, pág. 17; 26, pág. 140; 36, pág.

307; 55, pág. 253.) « No están comprendidas en las disposiciones del artículo 14 de la ley sobre competencia de los tribunales federales, las cuestiones sobre interpretación y aplicación de los códigos comunes. » (Fallos, t. 46, pág. 122; 50, pág. 9; 62, pág. 190; 76, pág. 130; 77, pág. 403; 97, pág. 108; 62, pág. 274 y 279; 63, pág. 102.) « La aplicación del derecho común por los tribunales locales no puede fundar el recurso ante la suprema corte. » (Fallos, t. 50, pág. 26; 53, pág. 359; 116, pág. 156; 58, pág. 191 y 226; 60, pág. 88; 74, pág. 343; 97, pág. 298; 100, pág. 382; 106, pág. 112 y 179; 73, pág. 175; 75, pág. 183; 76, pág. 309; 77, pág. 228; 80, pág. 95 y 258; 82, pág. 31; 91, pág. 143; 94, pág. 296 y 363; 95, pág. 39; 102, pág. 127; 105, pág. 358; 108, pág. 458; 109, pág. 253; 115, pág. 274; 116, pág. 436; 119, pág. 28, 154 y 114; 98, pág. 100; 91, pág. 127; 60, pág. 74; 61, pág. 133; 104, pág. 293.) « La aplicación e interpretación del código civil no puede fundar un recurso ante la suprema corte. » (Fallos, t. 41, pág. 349; 95, pág. 363; 94, pág. 129; 95, pág. 24; 96, pág. 132; 100, pag. 261; 103, pág. 340; 109, pág. 171, 174,

178 y 189; 110, pág. 32 y 202; 112, pág. 166, 238 y 320; 114, pág. 157; 115, pág. 279; 117, pág. 257; 118, pág. 319; 119, pág. 175; 120, pág. 290; 116, pág. 310; 121, pág. 223); ni la ley de matrimonio civil complementaria del mismo (Fallos, t. 64, pág. 414; 76, pág. 258; 94, pág. 129; 95, pág. 24; 114, pág. 270.) « La prescripción está regida por el derecho civil, y no puede fundar un recurso extraordinario, aún cuando se hiciere citas de la constitución en la demanda. » (Fallos, t. 110, pág. 167.) « No procede el recurso extraordinario autorizado por el artículo 14 de la ley 48 contra una resolución que aplica el código civil en sus disposiciones relativas a la prejudicialidad de las cuestiones criminales en el juicio civil y a la prescripción de las acciones, aún cuando en el juicio se haya puesto en cuestión cuál es el verdadero texto oficial del código civil invocándose la ley que lo sancionó, puesto que dicha controversia no importa otra cosa que la interpretación y aplicación del mismo código. » (Fallos, t. 105, pág. 40.) « Un juicio de interdicto está regido por el derecho civil y no da motivo al recurso extraordinario si no se ha puesto en

cuestión la validez de una ley nacional. » (Fallos, t. 113, pág. 58.) « Un juicio de reivindicación, discutido y resuelto dentro del derecho común y leyes procesales, no da lugar al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 116, pág. 149.)

« No procede el recurso ante la suprema corte contra las sentencias de los superiores tribunales locales en los casos de interpretación y aplicación de las disposiciones del código penal » (Fallos, t. 52, pág. 286; 89, pág. 414; 91, pág. 170; 114, pág. 115; 116, pág. 106; 119, pág. 388; 62, pág. 56; 121, pág. 153 y 154); ni de la ley 4189 de reformas al mismo (Fallos, t. 102, pág. 112; 103, pág. 254; 105, pág. 329); ni tampoco de la ley número 9143 que le ha sido incorporada. (Fallos, t. 120, página 410.)

« La interpretación y aplicación por los tribunales locales del código de comercio, no puede dar lugar al recurso ante la suprema corte. » (Fallos, t. 87, pág. 102 y 419; 108, pág. 59; 110, pág. 109; 111, pág. 60; 114, pág. 290; 118, pág. 174; 120, pág. 145 y 290; 121, pág. 153; como tampoco puede darla a juicio de la corte la ley de quiebras número 4156.

(Fallos, t. 109, pág. 192; 110, pág. 152; 111, pág. 5; 119, pág. 24 y 358.)

Se ha asimilado el código de justicia militar a los códigos comunes a los efectos del recurso extraordinario, a pesar de ser ley dictada por el congreso, porque de lo contrario estaría la suprema corte constituída en tribunal de última instancia en todas las causas del fuero militar, lo que no tendría ninguna ventaja y sí muchos inconvenientes. Así lo declaró la corte suprema : « La interpretación del código de justicia militar por los tribunales competentes, al igual que la de los códigos comunes y leyes de procedimientos, no puede fundar el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 112, pág. 121.)

Pero a pesar de esta excepción referente a los códigos civil, comercial, penal, de minería y de justicia militar, ellos no dejan por eso de ser leyes supremas de la nación que los tribunales locales deben respetar. De las sentencias que declaran la invalidez de alguna de sus disposiciones procede por consiguiente el recurso ante la corte. Así lo resolvió este tribunal en la causa del tomo 68, página 238, en que la cámara de apelaciones de la capital declaró la

inconstitucionalidad de un artículo del código de comercio.

§ 22. Leyes de carácter local dictadas por el congreso

Ni los artículos 31 y 100 de la constitución, ni el artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia de 1863, hacen distinción alguna entre las leyes de la nación, salvo la excepción ya mencionada relativa a los códigos comunes. Podría pues entenderse, a primera vista, que las leyes que el congreso dictase en uso de la facultad que le acuerdan los incisos 14° y 27° del artículo 67 de la constitución, para organizar por una legislación especial los territorios nacionales y ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital federal y en los demás lugares especificados en el último de los citados incisos, revestirían el mismo carácter que las demás leyes de la nación, a los efectos del recurso extraordinario, por ser leyes dictadas por el congreso en consecuencia de la constitución, según los términos del artículo 31.

Tal interpretación superficial ha sido uniformemente desechada, porque falsearía el con-

cepto de la jurisdicción federal en los lugares y territorios en que la nación ejerce una autoridad exclusiva.

Tanto en la capital como en los territorios nacionales, el gobierno federal reviste al mismo tiempo el carácter de autoridad local con respecto a todas las materias de gobierno que la constitución reserva a la soberanía de las provincias, por no estar delegadas a la nación; y de esta manera, la acción de los poderes nacionales en virtud de sus facultades delegadas, es substancialmente distinta de la que ejercen en su carácter de gobierno local. De este concepto, y por aplicación de la facultad otorgada en el inciso 28° del artículo 67 de la constitución, se ha deducido y afirmado, incommoviblemente, el principio de la dualidad de funciones a que responde la distinción entre las leyes nacionales dictadas para toda la nación sobre materias delegadas al gobierno general, y las leyes dictadas por el congreso, de acuerdo con los citados incisos 14°, 27°, 28° del artículo 67 de la constitución, procediendo como legislatura local en los lugares en que ejerce exclusiva jurisdicción.

Bajo ese punto de vista, y especialmente en

lo que atañe al recurso extraordinario, esas leyes como las autoridades dependientes del gobierno federal que las aplican, se encuentran asimiladas a las leyes y a las autoridades de una provincia.

Estos principios han sido consagrados en multitud de sentencias por la jurisprudencia uniforme de la suprema corte nacional, que ha declarado al respecto : « La interpretación y aplicación de las leyes dictadas por el congreso para el régimen y gobierno de la capital y territorios nacionales, no fundan el recurso autorizado por el artículo 14 de la ley nacional de jurisdicción y competencia. » (Fallos, t. 91, pág. 380.) « La interpretación y aplicación de un decreto del poder ejecutivo nacional reglamentario de una ley del congreso para la capital y territorios nacionales, no autoriza el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 117, pág. 7.) « Habiéndose puesto en cuestión en el pleito leyes dictadas por el congreso en su carácter de legislatura local, el recurso del artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia es improcedente, sin que surta el fuero federal la circunstancia de tratarse de casos regidos por leyes nacionales. » (Fallos,

t. 94, pág. 351; y en el mismo sentido, t. 94, pág. 225; 105, pág. 103.) « Las resoluciones fundadas en la ley número 4097 que prohíbe los juegos de azar en la capital y territorios nacionales, no pueden fundar el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 113, pág. 240.) « La ley 4855 de impuestos a las herencias es una ley local para la capital y territorios nacionales, cuya interpretación no puede fundar el recurso ante la suprema corte. » (Fallos, t. 115, pág. 341; 117, pág. 15.) « La ley número 8890 de impuesto a las herencias es local y no puede, por consiguiente, fundar el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 117, pág. 22.) « La ley número 4058 es relativa al gobierno de la capital federal y territorios nacionales, y su interpretación y aplicación no da lugar al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 110, pág. 372.) « La interpretación y aplicación de las leyes del congreso relativas al régimen y gobierno de la capital no dan lugar por sí solas al recurso autorizado por el artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia. » (Fallos, t. 48, pág. 71 y 111; 71, pág. 258; 72, pág. 307; 96, pág. 325; 109, pág. 5 y 348; 116, pág. 134.)

« La aplicación de la ley de patentes para la capital no autoriza el recurso a la suprema corte de las resoluciones de los tribunales ordinarios de la misma. » (Fallos, t. 83, pág. 355; 65, pág. 126; 114, pág. 161; 116, pág. 134.) « No procede el recurso a la suprema corte de sentencias de los tribunales de la capital en las que se han interpretado leyes de carácter local. » (Fallos, t. 56, pág. 312.) « La ley que organiza los tribunales de la capital y crea el registro de la propiedad, hipotecas, embargos e inhibiciones, no es una ley nacional en el sentido del artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia, y habiéndose sólo invocado un derecho fundado en la misma sin poner en cuestión que ella fuera contraria a la constitución nacional, el recurso autorizado por el citado artículo 14 es improcedente. » (Fallos, t. 96, pág. 258; y en el mismo sentido, t. 107, pág. 21; 108, pág. 171; y 119, pág. 358.) « Es improcedente el recurso extraordinario en un juicio en que se discute la interpretación de la ley orgánica de la municipalidad de la capital. » (Fallos, t. 114, pág. 292.) « La interpretación y aplicación del código rural para los territorios

nacionales, no autoriza el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 116, pág. 69.)

Hay leyes que contienen disposiciones de carácter general y disposiciones de carácter local. Tal es la ley 7055 que modifica la organización de los tribunales de la capital, desdoblando la cámara de lo comercial, criminal y correccional y creando una segunda cámara civil. El artículo 4º de esa ley modifica también la ley de jurisdicción número 4055, quitando el recurso de apelación ordinario ante la corte en las causas criminales. Procederá el recurso extraordinario contra las sentencias fundadas en leyes de esta naturaleza, según las disposiciones que en ellas se apliquen. Así lo resolvió la suprema corte en la causa del tomo 116, página 20, declarando : « La interpretación de la ley 3668 en su parte de carácter local como es el artículo 6º no da lugar al recurso extraordinario. »

Existe finalmente otra clase de leyes nacionales dictadas por el congreso con carácter general en cuanto sean aplicadas por las autoridades nacionales, y con carácter local si las aplican las autoridades de la capital o territorios. Tratándose de leyes de esta clase, la procedencia

del recurso dependerá de las autoridades que las apliquen. Así lo resolvió la suprema corte nacional con respecto a la ley de sellos (Fallos, t. 90, pág. 385), declarando improcedente el recurso interpuesto contra una resolución de los tribunales de la capital, denegando un derecho que se pretendía fundar en ella; y últimamente, lo ha declarado de nuevo con respecto a ley de expropiación, que dice ser de carácter local cuando la aplican las autoridades del municipio, del mismo modo que se convierte en la ley provincial cuando las provincias la adoptan (recursos de hecho interpuestos por la municipalidad de la capital en los juicios de expropiación seguidos contra los herederos de Manuel J. Aguirre, y otros.)

**§ 23. Actos jurisdiccionales o de autoridad ejercidos
a nombre de la nación**

Las resoluciones de los tribunales de provincia que nieguen eficacia a los actos jurisdiccionales ejercidos en nombre de la nación, admiten el recurso extraordinario. Así lo declaró la suprema corte en la causa del tomo 9, página 405, en

que la cámara comercial de la capital rehusó dar cumplimiento a lo ordenado en un exhorto del juez de sección de Buenos Aires. En las causas de los tomos 99, página 170, y 107, página 282, se declaró improcedentes los recursos interpuestos, « por no haberse puesto en cuestión » la validez de la sentencia de la suprema corte invocada. En la causa del tomo 109, página 239, se declaró procedente el recurso, si en un pleito de reivindicación seguido ante los tribunales locales se ha opuesto como defensa un título de dominio otorgado en un juicio de expropiación ante la justicia nacional y se ha fallado en última instancia desconociendo la validez de ese título ; y finalmente, en la causa del tomo 35, página 302, la suprema corte declaró: « procede el recurso del artículo 14 de la ley de jurisdicción de los tribunales nacionales, si en el pleito se ha puesto en cuestión la validez de decretos, autoridades o comisiones nacionales y la sentencia ha sido contraria a dicha validez. Tal es la sentencia que, habiendo sido puesto en cuestión el dominio de un campo a título de venta ordenada por un juez nacional, y la libertad de ejercer judicialmente derechos sobre él por im-

pedírselo las autoridades creadas por el congreso, decide en contra de la venta y de dicha libertad ».

Los títulos expedidos en nombre de la nación pueden dar lugar a la interposición del recurso en caso de ser desconocidos. Tal sucedería si una provincia se negase a inscribir en la matrícula un título profesional expedido por alguna de las universidades nacionales. La suprema corte ha declarado al respecto: « Habiéndose negado eficacia a un título de calígrafo expedido a nombre de la nación, procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 113, pág. 294.) « Desconocida la eficacia de un título otorgado por el comisario nacional de patentes de invención, marcas de fábrica, de comercio y de agricultura, procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 120, pág. 175.)

Los decretos reglamentarios de las leyes nacionales y en general, todos los actos del poder ejecutivo nacional, dan como aquellas leyes origen al recurso. Así se ha declarado respecto del reglamento general de ferrocarriles (Fallos, t. 115, pág. 296); y en la causa del tomo 71, página 144, en que se había hecho valer « de-

rechos derivados de actos del gobierno nacional »; así como en los tomos 76, página 284, y 114, página 353, en que se resolvió contra la validez de un decreto del poder ejecutivo. Conviene tener presente a este respecto, la distinción ya hecha en otro lugar, entre el poder ejecutivo de la nación cuando obra en tal carácter y cuando sólo procede como gobierno local para los lugares sometidos a su jurisdicción.

§ 24. Constituciones y leyes de provincia

La interpretación dada por los tribunales de provincia a sus propias leyes, no interesa directamente al orden nacional. Aun cuando ella fuera equivocada o arbitraria, no podría fundar el recurso ante la suprema corte, porque versaría sobre materias no delegadas al gobierno central, respecto de las cuales las provincias conservan un derecho de legislación exclusivo, y no afectaría de un modo inmediato sino a los derechos de sus propios ciudadanos. El remedio contra esos abusos sería de carácter puramente político, cuando ellos demostrasen que la justi-

cia local no estuviese asegurada como una de las condiciones fijadas en el artículo 5° de la constitución, para garantizar a las provincias el goce y ejercicio de sus instituciones.

Así lo ha declarado repetidas veces la corte suprema: « No corresponde el recurso a la suprema corte cuando la controversia resuelta por los tribunales locales versa sobre derechos y deberes derivados de las constituciones provinciales y no se ha resuelto nada en contrario a las disposiciones de la constitución nacional. » (Fallos, t. 90, pág. 224; 94, pág. 363; 104, pág. 429; 71, pág. 15; 113, pág. 201; 114, pág. 42 y 311; 121, pág. 144.) « La corte suprema no puede pronunciarse en el recurso extraordinario sobre la conformidad de las leyes locales con las constituciones locales. » (Fallos, t. 18, pág. 29; 120, pág. 216; 117, pág. 386; 104, pág. 291.) « La corte carece de jurisdicción para substanciar y resolver el recurso interpuesto contra una sentencia de tribunal de provincia en que se interpreta solamente leyes provinciales que no tienen conexión con las instituciones nacionales. » (Fallos, t. 2, pág. 34; 54, pág. 470; 96, pág. 150; 65, pág. 126; 69, pág. 387; 111,

pág. 24; 104, pág. 51; 110, pág. 131; 113, pág. 381; 94, pág. 350.)

§ 25. **Leyes, decretos o autoridades locales impugnados como repugnantes a la constitución, leyes o tratados de la nación.**

Si las constituciones o leyes de provincia, o las dictadas por el congreso en su carácter de legislatura local, no pueden fundar por sí solas el recurso extraordinario, el inciso 2º del artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863, lo autoriza cuando se hubiere puesto en cuestión la validez de una de esas leyes, bajo la pretensión de repugnar a las instituciones nacionales, y la decisión final hubiere sido a favor de su validez.

Aplicando esta disposición, la suprema corte ha resuelto: « La justicia nacional es incompetente para juzgar de la validez de leyes provinciales, con excepción del caso en que se trate de una violación de los preceptos de la constitución nacional o de las leyes y tratados sancionados por el congreso. » (Fallos, t. 7, pág. 373; 91, pág. 124.) « Cuando no se ha puesto en cuestión un decreto provincial bajo la preten-

sión de ser repugnante a la constitución nacional, no corresponde el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 5, pág. 335; 22, pág. 304; 101, pág. 156.) « Puesta en cuestión una ley de provincia bajo la pretensión de ser repugnante a la constitución nacional, y pronunciada la sentencia final de los tribunales provinciales en favor de la validez de la ley, corresponde a la suprema corte el recurso de apelación de dicha sentencia. » (Fallos, t. 10, pág. 380; 117, pág. 264; 23, pág. 647; 27, pág. 16; 98, pág. 230; 100, pág. 157; 102, pág. 87 y 286; 115, pág. 111; 117, pág. 433.) « Procede el recurso extraordinario contra una resolución de un superior tribunal de justicia que declara de la competencia del jurado el conocimiento de los delitos de imprenta, habiéndose sostenido por el recurrente la inconstitucionalidad de dicha institución. » (Fallos, t. 120, pág. 239.)

Conviene aquí recordar que la suprema corte ha declarado que « en el artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, no está comprendido el caso de una ley provincial *dictada y ejecutada* antes de la in-

corporación de la provincia a la nación. » (Fallos, t. 5, pág. 326.)

Las leyes locales dictadas por el congreso han sido asimiladas a las leyes de provincia, por los motivos expuestos en el lugar correspondiente (ver § 22). Si se sostuviese que sus preceptos repugnasen a la constitución o leyes nacionales, el recurso sería procedente. La corte así lo resolvió en la causa del tomo 100, página 351, de sus fallos: « Es procedente el recurso extraordinario cuando se ha puesto en cuestión en el pleito la constitucionalidad de una ordenanza municipal y de leyes dictadas por el congreso en su carácter de legislatura local, habiendo sido la resolución recurrida en favor de la validez de las mencionadas leyes y ordenanzas. »

Con mucha mayor razón procede el recurso si la sentencia apelada se basa en una ordenanza municipal impugnada como contraria a las instituciones nacionales. La corte ha resuelto en ese sentido, además de la citada causa del tomo 100, página 351, las de los tomos 98, página 67, y 107, página 263, declarando en la primera: « Es procedente el recurso extraordinario

cuando se ha alegado la inconstitucionalidad de una ordenanza municipal y ha recaído resolución definitiva contraria a las pretensiones formuladas en la demanda »; y en la última: « Habiéndose alegado la inconstitucionalidad del tiro a la paloma ante el comisario, y siendo la resolución definitiva de la policía contraria a esa pretensión, por decir que aquella institución está autorizada por una ordenanza municipal, esto implica declarar la constitucionalidad de esa ordenanza y por consiguiente, procede el recurso extraordinario. »

Aunque los códigos civil, comercial, penal y de minería no dan lugar por sí solos al recurso extraordinario, en virtud de las cláusulas expresas contenidas en los artículos 100 y 67, inciso 11º, de la constitución, y 15 de la ley 48, la suprema corte ha declarado con razón en la causa del tomo 76, página 351, que « la restricción del artículo 15 de la ley de jurisdicción y competencia no comprende el caso en que se invoca la violación de una disposición del código civil, no por haber sido mal interpretada y aplicada sino por haberse prescindido de ella, y haberse aplicado en su lugar, la disposición de una ley

provincial repugnante a aquélla. » Después de esta sentencia que hizo jurisprudencia, la corte ha resuelto: « Habiéndose puesto en cuestión en el pleito la validez de una ley de provincia como contraria a disposiciones del código civil, y pronunciándose la sentencia final en favor de su validez, el recurso del artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia es procedente, pues la impugnación de esa ley importa hacer valer el derecho emanado de la constitución, en cuanto niega a los estados la facultad de alterar los códigos de fondo (art. 108 de la constitución). » (Fallos, t. 94, pág. 366.) « Es procedente el recurso extraordinario cuando se ha puesto en cuestión la inteligencia de la ley de tierras de una provincia, como contraria al código civil, y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en el código civil. » (Fallos, t. 98, pág. 222; y 101, pág. 26.) « No discutiéndose la inteligencia de determinadas disposiciones del código civil, y estando en tela de juicio la validez de una ley local en cuanto altera, según el recurrente, la legislación nacional sobre sucesiones hereditarias, procede el recurso autorizado en el artículo 14 de la ley 48. » (Fallos, t. 100,

pág. 157.) « Procede el recurso extraordinario de la resolución de una cámara federal dictada en juicio ejecutivo, rechazando la ejecución por razones fundadas en leyes locales impugnadas en su texto y propósitos como contrarias al código civil. » (Fallos, t. 103, pág. 373.) « Aunque la ley 2787 formara parte integrante del código penal, procedería el recurso extraordinario, pues la cuestión a resolver sería entonces si la ordenanza municipal impugnada como contraria a aquella ley, está o no en pugna con la sanción por el congreso (art. 67, inciso 11º, de la constitución). » (Fallos, t. 107, pág. 263.)

Análogos principios se aplican en el caso de una ley local dictada por el congreso, si ella contraría alguna disposición de los códigos comunes. El congreso tiene facultades para modificar los códigos de fondo, pero sólo puede hacerlo por leyes de carácter general, y no cuando procede como legislatura local, pues en este último caso, iría contra los propósitos que informan la disposición del artículo 67, inciso 11º, de la constitución, en cuanto sanciona la uniformidad de la legislación civil, penal, comercial y minera. La suprema corte así lo ha re-

suelto, declarando: « Corresponde a la corte suprema, conocer de un recurso en que se ha impugnado la validez de una ley local (la ley número 8890 de impuestos a las herencias para la capital y territorios nacionales) como contraria a las disposiciones del código civil y a lo dispuesto en el inciso 11° del artículo 67 de la constitución. » (Fallos, t. 117, pág. 22.)

§ 26. Leyes de procedimientos

Las leyes de procedimientos son de carácter puramente local. Su interpretación y aplicación por los tribunales de provincia no da origen al recurso extraordinario, a menos de haber sido impugnadas como violatorias de las garantías de la defensa consagradas por la constitución nacional, o de algún otro derecho de índole federal.

La suprema corte así lo ha declarado en numerosas decisiones. (Fallos, t. 1°, pág. 38; 98, pág. 384; 99, pág. 49; 55, pág. 167; 58, pág. 191; 97, pág. 298; 102, pág. 24; 111, pág. 274; 94, pág. 241 y 363; 100, pág. 349; 114, pág. 281; 58, pág. 226 y 444; 60, pág. 88;

2, pág. 117; 102, pág. 43; 62, pág. 190; 64, pág. 427; 111, pág. 396 y 430; 109, pág. 348; 65, pág. 58; 70, pág. 416; 71, pág. 15; 72, pág. 44; 73, pág. 234; 74, pág. 343; 95, pág. 291; 97, pág. 44; 100, pág. 25; 109, pág. 45 y 162; 110, pág. 440; 109, pág. 383 y 428; 112, pág. 320; 113, pág. 36 y 201; 114, pág. 159; 117, pág. 384; 64, pág. 225 y 401; 66, pág. 376; 67, pág. 38 y 275; 69, pág. 387; 76, pág. 130 y 374; 96, pág. 44 y 350; 112, pág. 168; 114, pág. 350; 83, pág. 428; 95, pág. 363; 96, pág. 239; 84, pág. 78; 85, pág. 370; 121, pág. 153 y 263.)

Ha resuelto también el mismo tribunal: « La aplicación e interpretación del código de procedimientos criminales no autoriza el recurso para la suprema corte. » (Fallos, t. 89, pág. 414; 97, pág. 270; 100, pág. 426; 104, pág. 439; 111, pág. 92; 114, pág. 145; 118, pág. 56 y 319; 119, pág. 284 y 388.) « La ley 2755 que amplía el código de procedimientos criminales de la capital, territorios y tribunales federales, no es una ley nacional que deben aplicar los tribunales provinciales, pues los procedimientos son materia de legislación local y su

desconocimiento por ellos no da lugar al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 104, pág. 284.) « No son definitivas y no pueden por consiguiente dar lugar al recurso extraordinario las sentencias de las cámaras federales que resuelven cuestiones de procedimientos. » (Fallos, t. 95, pág. 133 y 134; 96, pág. 118 y 131; 101, pág. 445; 120, pág. 205.) « No da lugar al recurso extraordinario la interpretación de la ley 3981 de reformas a la justicia federal. » (Fallos, t. 114, pág. 11.) « La interpretación y aplicación de la ley 4550 complementaria del código de procedimientos, es ajena al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 111, pág. 54; 113, pág. 124; 118, pág. 201.) « No da lugar al recurso extraordinario la interpretación de la ley 4128 modificatoria del código de procedimientos de la capital. » (Fallos, t. 115, pág. 11; 119, pág. 417.) « La simple interpretación y aplicación de la ley número 3266 sobre recusación sin causa, no impugnada como contraria a la constitución nacional, no da lugar al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 110, pág. 175; 115, pág. 62; 119, pág. 130.)

Cabe observar que el fundamento que da la

corte para declarar improcedente el recurso en este último caso, no es del todo convincente. Lo niega por tratarse de una ley ampliatoria del código de procedimientos federales, que a juicio del tribunal tampoco puede dar origen al recurso. Ahora bien, no hay disposición legal alguna que excluya de la jurisdicción de la corte las leyes de procedimientos. Si la jurisprudencia las ha excluido en general, ha sido por tratarse de leyes *locales*, lo que no ocurre con respecto a las leyes *nacionales* de procedimientos, que tienden a hacer efectivo el propósito contenido en el preámbulo de la constitución, de « afianzar la justicia », asegurando a todos los habitantes del país que litiguen ante la justicia federal, las garantías necesarias para la defensa de sus derechos. No hay, pues, más motivo fundado para rehusar el recurso, contra los autos que aplican esas leyes, que el de no tratarse de sentencias *definitivas*. Pero en el caso de la recusación sin causa, por ejemplo, la sentencia que niega ese derecho, o que resuelve el fondo del asunto sin tomar en consideración la recusación interpuesta, es definitiva respecto de la cuestión planteada, y contraría los derechos de un liti-

gante, fundados, con o sin razón, en una ley nacional.

« La diversidad de interpretación de las leyes federales de procedimientos por las cámaras federales, no da lugar al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 119, pág. 130.) « La interpretación y aplicación de las leyes de procedimientos en lo que a juicio sumario se refiere, no dan lugar al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 100, pág. 409.) « No tratándose de una sentencia definitiva, ni importando la omisión de un trámite de procedimiento una violación del derecho de defensa, el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 es improcedente. » (Fallos, t. 96, pág. 318.) « Los defectos u omisiones de las formas procesales para las sentencias definitivas, no autorizan el recurso extraordinario ante la corte suprema. » (Fallos, t. 118, pág. 51 y 255.)

« No procede el recurso extraordinario que se funda en el artículo 7° de la constitución si no se trata de la ejecución en una provincia de sentencia dictada en otra provincia, sino de los efectos dentro del orden local, de la sentencia pronunciada por los tribunales de la misma pro-

vincia; punto regido por las leyes respectivas de procedimientos.» (Fallos, t. 100, pág. 49.) « La sentencia que resuelve sobre un pedido de nulidad de un juicio ejecutivo, fundándose en razones de derecho procesal, no da origen a la interposición del recurso extraordinario. » (Fallos, t. 107, pág. 172.) « Es improcedente el recurso de apelación extraordinario contra una sentencia de los tribunales ordinarios que por aplicación del código local de procedimientos rechaza una acción de jactancia. » (Fallos, t. 118, pág. 377.) « La extensión y alcance de las formas procesales correspondientes a la substanciación de los interdictos de *habeas corpus*, regidos por las disposiciones del código de procedimientos en lo criminal, no autoriza el recurso extraordinario. » (Fallos, 114, pág. 419.) « No procede el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 si la resolución apelada es un auto de mero procedimiento. » (Fallos, t. 103, pág. 264.) « No procede el recurso extraordinario contra el auto que resuelve una mera incidencia procesal, por no ser sentencia definitiva. » (Fallos, t. 118, pág. 60.) « De las providencias interlocutorias referentes al procedimiento, no

procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 57, pág. 296.) « No da lugar al recurso extraordinario la denegación a inscribir en los registros de la cámara de apelaciones de la capital un título de escribano público otorgado en la provincia de Buenos Aires, por no haberse cumplido las formalidades prescriptas por la ley orgánica de los tribunales de la capital. » (Fallos, t. 31, pág. 62.) « El caso de negarse inscripción en la matrícula de abogados de una provincia en mérito de diploma otorgado por otra, no da lugar al recurso. » (Fallos, t. 11, pág. 444, y 40, pág. 405.) « La resolución de los tribunales ordinarios mandando devolver un escrito por no estar firmado por letrado, no autoriza el recurso a la suprema corte, por tratarse de la interpretación de las leyes de procedimientos, y no ser definitiva. » (Fallos, t. 72, pág. 78; 79, pág. 399; 121, pág. 285.) « El auto negando al procurador de la parte el derecho de informar *in voce* es interlocutorio y no da origen al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 58, pág. 374; 64, pág. 422; 70, pág. 25; 79, pág. 383.) « No procede recurso para ante la suprema corte de de la sentencia de los tribunales locales que no

admite, en virtud de sus leyes de procedimientos, el nombramiento de defensor en causa criminal recaído en persona que no es abogado, pues *prima facie* se observa que no hay resolución contraria a un derecho fundado en el artículo 18 de la constitución invocado, que sólo garantiza la libertad de defenderse por sí y no por medio de apoderado, que puede ser reglamentada. » (Fallos, t. 83, pág. 325; y en el mismo sentido, t. 92, pág. 167; 94, pág. 20 y 328; 109, pág. 152; 119, pág. 156.) « Las cuestiones sobre personería son materias de simple procedimiento, que no dan lugar por sí solas al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 105, pág. 183; 112, pág. 73 y 91). « La resolución de los tribunales locales sobre personería del acusador en un juicio criminal por estafa, no es recurrible para ante la suprema corte nacional. » (Fallos, t. 41, pág. 65.) « No procede el recurso extraordinario contra una resolución fundada en la facultad que la ley de procedimientos acuerda a los jueces para proveer de oficio defensor a los procesados. » (Fallos, t. 115, pág. 80.)

« La suspensión del ejercicio de la profesión de abogado, ordenada por un tribunal de pro-

vincia, no da lugar al recurso del artículo 14 de la ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales. » (Fallos, t. 31, pág. 229.) « El auto de los tribunales ordinarios imponiendo una pena disciplinaria al escribano autorizante de una escritura irregular, en virtud de la superintendencia que ejerce por la ley, no es recurrible para ante la suprema corte. » (Fallos, t. 82, pág. 451.) « No procede recurso extraordinario de las resoluciones de los tribunales ordinarios o cámaras federales, imponiendo penas disciplinarias. » (Fallos, t. 85, pág. 97; 100, pág. 41; 101, pág. 95; 121, pág. 72.) « No procede el recurso extraordinario interpuesto contra una medida para mejor proveer. » (Fallos, t. 115, pág. 32.) « La providencia dictada por los tribunales ordinarios que decide un incidente relativo a la forma de las notificaciones en juicio, que no afecta ni tiene influencia para definitiva, no autoriza el recurso a la suprema corte. » (Fallos, t. 75, pág. 28.) « No procede el recurso extraordinario contra una resolución que se limita a resolver un incidente sobre arraigo del juicio, por aplicación de las leyes procesales. » (Fallos, t. 112, pági-

na 75.) « No procede el recurso extraordinario contra un auto denegatorio de un pedido de levantamiento de embargo. » (Fallos, t. 117, pág. 416.) « Es improcedente el recurso extraordinario contra un auto de sobreseimiento provisorio. » (Fallos, t. 98, pág. 72.) « Es improcedente el recurso extraordinario contra una resolución que deja sin efecto una regulación de honorarios hecha por el inferior. » (Fallos, t. 102, pág. 297.) « No procede recurso de apelación contra las regulaciones hechas en última instancia por una cámara federal, cuando no se ha alegado inconstitucionalidad de las disposiciones legales aplicadas. » (Fallos, t. 97, pág. 421.) « No tiene carácter de sentencia definitiva un auto de que manda devolver un memorial. » (Fallos, t. 105, pág. 238.) « Un auto que resuelve una cuestión de recusación no da lugar al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 109, pág. 69.) « El haberse dictado sentencia con tres jueces en vez de cinco, no autoriza recurso ante la suprema corte. » (Fallos, t. 87, pág. 111.) « No da lugar al recurso extraordinario una cuestión sobre integración de un tribunal, regida exclusivamente por las leyes

provinciales de procedimientos. » (Fallos, t. 108, pág. 265.) « La cuestión de si el tribunal ha estado habilitado para fallar el proceso sin la intervención de todos sus miembros, no puede fundar el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 116, pág. 116 y 149.) « No da lugar al recurso extraordinario una resolución de la cámara que declara inapelable un auto señalando nueva audiencia. » (Fallos, t. 120, pág. 231.) « Es improcedente el recurso extraordinario contra un auto que ordena la reposición del papel sellado y multa correspondiente, sin haberse planteado ni resuelto cuestión alguna en ese incidente, de las comprendidas en el artículo 14 de la ley 48. » (Fallos, t. 104, pág. 242.) « La resolución de una corte de justicia que declara bien denegado un recurso, aplicando para ello las leyes procesales, no es susceptible de recurso extraordinario. » (Fallos, t. 111, pág. 109.)

Pero estos principios, perfectamente justos cuando se aplican a casos únicamente regidos por leyes procesales, no son de estricta aplicación cuando en el pleito se han ventilado derechos y garantías de índole federal. Estos derechos, en todo cuanto puedan ser afectados por

las resoluciones referentes a los procedimientos, están garantizados por la justicia nacional, encargada de velar porque ellos sean respetados por los tribunales locales, según la categórica disposición del artículo 31 de la constitución nacional. No está, por consiguiente, dentro de la mente de la ley, que pueda privarse a un litigante que invoca un derecho de esta naturaleza, de la facultad de hacer revisar por la corte suprema de justicia de la nación la sentencia que lo desconozca, por el hecho de que ella se funde en leyes locales y aún cuando esas leyes no hayan sido impugnadas como contrarias a la constitución nacional. Interpretando arbitraria o erróneamente una ley de procedimientos aunque sea constitucional, pueden los tribunales privar a un litigante de la defensa de sus derechos, y si cuando esos derechos se fundan en leyes locales o en los códigos comunes, la justicia nacional carece de jurisdicción para protegerlos, no sucede lo mismo cuando se trata de derechos fundados en las leyes nacionales, que pueden ser eficazmente amparados por medio del recurso extraordinario. En estos casos, la suprema corte debe conocer del recurso, y revi-

sar prolijamente la decisión recurrida, a los efectos de examinar si está legalmente fundada de acuerdo con las leyes que aplica.

La suprema corte ha declarado, sin embargo, en la causa del tomo 107, página 57, que el recurso extraordinario es improcedente, « si el auto apelado resuelve que hay cosa juzgada sobre la *excepción de incompetencia* que se deduce invocando el *fuero federal*, porque aquélla es una cuestión de procedimientos sobre la cual no puede pronunciarse la corte. » En las causas de los tomos 108, página 110; 110, página 444; 112, páginas 73 y 126; 113, página 427; 114, página 136; 115, página 11; 117, páginas 5 y 399; 118, página 294, y 121, pág. 273, la corte resolvió que la *cosa juzgada* es un punto sobre el cual no puede pronunciarse. Finalmente, en la causa del tomo 112, página 26, declaró improcedente el recurso contra la sentencia que rechaza la excepción de incompetencia por haber sido opuesta fuera de término. Se verá también más adelante, que cuando la sentencia recurrida se basa en puntos de hecho, la suprema corte declara improcedente el recurso, « por carecer de jurisdicción para revisar las

conclusiones de hecho a qué llegan las sentencias de los tribunales locales o inferiores de la nación ».

La doctrina que informa estas resoluciones, proviene a mi entender, de un punto de vista inaceptable sobre los fines a que responde la institución del recurso extraordinario. No se trata aquí de un recurso que se conceda con el objeto de uniformar la jurisprudencia en materia constitucional. Tal uniformidad, que sería muy conveniente, no está, por el contrario, asegurada por ninguna disposición legal. Y el recurso extraordinario nada tiene que ver con ella, desde que en caso de dos sentencias contradictorias sobre el mismo punto, procederá contra la que sea contraria al derecho, título, privilegio o exención invocado, y será improcedente respecto de la otra. Su objeto es bien distinto. Ha sido establecido para *proteger los derechos, títulos, privilegios o exenciones* fundados en la constitución, leyes o tratados de la nación. Para llenar su objeto, debe hacer que esos derechos sean respetados siempre que hayan sido invocados de conformidad con la ley.

¿ Puede sostenerse que una sentencia que re-

suelve en contra de quien se amparó en uno de aquellos derechos, no dé lugar al recurso, por la circunstancia de reconocerlo en apariencia, y estar fundada en razones de otro orden ? De ninguna manera. Las leyes nacionales deben primar sobre cualesquiera otras, y aunque su validez y eficacia sea reconocida, si no lo son los derechos que en ellas se fundan, habrá motivo suficiente para examinar si ellos han sido desconocidos con o sin razón. El recurso no sirve sólo para proteger la ley, sino también para asegurar los derechos que ella establece. Más aun : el reconocimiento expreso de la validez de la ley, nada significa, si se resuelve luego contra los intereses de quien se amparó en ella. Hay en tal caso motivos fundados para suponer que se ha querido eludir su cumplimiento, valiéndose de la facultad de interpretar las leyes locales con el fin de esquivar el contralor de la justicia nacional, apoyando la resolución en razones de procedimientos o en la apreciación de la prueba.

Sostengo, pues, que siempre que en un juicio se hayan debatido cuestiones de índole federal, capaces de originar el recurso extraordinario, la jurisdicción apelada de la suprema corte llega,

respecto de esas cuestiones, hasta poder examinar todos los fundamentos del fallo recurrido en lo que con ellas se relacione, aun cuando se basen en leyes cuya interpretación no daría por sí sola origen al recurso, como son las procesales, o en cuestiones de hecho.

§ 27. Cuestiones de hecho

La suprema corte nacional ha establecido en numerosos fallos, que si la sentencia recurrida se basa en fundamentos de hecho, no es susceptible del recurso extraordinario, y que si el recurso es procedente, no puede reverse las conclusiones de la sentencia apelada sobre los puntos de hecho que ella resuelve.

El tribunal ha declarado al respecto: « Es improcedente el recurso extraordinario, si lo único que se ha discutido son cuestiones de hecho. » (Fallos, t. 105, pág. 5; 115, pág. 277; 117, pág. 344 y 443.) « Es improcedente el recurso extraordinario deducido de hecho contra una sentencia que exime de responsabilidad o que condena a un ferrocarril, fundada en consideraciones de hecho, y no en la interpreta-

ción de la ley de ferrocarriles. » (Fallos, t. 102, pág. 353; 103, pág. 141 y 421; 108, pág. 162; 115, pág. 294; 118, pág. 28.) « Es improcedente el recurso extraordinario autorizado por el artículo 14 de la ley 48 contra una sentencia que resuelve la cuestión de si se ha infringido la ley de marcas y si se ha cometido un delito, y absuelve a los querellados fundándose en consideraciones de hecho. » (Fallos, t. 109, pág. 369.) « La alegación de no ser comerciante el concesionario de la marca, envuelve una cuestión de hecho que no es dable a la suprema corte resolver en un recurso de la naturaleza del autorizado por el artículo 6º de la ley número 4055, no obstante apoyarse aquélla en una ley especial del congreso, cual es la ley de marcas de fábrica. » (Fallos, t. 106, pág. 370.) « El rechazo de una demanda por falsificación de marca de fábrica fundado no en que no sea válido el título otorgado por la nación, sino en el hecho de la falsedad de sus enunciaciones, esto es que la mercadería que con ella se pretende proteger no responde a las enunciaciones del título, no da lugar al recurso del artículo 14 de la ley 48. » (Fallos, t. 109, pág. 50.) « Es

improcedente el recurso extraordinario deducido contra una sentencia que no ha desconocido en el caso la validez del artículo 222 del reglamento de ferrocarriles, ni el derecho fundado en el mismo, y que sólo se basa en la falta de prueba de la demora en el transporte alegada en la demanda. » (Fallos, t. 110, pág. 197.) « No procede el recurso extraordinario del artículo 14, ley 48, interpuesto contra una resolución que decide puntos de hecho, como ser el de que una empresa de ferrocarriles nacionales no puede invocar en su favor la ley 5315 para eximirse del pago de afirmados, porque no se ha comprobado que el pavimento que se le cobra corresponde al frente de terrenos ocupados por vías o construcciones de dicha empresa. » (Fallos, t. 114, pág. 423.) « Las conclusiones de una sentencia relativas a la manera cómo se efectuó la carga de una mercadería transportada por un ferrocarril, a los efectos de la responsabilidad de la empresa del punto de vista de lo establecido en el artículo 258 del reglamento de ferrocarriles nacionales, no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria del recurso autorizado por el artí-

culo 14 de la ley 48. Tampoco lo es, por ser un punto de hecho, la decisión de que a la mercadería en cuestión no es posible colocarla en la categoría de artículos frágiles. » (Fallos, t. 116, pág. 174.) « La apreciación de la prueba acerca de la existencia o inexistencia de los extremos requeridos para la caducidad de una patente, no constituye una cuestión de inteligencia de cláusula legal a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario. » (Fallos, t. 106, pág. 157.) « Las conclusiones de hecho de una sentencia que declara nulos los títulos de una marca de fábrica por considerar que se trata de locuciones que han pasado al uso general, y de signos que no presentan caracteres de novedad y especialidad, no pueden ser modificadas en un recurso extraordinario. » (Fallos, t. 99, pág. 371 ; 113, pág. 212.) « No corresponde a la suprema corte rever decisiones sobre puntos de hecho, en causas que no vienen a su conocimiento por la vía ordinaria de apelación. » (Fallos, t. 97, pág. 319.) « En los recursos previstos en el artículo 6° de la ley 4055, la suprema corte no puede rever las decisiones de las cámaras federales sobre puntos de hecho. » (Fa-

llos, t. 97, pág. 403). « En el recurso extraordinario la suprema corte no puede rever las decisiones sobre puntos de hecho. » (Fallos, t. 99, pág. 179; 101, pág. 98; 104, pág. 407; 107, pág. 401; 108, pág. 269; 113, pág. 270; 114, pág. 148; 115, pág. 385; 116, pág. 30.) Análogas resoluciones, en las causas de los tomos 108, página 282; 110, páginas 145 y 155; 114, página 9; 99, página 414; 117, página 182; 114, página 400; 117, página 261.)

En cuanto a los hechos invocados para probar el fuero federal, ha declarado la corte: « La resolución de los tribunales locales rechazando la excepción de incompetencia, por no haberse probado el hecho de la distinta nacionalidad de las partes en el cual se fundaba, no importa el desconocimiento de la ley nacional de jurisdicción, y por lo mismo, no procede contra ella el recurso ante la suprema corte. » (Fallos, t. 48, pág. 480.) « Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que rechaza el fuero federal invocado, fundándose en la falta de prueba de la distinta nacionalidad o vecindad de las partes. » (Fallos, t. 100, pág. 276; 114, pág. 26 y 402; 115, pág. 346; 117, pág. 186.)

« La prueba de un hecho invocado en autos para fundar el fuero federal, es ajena al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 113, pág. 89.) « Las conclusiones de hecho a que llega una sentencia referentes al domicilio o nacionalidad de los litigantes son ajenas al recurso extraordinario. » (Fallos, t. 118, pág. 236; 101, pág. 156; 111, pág. 84.) « La cuestión de si se ha probado o no la prórroga de jurisdicción por haberse aceptado tácitamente el fuero provincial es un punto de hecho ajeno al recurso. » (Fallos, t. 117, página 72.)

Aunque en el párrafo anterior he expresado mi opinión sobre este punto, en el sentido de que la jurisprudencia de la suprema corte sobre esta materia desvirtúa el alcance del recurso extraordinario, proporcionando a los tribunales locales un medio fácil de burlar el control de la justicia federal en los casos de violación de leyes nacionales, creo necesario insistir al respecto.

Tal jurisprudencia es doblemente peligrosa cuando se trata de resoluciones contrarias al privilegio del fuero federal, porque en primer lugar los tribunales locales están siempre inclinados a desconocer ese privilegio, en virtud de

prejuicios muy explicables, y en segundo lugar, porque opuesta la declinatoria, no puede decirse que el juicio esté radicado. Resulta así la anomalía de atribuirse eficacia a las decisiones de tribunales cuya jurisdicción no está reconocida ni declarada por la autoridad competente, que sólo sería la corte suprema cuando el interesado hubierre recurrido ante ella, sobre puntos de hecho de cuya apreciación depende la efectividad de los derechos regidos por las leyes nacionales de jurisdicción y de ciudadanía.

Sólo en un caso (t. 112, pág. 136), declaró la corte, con la disidencia de uno de sus ministros, que: « admitido por la corte suprema un recurso de apelación contra el fallo de una cámara federal que absuelve a un querellado por uso ilegal de una marca, el tribunal debe entrar a juzgar ampliamente el recurso, conociendo ya sea del hecho como del derecho cuestionado. » La doctrina de este fallo no ha prevalecido, y él ha quedado aislado en medio de la abundante jurisprudencia contraria de que he hecho mérito.

Las observaciones que he formulado contra la jurisprudencia de la corte en los puntos obje-

tados, tienen apoyo en la elevada autoridad de la suprema corte de los Estados Unidos, cuyas decisiones constitucionales forman parte de las fuentes de nuestro derecho público. Aquel alto tribunal ha establecido que las decisiones de los tribunales locales sobre las cuestiones de hecho comprendidas en sus sentencias, no están sujetas a la revisión de la suprema corte en el recurso extraordinario (*writ of error*) que se interpone contra dichas sentencias. Pero siendo bien entendido, que esta regla general no es aplicable cuando se trata de hechos o cuestiones de hecho que son esenciales para resolver la cuestión federal que origina el recurso.

Así, ha declarado que: « Cuando toda la prueba forma parte del expediente en el tribunal local y es traída a la corte, *ésta puede revisar la decisión de aquel tribunal tanto en el derecho como en los hechos, en la extensión que pueda ser necesaria para determinar la validez del derecho asegurado por la ley del congreso.* » (Republican River Bridge C^o v. Kansas P. R. C^o, 92 U. S. 315); « una cuestión legal promovida *sobre el punto controvertido de no existir ninguna prueba para sustentar una conclusión de hecho con arre-*

glo a la cual un derecho federal ha sido desconocido, está sujeta a revisión en la suprema corte federal por recurso extraordinario (writ of error) contra el fallo de un tribunal de estado, si la prueba existe en autos. » (Cresvill v. Grand Loge Kof P., 225 U. S. 246.)

El mismo tribunal sentó la verdadera doctrina, que expuse en el parágrafo anterior, en la siguiente sentencia: « *La prueba debe ser examinada por la suprema corte federal en el recurso contra la sentencia de un tribunal de estado, en la extensión necesaria para asegurar al recurrente la ventaja de los derechos federales que alega.* » (North Carolina R. C^o v. Zachary, 232 U. S. 248.)

Este principio ha sido nueva y categóricamente consagrado en un reciente fallo de 25 de mayo de 1914, que establece: « La suprema corte federal, al revisar la sentencia de un tribunal de estado, *debe examinar la prueba* si las conclusiones del tribunal de estado respecto de ella son inadecuadas a efecto de determinar *qué hechos pueden ser razonablemente deducidos de ella que suministren una base para los derechos federales alegados.* » En esta causa, el juez Pit-

ney decía: « Aunque en los casos ordinarios estamos ligados por las conclusiones del tribunal de estado de última instancia en lo relativo a las cuestiones de hecho, apenas sería necesario decir que dicho tribunal no puede, por la omisión de decidir las cuestiones básicas de hecho, privar a un litigante de la garantía de un derecho federal, como tampoco podría hacerlo estableciendo conclusiones que carecieran por completo de fundamento en la prueba producida. *Y así como esta corte cuando su jurisdicción apelada se ha invocado correctamente y toda la prueba viene ante ella, examina si fuere necesario para resolver una cuestión federal, el expediente entero, a objeto de apreciar si existe prueba para fundar las decisiones del tribunal de estado;* del mismo modo es nuestro deber, en ausencia de resoluciones adecuadas, examinar la prueba a objeto de determinar qué hechos pueden ser razonablemente deducidos de ella, que sirvan de base al derecho federal alegado. *Southern Pacific Company v. Mary R. Schuyler et. al., 227 U. S. 601.* » (*Carlson v. Washington ex rel Curtiss, 234 U. S. 103.*)

Me limito a citar los fallos que anteceden,

entre los muchos dictados en el mismo sentido, porque siendo recientes y explícitos, ellos bastan para dejar demostrado que la jurisprudencia americana reconoce positivamente a la suprema corte la facultad de apreciar en los recursos extraordinarios tanto los hechos como el derecho, en la medida que sea necesario para resolver sobre el derecho federal alegado, como sostengo que debe hacerse entre nosotros.

§ 28. Resolución del recurso

Analizados como quedan los elementos que debe reunir una sentencia para que contra ella proceda el recurso extraordinario, sólo resta examinar los procedimientos propios de esta materia, que serán objeto del capítulo siguiente, y el contenido de la sentencia que con motivo de él se pronuncie por la suprema corte.

Esta sentencia sólo puede versar sobre las « cuestiones federales » debatidas en las instancias inferiores y resueltas en contra de las pretensiones del que se amparó en las leyes que dieron origen a la interposición del recurso.

Debe dividirse, pues, la sentencia recurrida,

a los efectos del fallo, distinguiéndose entre los puntos « federales » y los « no federales ». Sólo de los primeros, y en tanto que los derechos del recurrente fundados en leyes nacionales hayan sido desconocidos, puede conocer la suprema corte. Pero respecto de esos puntos su jurisdicción es absoluta, y tiene facultad para revisar y fallar nuevamente todas las cuestiones que con ellos se relacionen, aún cuando necesite para ese fin interpretar las leyes comunes o locales o apreciar la prueba producida para fundarlos.

La suprema corte ha establecido, claramente, esta división entre los puntos que pueden ser materia de su pronunciamiento en el recurso extraordinario. Así ha declarado: « En el recurso extraordinario la corte suprema no puede tomar en consideración otras disposiciones de la constitución, tratado o ley federal, que las que fueron invocadas en las instancias inferiores y desconocidas en la sentencia de que se recurre. » (Fallos, t. 118, pág. 292; 119, pág. 112.) « La corte no está llamada a revisar las decisiones de los tribunales locales, debiendo circunscribirse, en el recurso extraordinario, al examen de los fundamentos que se *relacionan directamente* con

el punto materia del recurso. » (Fallos, t. 114, pág. 97 y 104.)

Se ha visto en otro lugar, que el tribunal ha ido demasiado lejos por esta vía, dando en muchos casos por firmes las resoluciones de los tribunales locales, aun sobre puntos *directa e inmediatamente relacionados* con las cuestiones federales planteadas. En los párrafos anteriores a los cuales me refiero, está citada la abundante jurisprudencia sobre la materia, acompañada de las observaciones que su estudio me ha sugerido. Se hace, por consiguiente, innecesario volver sobre lo expuesto anteriormente.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos relativos al recurso extraordinario pueden considerarse en varias situaciones distintas, como ser: cuando se introduce al juicio la cuestión federal cuya decisión en contrario origina la apelación ante la corte suprema; durante la substanciación de la causa en los tribunales locales o inferiores de la nación que conocen de ella, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva; cuando se hace en este tribunal la interposición del recurso; y cuando, concedido o denegado éste por el tribunal ante el cual se interpone, se lleva el caso a conocimiento de la corte suprema, hasta su resolución final.

En las primeras dos situaciones, no hay reglas especiales ni uniformes de procedimiento

para los trámites de la cuestión federal que se plantea, porque ella no constituye una articulación o incidente separable de lo principal, sino una defensa de fondo paralela a todas las demás que los litigantes hacen valer en la litis. Su tramitación es pues la misma del juicio, con arreglo a las leyes locales o nacionales que rijan en la jurisdicción en que la cuestión federal se promueve.

Lo único que debe tenerse presente con respecto a esas situaciones, son las reglas que quedan expuestas en el § 14 del capítulo anterior, sobre la forma y oportunidad de plantear la cuestión federal. Fuera de esas reglas fijadas por una abundante jurisprudencia, no existen otras exclusivamente aplicables a los trámites ante los tribunales locales o inferiores, quedando subordinado cada juicio a la ley de procedimientos que le corresponda, en todas aquellas de sus disposiciones que no hayan sido impugnadas en el mismo juicio, como repugnantes a la constitución, leyes o tratados.

En la tercera situación, rige ya un procedimiento peculiar para interponer el recurso extraordinario, cualquiera que sea el tribunal ante

el cual se deduzca. Apartándose de la prescripción general de las leyes de procedimientos que prohíbe *fundar las apelaciones*, el artículo 15 de la ley número 48, dispone que: « cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo 14 de dicha ley, deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo, que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa. »

Con respecto a esta disposición, el procurador general de la nación observaba, en la causa del tomo 15, página 174: « este recurso está mal redactado en la forma, porque ni en el escrito de apelación, ni en la expresión de agravios se muestra la repugnancia alegada ni aún se citan los artículos de la constitución a que el apelante se refiere »; y la corte suprema ha decidido: « No apareciendo de la propia exposición del recurrente, haberse violado el artículo constitucional en que se funda el recurso interpuesto, no puede éste concederse. » (Fallos, t. 63, pág. 102.) « Los recursos a la suprema corte de

las sentencias de los tribunales ordinarios deben ser fundados en citas concretas y con aplicación al caso resuelto. No basta hacer referencias generales a la constitución y leyes del congreso. » (Fallos, t. 85, pág. 395.) « No encontrándose el recurso formulado en los términos del artículo 15 de la ley de jurisdicción y competencia, pues no se expresa por el recurrente cuál sea la disposición legal o de tratados que haya sido afectada por la sentencia, se declara improcedente. » (Fallos, t. 94, pág. 319.) « El recurso autorizado por el artículo 14 no procede, cuando al ser interpuesto no aparece fundado. » (Fallos, t. 109, pág. 82.) « No apareciendo de la propia exposición del recurrente que el caso se encuentra comprendido en el artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia, el recurso que en él se funda es improcedente. » (Fallos, t. 95, pág. 374.) « No llenando el escrito de apelación los requisitos del artículo 15, ley 48, no hay lugar a la procedencia del recurso extraordinario. » (Fallos, t. 118, pág. 373.) « Observándose *prima facie* que no hay resolución contraria al derecho invocado, no procede el recurso. (Fallos, t. 83, pág. 325; y en el mismo sentido,

t. 92, pág. 167, y 94, pág. 20.) « No apareciendo de la propia exposición del recurrente que haya fundado en ninguna disposición de ley especial del congreso el derecho que pretende tener, no procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 117, pág. 361.) « La simple interposición del recurso de apelación en una cámara federal, no puede significar la del extraordinario. » (Fallos, t. 118, pág. 171, 373 y 447; 119, pág. 12.)

Mientras que la jurisprudencia norteamericana ha establecido que para concederse esta jurisdicción apelada, no es necesario que se muestre que el tribunal del estado ha errado en su decisión (Furman v. Nichol, 8 Wallace 44), entre nosotros la suprema corte desecha los recursos siempre que a primera vista aparece que la decisión apelada es justa. Es así como ha resuelto que, « resultando que el recurrente ha sido oído ante la dirección de ferrocarriles, y que por consiguiente no se ha resuelto contra la garantía constitucional que invoca del artículo 18, no procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 104, pág. 128.)

En los procedimientos ordinarios de la justi-

cia federal y local, el recurso de nulidad puede interponerse conjuntamente con el de apelación a voluntad de la parte agraviada; pero cuando se deduce el extraordinario, el recurso de nulidad es improcedente, estando declarado que « el artículo 6° de la ley 4055 no autoriza recursos de nulidad para ante la corte suprema. » (Fallos, t. 112, pág. 121 y 203; 113, pág. 212; 115, pág. 80 y 89; 116, pág. 20, 30 y 339; 117, pág. 179, 366 y 399; 118, pág. 51, 255 y 377; 119, pág. 308; 120, pág. 267; 121, pág. 80 y 140.)

El término para interponer el recurso extraordinario ante los tribunales locales o inferiores de la nación, es el de cinco días hábiles que fija el artículo 208 de la ley número 50 para las apelaciones ante la corte suprema. Así, ésta ha resuelto: « El término para apelar para ante la suprema corte de una resolución de un superior tribunal de provincia, es de cinco días hábiles. Vencido este término, debe desestimarse el recurso. » (Fallos, t. 98, pág. 424; 113, pág. 377; 114, pág. 128; 116, pág. 142; 120, pág. 357; 121, pág. 60, 153 y 263.) « El auto de un tribunal de provincia no ha-

ciendo lugar al recurso de *habeas corpus*, que no ha sido recurrido en tiempo hábil, no es susceptible de recurso ulterior. » (Fallos, t. 46, pág. 348.) « Es improcedente el recurso extraordinario cuando la apelación para ante la suprema corte se ha interpuesto después de estar vencido el término legal para ello. » (Fallos, t. 100, pág. 312.) « Estando consentida, por no haberse interpuesto en tiempo recurso alguno, la resolución de la cámara, no procede el recurso extraordinario. » (Fallos, t. 117, pág. 36 y 146.) « El término para interponer el recurso de apelación para ante la corte suprema de las resoluciones de los tribunales superiores de provincia, que autoriza el artículo 14 de la ley 48, es fatal, y por lo tanto su mero vencimiento lo hace inadmisibile » (Fallos, t. 94, pág. 242): se pretendía en el caso, que el término no había vencido por haber estado pendiente un recurso ante la suprema corte provincial. « El término para interponer el recurso extraordinario autorizado por los artículos 14 y 15 de la ley 48 y 6° de la ley 4055, corre desde que se notificó la respectiva resolución definitiva y no se suspende por los recursos que se entablen

ante otros tribunales locales sin competencia para admitirlos y substanciarlos, según la inteligencia que éstos dan a sus leyes procesales. » (Fallos, t. 103, pág. 191.) « El término para interponer el recurso extraordinario del artículo 14, ley 48, es fatal y corre aunque medie un pedido de aclaración o rectificación de algún error. (Fallos, t. 114, pág. 209, 121 pág. 334.) « Las resoluciones de los jueces de paz en los casos del artículo 592 del código de procedimientos para la capital (juicios de desalojo), tienen fuerza de definitiva a los efectos del recurso extraordinario. En consecuencia, éste debe ser interpuesto ante dichos jueces directamente. El recurso ordinario de apelación ante el juez de primera instancia no interrumpe en tales casos el término para apelar ante la corte, por lo que este recurso es extemporáneo deducido de hecho sin haberse interpuesto previamente ante el juez de paz dentro del término. » (Fallos, t. 108, pág. 215 y 221.)

Ha resuelto igualmente la corte suprema: « El pago de impuestos creados por leyes provinciales, debe ser *previo* a la cuestión sobre constitucionalidad de las mismas, y mientras

no se verifique, no debe concederse el recurso del artículo 14 de la ley sobre competencia de los tribunales federales.» (Fallos, t. 61 pág. 308.)

En la cuarta situación, si procediese el recurso extraordinario, y la sentencia de la cámara o tribunal contra la que se da el recurso fuere confirmatoria de la de los juzgados de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución, dando fianza de responder de lo que percibiese, si el fallo fuese revocado por la suprema corte. Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que la hubiese dictado, y quedará de hecho cancelada si la sentencia recurrida fuese confirmada por la corte suprema. El fisco nacional estará exento de la referida fianza (art. 7° de la ley número 4055).

Si el superior tribunal ante el cual se deduce el recurso extraordinario, lo denegare, u omitiese concederlo, el recurrente podrá interponer *de hecho* ante la corte suprema el recurso de queja por apelación denegada que autorizan los artículos 229 y correlativos de la ley nacional de procedimientos. Este recurso sólo procede en caso de no concederse el recurso extraordinario

por el tribunal local o inferior de la nación, y no puede deducirse ante la suprema corte sin ese requisito. Se ha resuelto al respecto : « Sólo puede recurrirse de hecho, después de interpuesto y denegado el recurso ante el juez o tribunal local. » (Fallos, t. 77, pág. 224; 115, pág. 29). « No resultando que se haya interpuesto recurso alguno para ante la suprema corte contra la sentencia de que se hace mérito, y no habiendo denegación de ningún recurso, no se puede recurrir de hecho ante este tribunal. » (Fallos, t. 100, pág. 203 y 311; 121, pág. 34.)

El plazo para interponer el recurso de queja es de tres días fatales e improrrogables, con la ampliación que corresponda a la distancia según el artículo 231 de la ley número 50 : dicho plazo como todos los judiciales, se cuenta desde la notificación del auto denegatorio. Así lo ha declarado la corte en las causas de los tomos 113 página 34; 114, página 440; 117, página 5; 118, página 173; 120, páginas 88, 292, 349 y 335.

El recurso de queja debe contener una exposición de los motivos que se tuvieron para interponer el recurso extraordinario, citándose las

disposiciones que se dice desconocidas por la sentencia. La suprema corte ha resuelto que « con arreglo al artículo 15 de la ley 48 debe indicarse al interponer el recurso de hecho, el artículo o artículos de la constitución nacional o ley del congreso que se dice violados. » (Fallos, t. 109, pág. 328.)

Cuando el tribunal ante el cual se interpone el recurso lo concede, o cuando proveyendo en el recurso de hecho, la corte declara mal denegada la apelación, el recurso extraordinario pasa a substanciarse por sus trámites propios. La ley número 50 de 14 de septiembre de 1863 no hacía diferencias entre la substanciación de esta apelación y las demás ordinarias que se conceden para ante la corte, — pero la ley 4055 ha simplificado la tramitación en forma apreciable. La suprema corte ha establecido que : « El trámite correspondiente a las causas traídas por apelación ante la corte suprema, establecido por la ley nacional de procedimientos de 1863, ha sido modificado por el artículo 8° de la ley 4055. » (Fallos, t. 118, pág. 292.) Con arreglo a este artículo, ha quedado suprimida la expresión de agravios y contestación, la prueba en

los casos en que era admisible, y el informe *in roce*. El nuevo procedimiento es sumario: recibido el expediente por la corte suprema, se dicta la providencia de autos, y las partes pueden dentro de los diez dias comunes e improrrogables siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar una memoria que se mandará agregar a los autos, quedando sin más trámite la causa conclusa para definitiva.

Si el recurso ha sido concedido, la resolución sobre su procedencia debe reservarse después de oído el procurador general de la nación, hasta la sentencia definitiva. (Fallos, t. 65, pág. 378.)

Si se tratase de un recurso denegado, y el tribunal tuviese los autos a la vista, como generalmente ocurre, pues son remitidos por vía de informe, puede la corte adoptar dos temperamentos distintos al declarar la procedencia del recurso. En primer lugar, puede mandar poner el expediente en la oficina a los efectos del referido artículo 8° de la ley de 11 de enero de 1902; y en segundo lugar, si se considerase suficientemente ilustrada con el debate ante los tribunales inferiores, puede dictar sin más trámite sentencia definitiva.

Este procedimiento expeditivo no deja de ofrecer inconvenientes, pues restringe los medios de defensa que la ley acuerda a las partes, sucediendo como sucede a menudo, que las defensas de carácter constitucional se plantean sucintamente ante los tribunales originarios en razón de su evidencia, o por haberse opuesto en carácter subsidiario atribuyendo mayor importancia a otros argumentos o a la apreciación favorable de la prueba, y confiando en el derecho de ampliarlas en la memoria que la ley permite. La corte suprema se ha inclinado, últimamente, a adoptar este trámite simplificado, obra de la jurisprudencia porque ninguna ley lo autoriza, sobre todo en los casos en que confirma la sentencia apelada; y ante las protestas de algunos litigantes, ha declarado: « En los recursos de hecho por apelación denegada, la corte suprema tiene establecido en varios fallos que, a fin de evitar a los litigantes mayores gastos con alegaciones inútiles sobre puntos de derecho ya debatidos en las instancias inferiores, puede declarar procedente el recurso, y decidir simultáneamente el asunto controvertido. » (Fallos, t. 119, pág. 112.)

Por lo que toca al contenido de la decisión de la corte suprema en el recurso extraordinario, el artículo 17 de la ley 48 dice que cuando el tribunal revoque la sentencia apelada, hará una declaratoria sobre el punto disputado y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolverá sobre el fondo, y aún podrá ordenar la ejecución, especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón. El alcance de esta disposición legal con respecto al carácter y amplitud de la jurisdicción de la corte suprema al decidir el recurso, ha quedado examinado en el capítulo anterior, y creo innecesario volver sobre él.

Las sentencias de la corte suprema en los recursos extraordinarios no admiten recurso alguno que no sea el de aclaración, deducido dentro de tercero día (artículo 242 de la ley nacional de procedimientos). El recurso de revocatoria no es por consiguiente admisible, ni el de revisión, que « sólo procede en las causas de jurisdicción originaria. » (Fallos, t. 91, pág. 169 y 214.) La suprema corte ha declarado: « La resolución de la corte no haciendo lugar a un recurso extraordinario interpuesto de hecho,

no es susceptible de revocatoria. » (Fallos, t. 109, pág. 251 y 328; 110, pág. 117.) « Contra las sentencias definitivas de la corte no procede el recurso de revocatoria. » (Fallos, t. 97, pág. 39; 115, pág. 29; 119, pág. 12; 120, pág. 331.)

BIBLIOGRAFÍA

Fallos de la corte suprema de justicia de la nación. Edición oficial.

Leyes nacionales. Colección Supeña.

United States Supreme Court Reports. Lawyers edition.

FLORENTINO GONZÁLEZ, *Lecciones de derecho constitucional.* París, 1871.

JOSÉ MANUEL ESTRADA, *Derecho constitucional.* Buenos Aires, 1902.

LUCIO V. LÓPEZ, *Curso de derecho constitucional.* Buenos Aires, 1891.

JOAQUÍN V. GONZÁLEZ, *Manual de la constitución argentina.* Buenos Aires, 1897.

AGUSTÍN DE VEDIA, *Constitución argentina.* Buenos Aires, 1907.

MANUEL A. MONTES DE OCA, *Derecho constitucional.* Buenos Aires, 1910.

ARÍSTIDES A. MILTON, *A constituição do Brazil.* Río de Janeiro, 1898.

The Federalist. Philadelphia, 1909.

The Federalist. Edición francesa. París, 1902.

The Federalist. Edición española. Buenos Aires, 1887.

Compiled Statutes of the United States. St. Paul, 1902.

GOULD and TUCKER, *Notes on the Revised Statutes of the United States.* Boston, 1889.

Ruling Case Law. Rochester, 1915.

J. W. PASCHAL, *La constitución de los Estados Unidos explicada y anotada*. Traducción Quiroga. Buenos Aires, 1888.

JOSEPH STORY, *Comentario abreviado sobre la constitución de los Estados Unidos*. Traducción Calvo. Buenos Aires, 1888.

JOSEPH STORY, *Comentario abreviado sobre la constitución de los Estados Unidos*. Edición francesa. París, 1845.

ALEXIS DE TOCQUEVILLE, *De la démocratie en Amérique*. París, 1868.

JAMES BRYCE, *La république américaine*. París, 1902.

EDOUARD DE LABOULAYE, *Histoire des États-Unis*. París, 1867.

J. B. ALBERDI. Obras completas.

D. F. SARMIENTO. Obras completas.

JOSEPH STORY, *Commentaries on the constitution of the United States*. Boston, 1891.

J. R. TUCKER, *The constitution of the United States*. Chicago, 1899.

J. S. CLARK HARE, *American constitutional law*. Boston, 1889.

DAVID K. WATSON, *The constitution of the United States*. Chicago, 1910.

WILLIAM A. SUTHERLAND, *Notes on the constitution*. San Francisco, 1904.

THOMAS M. COOLEY, *Constitutional limitations*, 6ª edición. Boston, 1890.

C. G. TIEDEMAN, *State and federal control of persons and property in the United States*. St. Louis, 1900.

HENRY CAMPBELL BLACK, *Constitutional law*. St. Paul, 1897.

JAMES LOVE HOPKINS, *The judicial code*. Chicago, 1911.

ROGER FOSTER, *Federal practice*. Chicago, 1901.

JAMES KENT, *Commentaries on American Law*. Boston, 1884.

FRANCIS WHARTON, *Commentaries on American Law*. Philadelphia, 1884.

EDWIN COUNTRYMANN, *The Supreme Court and its appellate power*. Albany, 1913.

C. STUART PATTERSON, *The United States and the States under the constitution*. Philadelphia, 1904.

BURGESS, *Political science and comparative constitutional law*. Boston, 1893.

H. VON HOLST, *Constitutional history of the United States*. Chicago, 1889.

JOSEPH P. COLTON, *Constitutional decisions of John Marshall*. New York, 1906.

H. L. CARSON, *A history of the Supreme Court of the United States*. Philadelphia, 1904.

WALTER A. SHUMAKER, *The cyclopedic law dictionary*. Chicago, 1912.

HENRY C. BLACK, *A law dictionary*. St. Paul, 1910.

JOHN BOUVIER, *Law dictionary*. 1897.

A. S. CLARK, *Australian constitutional law*. Melbourne, 1901.

W. H. MOORE, *The constitution of the commonwealth of Australia*. Melbourne, 1910.

Diario de sesiones de la Convención del estado de Buenos Aires. Buenos Aires, 1860.

E. B. ANDREWS, *The history of the last quarter century in the United States*. New York, 1897.

J. F. DILLON, *John Marshall : life, character, and judicial services*. Chicago, 1903.

AUGUSTE MOIREAU, *Histoire des États-Unis*. Paris, 1892.

J. A. SPENCER, *Historia de los Estados Unidos*. Barcelona, 1868.

Lawyers Reports Annotated. Rochester, 1888-1915.

Cyclopaedia of law and procedure. New York, 1901-1914.

American Digest. Century and decennial edition.

W. C. ANDERSON, *Dictionary of law*. Chicago, 1913.

26 AGO 1992

ÍNDICE

ADVERTENCIA	5
Introducción. Organización del poder judicial.....	7
Capítulo I. Teoría del recurso extraordinario.....	31
Capítulo II. Disposiciones legales relativas al recurso extraordinario.....	49
Capítulo III. Procedencia y condiciones del recurso extraordinario	63
§ 1. Consideraciones generales.....	63
§ 2. Constitucionalidad del recurso.....	65
§ 3. Condiciones generales del recurso.....	66
§ 4. Caso contencioso.....	68
§ 5. Cuestión federal	76
§ 6. Pronunciamiento inoficioso.....	80
§ 7. Sentencia definitiva	88
§ 8. Juicios contencioso-administrativos.....	102
§ 9. Juicios ejecutivos.....	105
§ 10. Sentencia denegatoria del fuero federal..	111
§ 11. Tribunales superiores.....	122
§ 12. Personas que pueden interponer el recurso.	134
§ 13. Monto del asunto.....	136
§ 14. Forma y oportunidad de plantear la cues- tión federal	137
§ 15. Relación entre el objeto del litigio y las cuestiones federales planteadas	149

§ 16. Resolución contraria.....	154
§ 17. Resolución implícitamente contraria.....	163
§ 18. Constitución nacional.....	167
§ 19. Tratados con las potencias extranjeras..	170
§ 20. Leyes dictadas por el congreso.....	172
§ 21. Códigos comunes.....	176
§ 22. Leyes de carácter local dictadas por el congreso	182
§ 23. Actos jurisdiccionales o de autoridad ejer- cidos a nombre de la nación.....	188
§ 24. Constitución y leyes de provincia.....	191
§ 25. Leyes, decretos o autoridades locales im- pugnados como repugnantes a la consti- tución, leyes y tratados de la nación...	193
§ 26. Leyes de procedimientos	199
§ 27. Cuestiones de hecho.....	214
§ 28. Resolución del recurso.....	224
Capítulo IV. Procedimientos	227
Bibliografía.....	243

